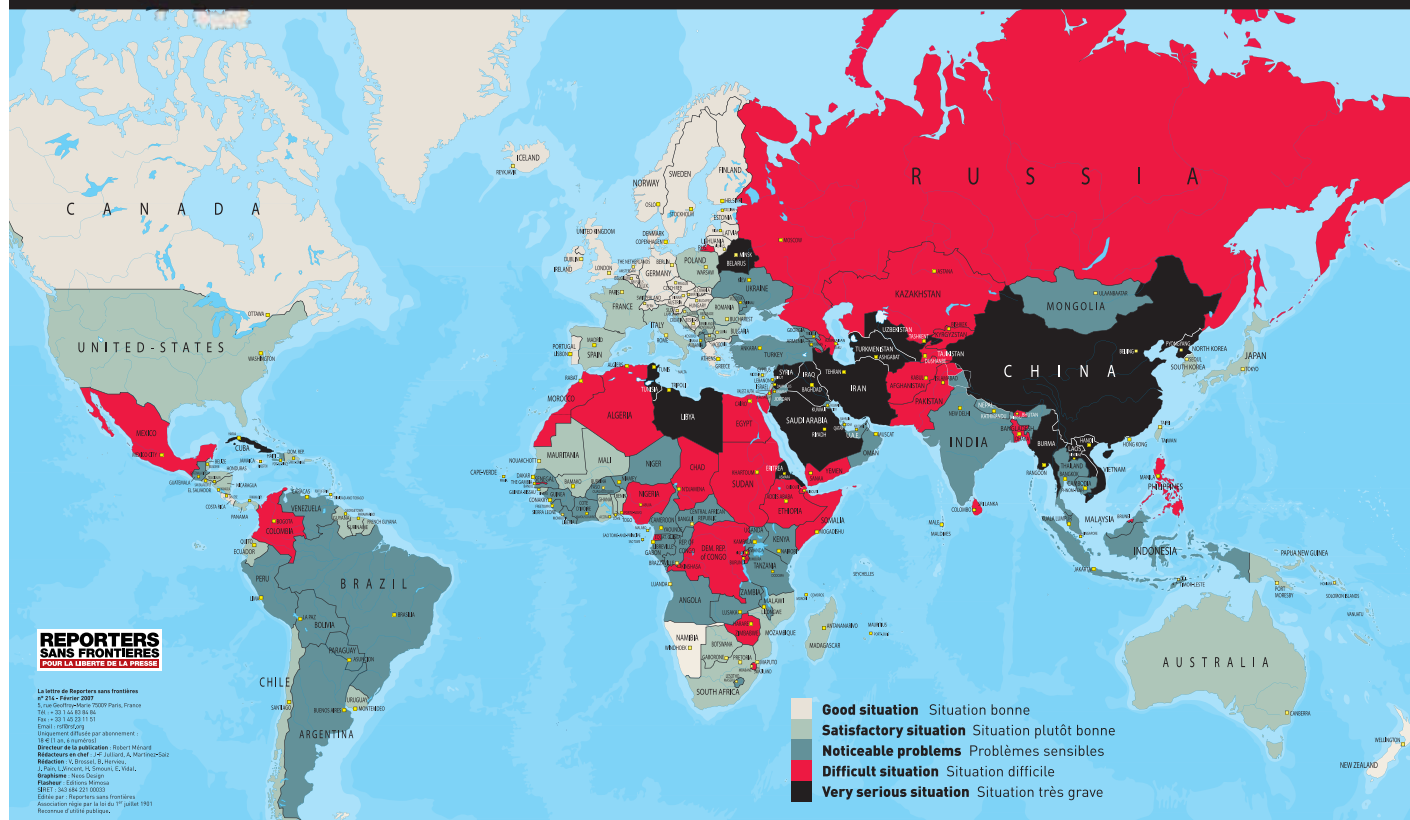


FREEDOM OF THE PRESS WORLDWIDE IN 2007



LA LIBERTAD DE LA PRENSA EN EL MUNDO EN 2007

Informe anual 2007

Los logotipos



reenvían a las listas de los predadores de la libertad de prensa y los enemigos de Internet, que están disponibles en el sitio de Reporteros sin Fronteras : www.rsf.org

Los datos estadísticos relativos a los países (superficie, población, idioma) se han sacado de L'état du monde. Ediciones La Découverte, París, 2006.

© Reporteros sin Fronteras 2007
5, rue Geoffroy Marie - 75009 Paris
Tél : (33) 1 44 83 84 84 - Fax : (33) 1 45 23 11 51
E-mail : rsf@rsf.org - Web : www.rsf.org

Coordinación : Jean-François Julliard
Compaginación : Véronique Vincent

INTRODUCCIÓN GENERAL	1
INTERNET	3
INTRODUCCIÓN - AFRICA	5
Eritrea	8
Etiopía	10
Mauritania	11
Nigeria	13
República Democrática del Congo	15
Ruanda	17
Somalia	19
Sudán	21
Zimbabue	23
INTRODUCCIÓN - AMERICAS	25
Argentina	28
Bolivia	29
Brasil	30
Canadá	32
Chile	33
Colombia	34
Cuba	36
Ecuador	38
Estados Unidos	39
Guatemala	41
Haití	42
Honduras	43
México	44
Paraguay	46
Perú	47
Uruguay	49
Venezuela	50
INTRODUCCIÓN - ASIA	51
Afganistán	54
Birmania	56
China	58
Corea del Norte	62
Filipinas	63
Nepal	65
Pakistán	67
Sri Lanka	69
Timor	71
Vietnam	72
INTRODUCCIÓN - EUROPA Y EX URSS	74
España	76
Francia	77
Rusia	79
Turkmenistán	81
Turquía	82
INTRODUCCIÓN - MAGHREB Y ORIENTE MEDIO	84
Argelia	87
Autoridad Palestina	89
Egipto	90
Irak	91
Irán	93
Israel	95
Líbano	96
Libia	97
Marruecos	98
Siria	99
Túnez	100

UNA PELIGROSA PUSILANIMIDAD

Más allá de las inquietantes cifras - que han alcanzado records - sobre todo relativas a los periodistas muertos o encarcelados, Reporteros sin Fronteras quiere dar la señal de alarma al final de un año 2006 marcado por la poca ambición, y a veces incluso la renuncia, que mostraron los países democráticos a la hora de defender en todas partes los valores que están destinados a encarnar.

Si hay que remontarse hasta 1994 - con el genocidio de Ruanda, la guerra civil en Argelia y el conflicto en la ex Yugoslavia - para encontrar un período tan mortífero para la prensa (en 2006 mataron a más de 110 profesionales de los medios de comunicación), el año que acaba de transcurrir estará sobre todo marcado por el incremento de abandonos, cobardías y compromisos, por parte de quienes cabía esperar que defendieran con constancia la libertad de expresión, y su corolario, la libertad de prensa. Aunque todo el mundo, o casi, se reclama de los derechos humanos, a la vista de los silencios y las prácticas de unos y otros cabe preguntarse quien tiene ahora la autoridad moral requerida para encarnar una defensa sin complacencia de estas libertades.

¿La Unión Europea se ha hecho oír? ¿Ha llevado, alto y fuerte, esos valores que se supone reúnen su veintisiete miembros? Podemos dudarlo. Mientras que la firma de sus acuerdos de cooperación está condicionada al respeto de las libertades, continúa callando sobre las masivas violaciones de las libertades de pensar, decir y escribir en los países que disfrutaban de su generosidad. Desde este punto de vista, el caso de Túnez, cuyo régimen no tolera la más mínima libertad de crítica, es el ejemplo más explícito.

Sobre el caso de las caricaturas, las instancias europeas ni siquiera garantizaron el servicio mínimo a Dinamarca - cuyas representaciones diplomáticas se habían convertido en blancos - ni a algunos periodistas, europeos o árabes, amenazados y detenidos. Como si, temiendo enemistarse con los regímenes árabes, Europa hubiera abdicado de cualquier deseo de hacerse oír.

Frente al presidente ruso, el valor tampoco ha estado de actualidad. Si, en el momento del asesinato de Anna Politkovskaya - el periodista número veintiuno al que han matado desde la llegada al poder de Vladimir Putin, en marzo de 2000 - todo el mundo emitió alguna declaración, el Parlamento Europeo se cuidó mucho de proponer la creación de una comisión de investigación internacional, como reclamaban numerosas organizaciones no gubernamentales. Se prefiere contemporizar con el Kremlin, uno de los grandes proveedores de energía de Europa...

En descargo de esta misma Europa hay que añadir que sus grandes Estados miembros hacen un doble juego frente a Bruselas: bloquean cualquier iniciativa que pueda molestar a sus "amigos", antiguas posesiones coloniales y socios económicos mientras que, cuando sus opiniones públicas les critican, convierten a las instancias europeas en el chivo expiatorio. Por citar el ejemplo de París, todavía tenemos en la memoria las imágenes del presidente Jacques Chirac condecorando a su homólogo ruso con la Gran Cruz de la Legión de Honor, o el ensordecedor silencio de la diplomacia francesa respecto a Eritrea, objeto de todas las atenciones del Quai d'Orsay, frente a una Etiopía, gran aliada de Estados Unidos... También en Francia, las primeras reacciones oficiales al día siguiente de las amenazas a Robert Redeker, fueron sorprendentes al poner de manifiesto la escasa solidaridad con este profesor de filosofía, que criticó al Islam y a algunos de sus adeptos.

Estados Unidos es ampliamente desconsiderado: el hecho de que mantenga detenido, al margen de toda legalidad, a un periodista de Al-Jazira en el campo de Guantánamo, los repetidos encarcelamientos de periodistas norteamericanos que se niegan a revelar sus fuentes, la ausencia de cualquier investigación seria sobre las condiciones en que algunos periodistas iraquíes han encontrado la muerte, alcanzados por disparos norteamericanos, el reiterado apoyo a regímenes que burlan masivamente los derechos de la prensa, son otras tantas razones para no confiar en Washington, que hoy está ampliamente descalificado para hablar de libertad de prensa.

En cuanto al nuevo Consejo de Derechos Humanos, que ha sucedido a una Comisión definitivamente desconsiderada, no se puede decir que haya pasado la prueba. Hemos asistido a las mismas mascaradas: los Estados criticados encuentran defensores, muy cuidadosos para que se les apoye cuando sean ellos quienes se encuentren en el banquillo. Por eso, se evita abordar seriamente las cuestiones que disgustan - Darfour, por ejemplo en 2006 - y señalar a algunos regímenes que, sin embargo, se encuentran entre los más liberticidas. En ese gran mercadeo, la mayoría de los países del Sur participan en lógicas y alianzas regionales, que terminan por descalificarlos.

Las otras grandes potencias - ya se trate de Rusia o de China - son unos predadores de la libertad de prensa de tal categoría que resultaría ingenuo, por no decir estúpido, esperar que jueguen un papel positivo en el terreno de la libertad de expresión. Todo lo más podemos esperar, en lo que concierne a Pekín, que la celebración de los Juegos Olímpicos en esa ciudad, en 2008, represente una oportunidad para conseguir algunas mejoras en las condiciones de trabajo de los periodistas, tanto chinos como extranjeros, así como y la liberación de algunos de los periodistas y ciberdisidentes que ahora están encarcelados, a condición de que los occidentales no se obsesionen únicamente con la conquista del mercado chino.

Hay muchas razones para preocuparse, y para ser pesimistas. Para citar tan sólo el ejemplo de América Latina, el asesinato de cerca de una decena de periodistas en México, en medio de una práctica de impunidad, los discursos cada vez más violentos del presidente venezolano Hugo Chávez, la incertidumbre sobre la salud del líder cubano y el hecho de que se mantenga detenidos en Cuba a más de una veintena de periodistas, la degradación de la situación en Bolivia, el país del sur que sin embargo hasta ahora era el mejor colocado en la clasificación que anualmente establece Reporteros sin Fronteras, son otras tantas señales intermitentes que deberían incitar a la comunidad internacional a una mayor vigilancia. Y eso que este continente está muy lejos de ser el peor, en términos de libertades. ¿Qué se puede decir de un África que pasa por conflictos étnicos, de clanes y religiosos, cada vez más mortíferos y llenos de amenazas para la prensa? ¿O de algunos países árabes, donde los periodistas se ven atrapados entre los regímenes autoritarios y unos movimientos - a veces insurreccionales o terroristas - que, en nombre de la religión o de la razón de Estado, rivalizan para silenciarles mejor? A esta lista, ya amplia, podrían agregarse otros países, sobre todo en Asia, que siguen maltratando, encarcelando y torturando, mientras el resto del mundo mira prudentemente hacia otro lado; pero dejémoslo aquí.

¿Alguna razón para ser optimistas? Pocas. Como no sea la aprobación por unanimidad, en el Consejo de Seguridad, de una resolución presentada por Francia y Grecia. Dedicada a los peligros que corren los periodistas en las zonas en guerra, recuerda las obligaciones fijadas por el derecho internacional y la necesidad de combatir la impunidad que frecuentemente acompaña a las exacciones cometidas contra la prensa. Aprobado por unanimidad, el texto será papel mojado si no se le da continuidad. Pero, que nadie se haga ilusiones sobre este tipo de grandes declaraciones; son la prueba de que, en el terreno de la política, la voluntad puede llegar hasta el fondo de las fuerzas de gravedad y las costumbres, tras las que se esconden con frecuencia los diplomáticos para no hacer nada. En octubre, Reporteros sin Fronteras presentó el primer borrador al Ministro de Asuntos Exteriores francés; la resolución se aprobó el 23 de diciembre. Tan solo dos meses entre ambas fechas. Con lo que se demuestra que podemos incluso trastornar la maquinaria de la ONU.

Eso demuestra que un Estado, o una institución internacional, puede "mover las líneas". Al margen, es cierto. Pero en esos márgenes se salvan vidas, se liberan hombres y mujeres. Un hermoso trofeo para algunas democracias - especialmente las del viejo continente - a las que con frecuencia les cuesta encontrar, y ofrecer a su juventud, nuevos horizontes, nuevas fronteras.

Robert Ménard
Secretario general

BIENVENIDO A LA ERA DE LAS DICTADURAS WEB 2.0

Hace todavía diez años, los opositores vietnamitas o tunecinos imprimían panfletos en sus sótanos. Después, los distribuían entre varios compañeros de lucha, en reuniones clandestinas. Los periódicos independientes se limitaban a unas cuantas fotocopias, en grapadas de cualquier manera, y distribuidas bajo manga. Ahora, las informaciones “subversivas”, o “contrarrevolucionarias”, circulan por Internet. Los disidentes, y los periodistas, se han convertido en “ciberdisidentes” y “ciberperiodistas”. Todo el mundo sabe crear un blog, organizar un chat, telefonar por Internet o utilizar un proxy para evitar la censura. Las nuevas tecnologías les permiten recibir y compartir informaciones, saltándose el control de las autoridades. La Web es también una bendición para las organizaciones especializadas en los derechos humanos. Cuando antes se necesitaban semanas, y a veces meses, para documentar el caso de un preso de conciencia, ahora las informaciones se consiguen con unos cuantos clics. Internet facilita la creación de redes, tanto para los adolescentes como para los militantes políticos. Desgraciadamente, aunque éstos últimos progresan y se procuran nuevas funciones ofrecidas por Internet, también los dictadores han entrado en la era de la Web 2.0...

Actualmente hay sesenta personas encarceladas, por publicar en el Net textos críticos sobre las autoridades. Con medio centenar de personas entre rejas China sigue siendo, de lejos, la mayor cárcel del mundo para los ciberdisidentes. Pero el método chino ha conseguido algunos émulos: en Vietnam hay cuatro personas detenidas por los mismos motivos, tres en Siria y una en Túnez, Libia e Irán. Los legisladores de esos países, y sus ciberpolicías, siguen atentamente las evoluciones tecnológicas. Cuando los correos instantáneos, del tipo MSN Messenger, se hicieron populares, China pidió a las empresas que comercializan el servicio que bloquearan algunas palabras clave. Es imposible hablar del Dalai Lama o de la independencia de Taiwán utilizando esas herramientas, porque los mensajes se bloquean automáticamente. Igualmente, frente al éxito de Youtube, China e Irán manifestaron rápidamente su voluntad de filtrar los vídeos difundidos por la Red. Demasiados contenidos “subversivos” para China, o “inmorales” para Irán. En Vietnam, disidentes y policías juegan ahora al ratón y el gato en los “chat rooms”. En octubre de 2006 detuvieron a tres internautas por hablar de democracia en Paltlak, un sitio norteamericano que permite organizar reuniones a distancia. Uno de ellos, Truong Quoc Huy, continuaba encarcelado el 1 de enero de 2007.

PROGRAMAS ESPÍA QUE FILTRAN LOS E-MAILS

Internet es un red que no se concibió para proteger la confidencialidad de las comunicaciones. Se trata de una herramienta rápida y relativamente fiable, pero también fácil de vigilar y censurar. Con el primer clic en la Red, el internauta deja rastros y revela informaciones sobre su identidad, sus gustos, sus costumbres. Son informaciones preciadas para las empresas, que las desmenuzan para dirigir mejor su publicidad. También son preciadas para los servicios de policía. Hace todavía algunos años, el método más eficaz para vigilar a un periodista era colocar a un agente de civil delante de su casa. Ahora, la vigilancia se hace con menor coste. Existen máquinas que espían, generan informes y bloquean automáticamente las conversaciones subversivas. Resulta menos caro y es más eficaz. En Cuba hay programas espía instalados en los ordenadores de los cibercafés. Cuando un internauta tiene la desgracia de teclear palabras prohibidas en un e-mail, como por ejemplo el nombre de un conocido disidente, recibe un mensaje de aviso indicándole que su texto se considera una “amenaza para la seguridad del Estado”. Pocos segundos después, su navegador de Web se cierra automáticamente...

Es cierto que no todos los predadores de la libertad de expresión son iguales frente a Internet. China ejerce un control implacable sobre las informaciones producidas y descargadas por los internautas. En efecto, dispone de enormes medios económicos para producir o comprar tecnologías de control de Internet, y contar con los servicios de batallones de chivatos y ciberpolicías. Y sobre todo, el país tiene el peso necesario para imponer sus puntos de vista a las empresas extranjeras que trabajan en el sector. Yahoo!, Google, Microsoft y también Cisco Systems, todas ellas se han avenido a censurar sus buscadores, para hacer desaparecer los sitios demasiado críticos de Pekín. Al hacerlo, facilitan inmensamente el trabajo de las autoridades chinas, ya que sus herramientas son las principales puertas de entrada en la Web. Si un sitio informativo no aparece referenciado en estos buscadores, sus artículos serán como botellas arrojadas al mar.

LOS GIGANTES DE INTERNET CÓMPlices

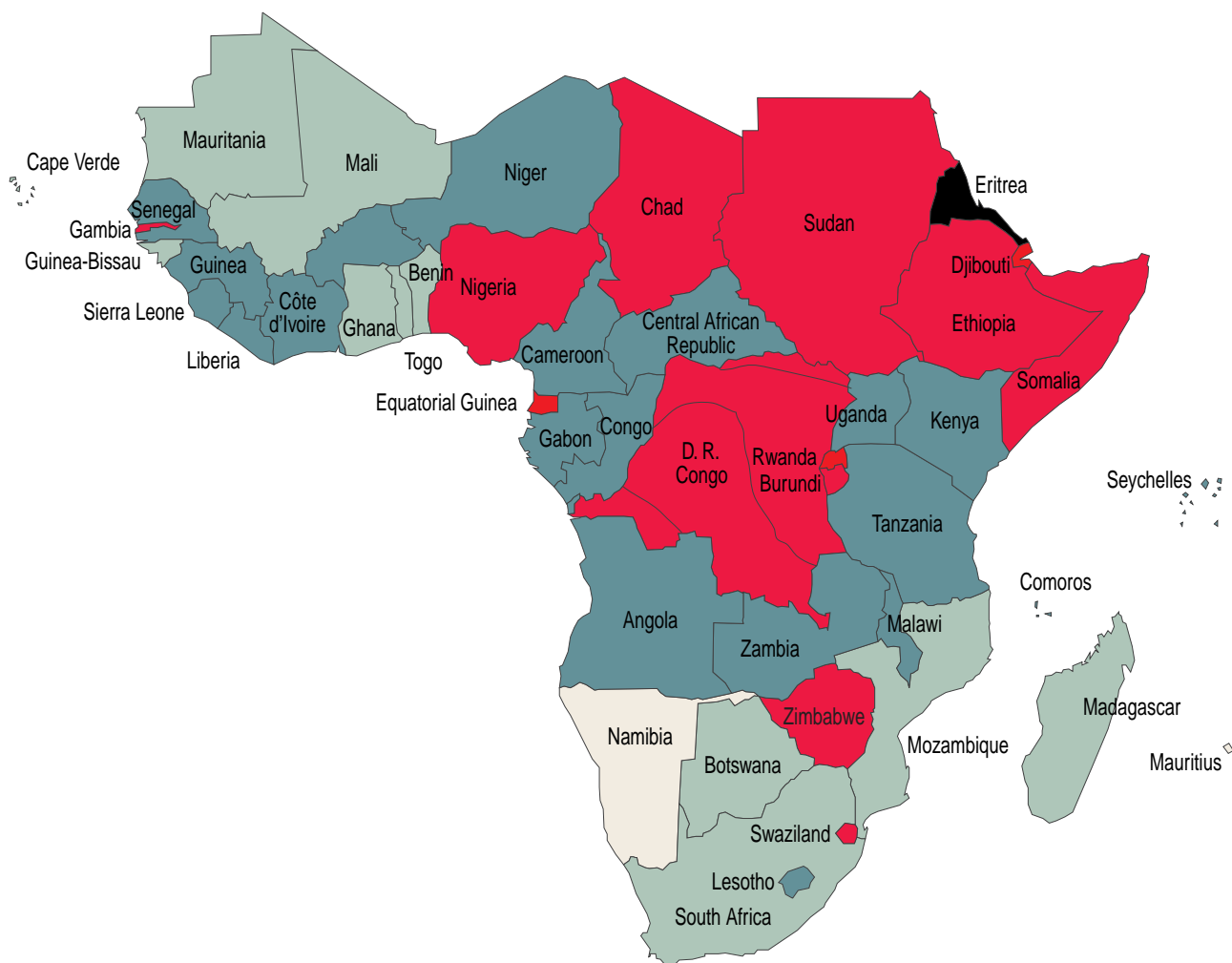
No todos los Estados disponen de medios para dictar sus reglas a las multinacionales norteamericanas. Pero todos los regímenes autoritarios se dedican ahora a la creación de sistemas de censura de la Red. Incluso algunos países del África Subsahariana filtran ahora Internet. El gobierno de Meles Zenawi, en Etiopía, bloquea desde mayo de 2006 los sitios y los blogs que le critican demasiado abiertamente. El Zimbabue de Robert Mugabe está discutiendo una ley que daría a las fuerzas de seguridad la posibilidad de interceptar las comunicaciones electrónicas, al margen de cualquier control judicial.

En Tailandia, una de las primeras decisiones tomadas por los militares, tras el golpe de Estado de septiembre de 2006, fue la de censurar los sitios informativos, incluso extranjeros, que criticaban la actitud del ejército.

Y cuando un dictador no dispone de medios para censurar eficazmente Internet, puede optar un método más radical: En Corea del Norte o en Turkmenistán nadie, o casi nadie, accede a la Red. Por otra parte, cuando fallece el déspota local, como fue el caso de Separmourad Niazov a finales de diciembre, su sucesor inicia el reinado con una declaración relativa al futuro de Internet. Signo de los tiempos, los autócratas hablan de la Web cuando quieren demostrar el carácter progresista de su régimen.

Frente a estas dictaduras 2.0, los internautas se organizan y hacen alardes de imaginación para evitar los filtros, y proteger su anonimato. Se apropian, o crean, nuevas tecnologías, codifican sus e-mails, utilizan las herramientas que todavía pasan por los radares de las ciberpolicias. El desarrollo de Skype, por ejemplo, ciertamente ha facilitado las comunicaciones entre los periodistas y sus fuentes, incluido Reporteros sin Fronteras. Se trata de un sistema particularmente eficaz porque está codificado y por tanto, a priori, es difícil de escuchar. Pero China ya ha firmado un acuerdo con esa sociedad para que bloquee algunas palabras clave. En estas condiciones ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras conversaciones siguen siendo confidenciales? ¿Cómo saber si Skype no ha permitido, o no va a permitir, que la policía china espíe a sus clientes? Pasar las nuevas tecnologías por la criba de la moral, entender los efectos secundarios, se ha convertido en una necesidad. Si las empresas y los Estados democráticos continúan pasándose la pelota, delegándose unos a otros sus responsabilidades éticas, pronto entraremos en la era de la vigilancia generalizada de las comunicaciones.

Julien Pain
Responsable del despacho Internet y libertad



Informe anual 2007

AFRICA

Despreciar a los periodistas, y a los tratados firmados, ha sido una constante en 2006 en muchos Estados africanos. Gobernar con desprecio y represión es, especialmente desde 2001, una costumbre de las autoridades de Eritrea, que mantienen al menos a 17 periodistas en secreto, en una de las espantosas cárceles diseminadas por el país. Después de que algunas informaciones fiables dieran cuenta de la probable muerte de tres de ellos, la reacción de las autoridades de uno de los países más cerrados del mundo fue lacónica: "No hay comentarios". Son muchos quienes, entre los últimos periodistas que quedan sin ser detenidos, han intentado huir de un país por el que algunos habían luchado en la guerra de independencia, y que ahora les trata como a enemigos. En la vecina Etiopía, una veintena de directores de periódicos, y sus redactores jefe, continúan encarcelados y acusados de "alta traición", tras apoyar la contestación de los resultados de las elecciones de mayo de 2005, junto a la oposición. Ni el clamor internacional, ni las protestas de sus aliados occidentales, han conseguido doblegar al gobierno del Primer Ministro Meles Zenawi, que intensificó las declaraciones desdenosas sobre los presos. Entre ellos, hay una mujer encinta que dio a luz un niño en la enfermería de la cárcel. En Somalia, los periodistas fueron molestos testigos de una guerra hecha de desinformación y mentiras. Se vieron detenidos, golpeados o asesinados sin miramientos. Con todo, los tribunales islámicos y el gobierno de transición se han atrevido a presumir de respetar la libertad de prensa, a pesar de dar un trato particularmente brutal a los medios de comunicación, con un desprecio que nada ha sido capaz de quebrantar.

Incluso en Kenia, la gran democracia del Este de África, un periódico fue el blanco del desprecio de un gobierno acorralado, teniendo que sufrir una espectacular irrupción de la policía y las declaraciones hostiles de varios oficiales. En Uganda, al comienzo del año, el gobierno de Yoweri Museveni mantuvo un estricto control informativo durante el período electoral, llegando incluso a expulsar a un corresponsal extranjero que, está claro, no podía ser otra cosa que un "peligro para el Estado". Fue también el desprecio por la información lo que llevó al gobierno de Sudán a acusar, por dos veces, de espías a algunos periodistas extranjeros que investigaban las masacres de Darfour. Rehénos durante algunas semanas de un Estado presionado por la comunidad internacional, solo les pusieron en libertad tras negociaciones políticas, demostrando la falta de peso de las acusaciones. Finalmente, Zimbabue sigue siendo uno de los países en que resulta extremadamente penosa la profesión de periodista. Porque, no contento con exigir que todos los profesionales estén registrados, fichados y vigilados por una comisión orweliana, el gobierno zimbabuense intenta por todos los medios silenciar a los medios de comunicación que no le cantan loas.

A veces, como en Tchad, la libertad de prensa es un logro que el gobierno no duda en cuestionar, cuando considera que esta en juego la seguridad nacional. Los patrones de la prensa tchadiana, teniendo que enfrentarse a movimientos rebeldes poco inclinados a la transparencia, también se ven obligados, a causa del estado de excepción, a publicar los periódicos cruzados de franjas negras que les impone la oficina de censura, según el leal entender de algunos funcionarios obedientes.

A veces, el desprecio se manifiesta en el poco caso que prestan a la prensa quienes detentan el poder político, o económico. Así, el período electoral fue muy difícil para la prensa de la República Democrática del Congo, ya afectada en el pasado por una legislación aberrante, aplicada con celo por una policía y una justicia gangrenadas por la corrupción. Hay que decir que algunos periodistas de Kinshasa no están exentos de reproches, cuando se pliegan servilmente a las órdenes de algunos generosos donantes preocupados por salpicar a sus adversarios, o cuando se transforman en soldaditos de los tenores de la política. Manipulable o vulnerable, el reportero es una presa fácil para los políticos ávidos de poder. Esta triste evidencia fue, también en 2006, la regla en Nigeria donde la policía, los servicios de inteligencia o, de manera general todos cuantos llevan uniforme, probaron un maligno placer al atacar físicamente a los periodistas que no les gustaban.

UNA IMPUNIDAD QUE PERSISTE

Por decimosegundo año consecutivo, en el oeste del continente, el presidente de la minúscula Gambia Yahya Jammeh, continuó tratando a los periodistas con una agresiva condescendencia. Sus todopoderosos servicios de inteligencia detuvieron y maltrataron al menos a diez periodistas, cerraron *manu militari* dos periódicos y amenazaron a todos quienes, de cerca o de lejos, estorbaron a su jefe absoluto, el Presidente de la República. Se trata simplemente de humillaciones suplementarias para la prensa gambiana, que está obligada a vivir y trabajar con el recuerdo del asesinato, que permanece impune, de su decaño Dayda Hydara, al que mataron en dudosas circunstancias en 2004. En Burkina Faso hace ocho años que los periodistas llevan luto por Norbert Zongo, asesinado junto con tres compañeros en 1998.

Mientras que numerosos elementos acusan a la guardia presidencial y al hermano del Jefe del Estado, François Comaporé, la justicia burkinesa, claramente influenciada, se atrevió en pleno verano, y casi a escondidas, a sobreseer al principal sospechoso, dejando constancia de la indiferencia de las autoridades ante la sed de justicia de la familia del periodista. En Costa de Marfil, los profesionales de los medios de comunicación que optaron por no alinearse con ninguno de los beligerantes, fueron sus blancos predilectos. En enero, y por segunda vez en dos años, los “Jóvenes Patriotas” atacaron los medios de comunicación públicos, para sostener y organizar sus motines en las calles de Abidján. Por intentar hacer de la radiotelevisión pública un ejemplo de servicio público, al periodista Kebe Yacouba le llenaron de insultos y amenazas, antes de que le despidiera brutalmente el presidente Laurent Gbagbo. La familia del periodista franco-canadiense Guy-André Kieffer, secuestrado en Abidján en 2004 y desaparecido desde entonces, vive en medio de este clima particularmente poco propicio para que avance la investigación de la justicia francesa.

Los gobiernos que a sabiendas mantienen en sus legislaciones penas de cárcel para los delitos de prensa pueden manifestar a su antojo el desprecio que sienten por los profesionales de la información. El fácil pretexto de la “responsabilidad” de los medios de comunicación, en el caso de que alguna vez se utilice de buena fe, ha enviado a la celda a más de un periodista, al acercarse a cuestionar la integridad de los poderosos. El ejemplo más sorprendente de esa desproporcionada lucha entre un periódico y un gobierno ocurrió este año en Níger, cuando el director y el redactor jefe de un periódico de oposición pasaron más de cuatro meses en la cárcel, por criticar la política del Primer Ministro. Cuando algunos gobiernos, secundados por la policía, la justicia y la administración penitenciaria, atacan a los periodistas, la lucha es desigual. En Burundi, en 2006, el jefe del partido presidencial Hussein Radjabu, un personaje poderoso y controvertido, no ocultó que detesta a las radios privadas, culpables según él de criticar sus abusos y las manipulaciones que ha instigado. Varios periodistas optaron por marcharse del país, para ponerse a buen resguardo. En cambio, cuatro profesionales de los medios de comunicación no tuvieron tiempo de darse cuenta de que, de la hostilidad verbal, las autoridades iban a pasar a la acción. En consecuencia, pasaron varios meses en la cárcel, antes de salir en libertad.

Sin embargo, la mayoría de estos países han firmado multitud de tratados, garantizado las libertades civiles y políticas. Casi todos asientan su poder en Constituciones que protegen la libertad de expresión. Pero, como en Guinea Ecuatorial o en el reino de Swazilandia, donde al jefe del Estado se le considera un semidios, esos compromisos tienen poco valor para los gobiernos que manifiestamente desprecian, no solo a los periodistas, sino incluso a su firma.

POCAS PROMESAS CUMPLIDAS

Por todas estas razones, Reporteros sin Fronteras no puede más que sentirse satisfecha al comprobar que un gobierno africano ha mantenido sus promesas. La Junta Militar de Mauritania, en el poder desde 2005, se comprometió a garantizar la libertad de prensa, reformar su legislación, respetar el equilibrio de las fuerzas políticas en periodo electoral, liberar a la prensa pública de una presión excesiva del ejecutivo y tratar a la prensa independiente como colaboradora en el desarrollo. Y lo hizo en 2006.

Y sin embargo no hay que pensar que el continente africano es solo un ensamblaje de tiranías o democracias aproximativas. Especialmente en la zona de influencia de Sudáfrica, Namibia y Botsuana garantizan una libertad de prensa satisfactoria, llena de lagunas pero relativamente comparable a la que existe en las democracias occidentales. Lo mismo ocurre en las islas o los archipiélagos africanos, como Mauricio, Sao Tomé y Príncipe o Cabo Verde, que parecen remansos de libertad a lo largo de un continente atormentado. También las Comoras están saliendo, poco a poco, de los años de plomo. Y es también el caso de Mozambique donde, y se trata de un hecho lo suficientemente raro en Africa como para subrayarlo, les ha caído una grave condena a los asesinos del periodista Carlos Cardoso, al que mataron en 2000 cuando investigaba un escándalo económico de gran envergadura.

La mejor arma para luchar contra el desprecio es la paciencia. En Africa, los gobiernos que desprecian a los periodistas, o que no conceden ningún valor a los compromisos adquiridos, viven a la defensiva. Su poder acaba por pulverizarse. Los apoyos escasean. Los golpes son cada vez más dolorosos. Las dictaduras terminan por caer, los periodistas por salir de la cárcel. Por eso, para dejar que respire un país que se ahoga, lo más urgente es devolver su libertad a la prensa.

Léonard Vincent
Responsable del despacho Africa



ERITREA

Superficie : 117.600 km².

Población : 4.401.000.

Idioma : tigríno.

Jefe del Estado : Issaias Afeworki.

El país más joven de África, independiente desde 1993, es una cárcel a cielo abierto custodiada por un partido único ultranacionalista, que en la menor reivindicación democrática ve un atentado a la seguridad nacional. Entre los centenares de detenidos políticos, al menos trece periodistas acaban de pasar su sexto año de cárcel. Tres de ellos podrían haber sucumbido a unas condiciones de detención comparables a las que se daban en los presidios de galeras.

En Eritrea ha transcurrido el quinto año de terror y silencio. En este pequeño país arrinconado entre Etiopía, Sudán y el Mar Rojo, independiente solo desde 1993, el Estado Mayor del ejército y el partido único, el Frente Popular para la Democracia y la Justicia (PFDJ), han continuado controlándolo todo y castigando con dureza la menor veleidad crítica.

Bajo la batuta del Ministro de Información, Alí Abdou, los medios de comunicación estatales han continuado entonando loas al presidente Isaias Afeworki. Los periodistas que están en desacuerdo con el autoritarismo de los jefes de esa cárcel a cielo abierto no tienen más opción que obedecer las órdenes. Cuando la presión se hace demasiado fuerte huyen. Así, en 2006 escaparon al extranjero una decena, y entre ellos Temesghen Debesai, el presentador estrella del servicio inglés del canal público *Eri-TV*. Por su parte, Aklilu Solomon, ex corresponsal de la emisora pública norteamericana *Voice of America (VOA)*, pasó clandestinamente la frontera etíope en los primeros días de diciembre. En julio de 2003 le detuvieron por realizar un reportaje sobre la tristeza de las familias de los soldados al saber que uno de ellos había muerto en combate. Liberado, dieciocho meses más tarde, del contenedor metálico en que le tuvieron recluido, este periodista de frágil salud pasó después varias semanas en un cuartel, para que perfeccionara su "reeducación patriótica".

ASUMIDO EL DESPRECIO A LA PRENSA

A las repetidas defecciones el gobierno eritreo ha respondido en su forma habitual; es decir, reprimiendo. A partir del 12 de noviembre, unos agentes de las fuerzas de seguridad se han presentado diariamente en los locales del Ministerio de Información, donde se encuentran los medios de comunicación públicos, y han detenido a algunos

empleados, sin explicaciones. Los periodistas detenidos en estas nuevas razzias son: Ahmed "Bahja" Idris, de *Eri-TV*; Senait Tesfay, presentadora del servicio en tigríno de *Eri-TV*; Paulos Kidane, del servicio en amarico de *Eri-TV* y de la emisora pública *Radio Dimtsi Hafash (Voice of the Broad Masses)*; Daniel Mussie, del servicio en oromo de *Radio Dimtsi Hafash*; Temesghen Abay, del servicio en tigríno de *Radio Dimtsi Hafash*; Yemane Haile, de la agencia gubernamental *Eritrean News Agency (ENA)*; Fathia Khaled, presentadora del servicio en árabe de *Eri-TV* y Amir Ibrahim, periodista del servicio en árabe de *Eri-TV*, que es diabético. Estarían detenidos en la capital, Asmara, en un complejo gestionado por la policía y conocido como "Agip", en referencia a la compañía petrolera que en el pasado estaba instalada en ese lugar. Ese centro de detención es el lugar "donde la policía lleva a los presos para torturarles, antes de trasladarles a su destino final", según un antiguo detenido interrogado por Reporteros sin Fronteras.

DETENIDOS EN CONDICIONES INHUMANAS

Pero todo parece indicar también que, en uno de los muchos centros de detención del país, ha ocurrido algo irreparable. A finales del año 2006, informaciones creíbles anunciaron la muerte, en el presidio de Eiraeiro, de tres de los trece periodistas detenidos en secreto desde hace cinco años. Said Abdulkader, Medhane Haile y Yusuf Mohamed Alí formaban parte de los periodistas y opositores con los que arramblaron en la semana del 18 al 23 de septiembre de 2001, cuando sobre la marcha el presidente Isaias Afeworki "suspendió" los medios de comunicación privados, y detuvieron al ala reformista del partido en el poder. El gobierno eritreo, contactado por Reporteros sin Fronteras y por varios medios de comunicación internacionales en relación con esta información, dio una res-



ERITREA

puesta lacónica: "No estamos dispuestos a hacer comentarios". Los fallecimientos podrían deberse a las penosas condiciones de detención que existen en Eiraeiro.

En el informe que incluía esa información se mencionaban otros presos. Se trataba de Seyoum Tsehay (o Fsehay), periodista freelance; Dawit Habtemichael, redactor jefe adjunto y cofundador de *Meqaleh*; Temesghen Gebreyesus, periodista y miembro del consejo de administración de *Keste Debera* y Emanuel Asrat, redactor jefe de *Zemen*. Todos ellos estarían internados en esa cárcel

extremadamente agotadora, gestionada por el ejército y situada en pleno desierto, en una provincia del noreste.

Finalmente, Reporteros sin Fronteras ha tenido noticias de Fessehay Yohannes, apodado "Joshua", cofundador de *Setit*, el semanario más leído antes de 2001. Ahora estaría encerrado en la celda nº 18 de la cárcel de Eiraeiro, tras haber pasado por la penitenciaría de Dongolo (Sur), en una pieza subterránea de 1,5 metros de lado por 2,50 metros de alto, iluminada por una bombilla encendida las 24 horas del día.



ETIOPÍA

Superficie : 1.104.300 km².

Población : 77.431.000.

Idioma : amarico.

Jefe del gobierno : Méles Zenawi.

La comunidad internacional pudo creer que las elecciones legislativas de mayo de 2005 iban a significar el final de la "democracia autoritaria", y la llegada de una "apertura real". Pero el fiasco de las votaciones, y las subsiguientes revueltas, arruinaron esa esperanza. Una quincena de periodistas están encarcelados desde noviembre de 2005, atrapados en las razias de la coalición de oposición.

Tras un año desastroso, 2006 ha sido para Etiopía el del inmovilismo. Una veintena de periodistas lo han pasado en sus celdas de Addis Abeba. Forman parte del grupo de al menos 76 miembros de la oposición, la sociedad civil y la prensa, perseguidos por "traición", "conspiración" para derrocar al gobierno y "genocidio". Su juicio ante el Alto Tribunal Federal se inició el 2 de mayo. La reprobación general, incluida la de los tradicionales aliados de Etiopía, no consiguió doblegar al Primer Ministro Meles Zenawi. Para él, no existen dudas. La oposición quiso provocar un golpe de Estado y vengarse de quienes, como él, forman parte de la etnia tigrina.

En noviembre de 2005, en el espacio de un mes detuvieron a catorce directores de periódicos, o redactores jefe. A partir de diciembre de 2005 detuvieron y condenaron a otros periodistas, por asuntos de difamación. El 1 de enero de 2007 todos ellos continuaban detenidos.

UN CLIMA SIEMPRE HOSTIL

Después del 1 de enero de 2006 otros periodistas se sumaron a los "presos de noviembre". Solomon Aregawi, de *Hadar*, detenido en noviembre de 2005, fue inculcado el 21 de marzo de 2006 de "desacato a la Constitución" y "genocidio", junto a otros 32 presos, miembros reales o supuestos del CUD, principal coalición de oposición. Detenido el 19 de febrero, Goshu Moges, del semanario *Lisane Hezeb*, fue inculcado de "traición" el 19 de abril. Un determinado número de periodistas y miembros de la oposición, o de asociaciones, fueron inculcados mientras se encontraban fuera del territorio etíope, y juzgados por rebeldía.

En este clima de tensión, agravado por la guerra con Somalia y el statu quo en la frontera eritrea, algunos periódicos privados siguen publicándose en Addis Abeba. La autocensura está a la orden del día, sobre todo en lo que se refiere a cuestiones militares. Los periodistas etíopes hacen gala de un patriotismo impuesto y los corresponsales extranjeros están estrechamente vigilados. Así, por haber supuestamente "empañado la imagen de la nación", Anthony Mitchell, corresponsal de *Associated Press (AP)*, se vio obligado a marcharse del país el 22 de enero. A los medios de comunicación extranjeros les cuesta mucho conseguir una acreditación del Ministerio de Información, indispensable para quienes pretendan trabajar legalmente en territorio etíope.

Desde 2004, Reporteros sin Fronteras está también preocupada por la situación de Shiferraw Insemmu y Dhabassa Wakjira, dos periodistas del servicio en oromo del canal público de televisión *ETV*. Les detuvieron en abril de ese año, junto a otros empleados de *ETV* hoy en libertad, como consecuencia de la violenta represión de una manifestación de estudiantes oromos en el campus de la universidad de Addis Abeba, el 4 de enero de 2004. Los dos periodistas están acusados de haber sido informadores del movimiento separatista Oromo Liberation Front (OLF).

Por primera vez en su historia, el gobierno etíope parece que se ha lanzado a la censura del Net. De mayo a junio de 2006 eran inaccesibles en el país la mayor parte de los blogs y sitios de oposición. El gobierno negó que el bloqueo fuera cosa suya. Sin embargo, a finales de noviembre, esas publicaciones digitales desaparecieron de nuevo misteriosamente, lo que hace plausible la hipótesis de que se trata de una censura política.

MAURITANIA

Superficie : 1.025.520 km².

Población : 3.069.000.

Idiomas : árabe, francés.

Jefe del Estado : Ely Ould Mohamed Vall.

En dos años, la libertad de prensa ha experimentado avances espectaculares en el antiguo "dominio privado" del depuesto presidente Maaouiya Ould Taya, hoy en el exilio. Tras su cese forzoso en agosto de 2005, una Junta Militar ha iniciado un proceso de transición democrática, que debe culminar con la elección presidencial en marzo de 2007. Entre las promesas que hasta ahora han mantenido los nuevos jefes del país se encuentra la abolición de la censura.

Si era necesaria una prueba de que la presión internacional acaba por dar resultados positivos en las libertades civiles y políticas, el caso de Mauritania es un instructivo ejemplo. Tras la "revolución de palacio" de agosto de 2005, la Junta Militar que destronó al presidente Maaouiya Ould Taya prometió restablecer la democracia y, entre otras cosas, la libertad de prensa. A final de 2006 seguía manteniendo su promesa.

Una comisión especializada, compuesta por periodistas independientes de Nouakchott, juristas y altos funcionarios, en colaboración con Reporteros sin Fronteras, ha elaborado una nueva ley que despenaliza los delitos de prensa, e introduce mecanismos de regulación democrática. Finalizada en marzo, y ligeramente enmendada por la profesión tras ser presentada en público, el Consejo Militar para la Justicia y la Democracia (CMJD) promulgó la nueva legislación a principios de octubre. Por tanto, se ha abolido la censura mediante una negociación, y con el apoyo de la comunidad internacional. La regulación del sector ha quedado encomendada a una Alta Autoridad de la Prensa y el Audiovisual (HAPA). Y, finalmente, los periodistas mauritanos pueden respirar después de veinte años de opresión, vigilancia permanente y autoritarismo policial.

Cierto que el paisaje audiovisual continúa en manos del Estado, y que las promesas de liberalización del CMJD tardan en concretarse. Pero los principales medios de comunicación públicos se han puesto en manos de periodistas responsables, que han abierto sus páginas, y sus micrófonos, al conjunto de las sensibilidades políticas del país. Así, el referéndum constitucional de junio, y las elecciones municipales y legislativas de noviembre, se llevaron a cabo en buenas condiciones, garantizando la diversidad del uso público de la palabra y

el acceso de la mayoría al conjunto del discurso. Como la elección presidencial prevista para marzo de 2007, esas votaciones dieron lugar a concertaciones previas entre el gobierno y los movimientos políticos, para contentar a todo el mundo, incluidos los movimientos más radicales. Además se ha restablecido la difusión en la capital de la emisora pública francesa *Radio France Internationale* (RFI), suspendida por el antiguo régimen en noviembre de 2000, y se han iniciado negociaciones con la dirección del canal para extenderla a Nouadhibou (Oeste).

NUEVOS OBJETIVOS

Sin embargo, son muchos los desafíos que esperan a los periodistas mauritanos, entre otras cosas para franquear algunas presiones de los clanes o las tribus. Así, Khalil Ould Jdoud, redactor jefe del diario arabófono *Al Akhbar*, fue agredido el 15 de febrero de 2006 en Nouakchott. Una decena de hombres armados, a las órdenes del ex coronel Mohamed Mahmoud Ould Deh, uno de los hombres influyentes del antiguo régimen reconvertido en negociante, irrumpieron en los locales del periódico buscándole. El mismo día, el coche en que circulaba el periodista colisionó con un vehículo todo terreno en el centro de la capital. Tras conseguir huir sin que le hirieran, presentó una denuncia e inmediatamente se pasó a la clandestinidad, temiendo por su seguridad. La intervención del gobierno permitió castigar a los culpables y, por razones que aún permanecen oscuras, el periodista optó por retirar la denuncia.

Por otra parte, continúa planteando problemas el fenómeno de la prensa "peshmerga" - esas publicaciones irregulares, de dudosa profesionalidad y favorecidas por el antiguo régimen, para descalificar a la prensa independiente. Los responsables de

MAURITANIA

esos periódicos, cazadores de “regalitos” y ávidos por ofrecer sus servicios a los mejores postores, continúan siendo invitados a las conferencias de prensa y a los eventos oficiales, provocando la rabia de los periodistas comprometidos en el respeto de las reglas deontológicas de su profesión.

“Ya nos enfrentamos a autoridades políticas que disfrutaban de todos los poderes. No veo por

qué íbamos a desinflarnos ante otros. La única amenaza que ahora pesa sobre la prensa solo puede venir de ella misma. Tiene que organizarse, profesionalizarse, unirse, dar muestras de solidaridad, para enfrentarse a estos nuevos predadores”, dijo a Reporteros sin Fronteras Ahmed Ould Cheikh, director de publicación de *Calame*, uno de los periódicos más censurados antes de 2005.

NIGERIA



*Superficie : 923.770 km².
Población : 131.530.000.
Idioma : inglés.
Jefe del Estado : Olusegun Obasanjo.*

Los periodistas del "gigante del Oeste de África", primer productor de petróleo del continente, se tambalean entre la violencia social, la corrupción endémica y la agresividad de algunos políticos, dispuestos a todo con tal de mantener sus privilegios. Palizas, detenciones, procesos abusivos y amenazas de muerte forman parte del panorama cotidiano de los profesionales de los medios de comunicación de Lagos y de las diferentes capitales de los Estados, donde poderosos gobernadores imponen su ley.

Para los periodistas nigerianos 2006 fue, una vez más, un año de sufrimiento. Tuvieron que enfrentarse a la brutalidad policial, algunos a detenciones por el menor artículo que disgustara a las autoridades locales, y a la corrupción de los hombres uniformados, los barones de la política y los empresarios. Es cierto que la prensa nigeriana es pluralista, vigorosa e insolente, fuerte por el apoyo de la población y de una larga tradición de resistencia a las diferentes juntas militares y dictaduras, que han sangrado el país desde su independencia. Pero, como Reporteros sin Fronteras subrayaba en marzo tras haber tenido conocimiento, en un mes, de tres agresiones físicas, una orden de censura, un despido abusivo, una detención arbitraria y un caso de intimidación, "los periodistas padecen la violencia cotidiana que impera en Nigeria". Pero con frecuencia también son los cabeza de turco de poderosos, militares, gobernadores, ministros o empresarios, que disfrutan de una impunidad total y no sienten ningún respeto por el derecho a la información. Por eso hay que rendir un homenaje especial a los periodistas nigerianos que han soportado la opresión de juntas militares, y que ahora trabajan desafiando el desprecio y la brutalidad de las autoridades, y sus protegidos.

En un país donde con frecuencia la lucha por el poder se establece sobre un fondo de violencia y corrupción, los periodistas son blancos escogidos. Imo Eze, director del periódico *Ebonyi Voice*, y el periodista de su publicación Oluwole Elenyinnile, pasaron más de dos meses en la cárcel, entre el 14 de junio y el 25 de agosto, tras publicar el 16 de abril un artículo titulado "Is Ebonyi A Failed State?" ("¿El Estado de Ebonyi está en quiebra?"). Un tribunal de Abakaliki, capital del Estado de Ebonyi, les acusó de "conspiración", "sedición" y "difamación" contra el gobernador, Sam Ominyin Egwu.

UNA TELEVISIÓN EN EL PUNTO DE MIRA

El gobierno también utilizó procedimientos judiciales abusivos con algunos periodistas que cuestionaron al presidente, Olusegun Abasanjo. Así, Mike Gbenga Aruleba, presentador de una famosa emisión política, y Rotimi Durojaiye, reportero del *Daily Independent*, pasaron dos días en la cárcel y se les inculpó de "sedición", en aplicación de una ley que sin embargo carece de efecto desde que lo decidió un tribunal de apelación en 1983. En el *Daily Independent* del 12 de junio, Rotimi Durojaiye publicó un artículo titulado "Controversy Over Age, Cost of Presidential Jet" ("Polémica en torno a la edad y el coste del avión presidencial"), en el que el periodista se interrogaba acerca de las modalidades y la oportunidad de la adquisición del nuevo avión presidencial. En el programa "Focus Nigeria", emitido al día siguiente por el canal de televisión *African Independent Television (AIT)*, el presentador Mike Gbenga Aruleba se refirió a su vez a ese asunto, que había suscitado gran controversia en la prensa nigeriana. Por emplear una palabra peyorativa ("tokunbo"), sugiriendo que se trataba de un aparato de segunda mano, unos agentes del State Security Service (SSS, servicios interiores de inteligencia) detuvieron el 14 de junio a Mike Gbenga Aruleba ; le pusieron en libertad al día siguiente, con la condición de que notificara sus desplazamientos. En cuanto a Rotimi Durojaiye, le detuvieron el 25 de junio. Al día siguiente detuvieron de nuevo a Mike Gbenga Aruleba cuando, por razones de trabajo, se había marchado de Abuja a Lagos. El 10 de octubre le pusieron en libertad. En cuanto al juicio de Rotimi Durojaiye, ha quedado aplazado.

El canal de televisión *AIT* ya tuvo problemas con las autoridades, el mes anterior. El 14 de mayo,

NIGERIA



unos agentes del SSS irrumpieron en sus locales y embargaron la cassette de un documental, que hablaba de los intentos fallidos de anteriores dirigentes nigerianos por mantenerse en el poder. *AIT*, el más antiguo de los canales privados del país, estaba en el punto de mira de las autoridades desde que emitió en directo los debates de la Asamblea Nacional sobre una controvertida enmienda a la Constitución de 1999, presentada por los partidarios del presidente Obasanjo y que, entre otras cosas, habría permitido que el Presidente de la República, y los gobernadores de los Estados federados, se mantuvieran cuatro años más en el poder. Pocos días después de la razzia, el Parlamento rechazó la enmienda. Reporteros sin Fronteras ha metido en su lista de "Predadores de la libertad de prensa" al SSS, habituado a efectuar operaciones de comando contra la prensa privada.

DOS PERIODISTAS MUERTOS

Como si ese clima de permanente hostilidad no pesara ya suficientemente sobre la prensa nigeriana, el final del año estuvo marcado por dos asesinatos. Ambas víctimas era periodistas famoso en Lagos y las circunstancias de su muerte, aunque no hay nada que pruebe que esté relacionada con su actividad profesional, ponen de manifiesto el universo de violencia con que tienen que convivir los profesionales de los medios de comunicación. A Omololu Falobi, ex periodista del diario privado *The Punch*, fundador y director ejecutivo de la asociación *Jornalists Against AIDS* (Periodistas contra el SIDA, JAAIDS), le mataron el 5 de octu-

bre hacia las 22 horas, cuando acababa de salir de la sede de la asociación, situada en el barrio de Ogba, en Lagos. Los asesinos le hicieron varios disparos en la frente, cuando se encontraba al volante de su automóvil. Las primeras conclusiones de la investigación, facilitadas por JAAIDS y varios periodistas nigerianos, indican que a Omololu Falobi le mataron por razones crapulosas, pero no han detenido a ningún sospechoso.

Godwin Agbroko, presidente del directorio editorial del diario privado *This Day*, apareció muerto el 22 de diciembre, al volante de su automóvil, al borde de una carretera del barrio de Isolo, en Lagos, cuando acababa de marcharse de las oficinas del periódico. No le robaron sus efectos personales pero la misma noche, y en el mismo barrio, mataron a disparos a tres policías y dos videntes. La policía indicó que baraja la hipótesis de un homicidio, de carácter crapuloso. Sin embargo, su hijo Tobor Agbroko, dijo a la prensa nigeriana que su familia creía que se trataba de un asesinato. "Llevaba un teléfono que vale varios miles de nairas, y no lo tocaron. Tampoco se llevaron el dinero que llevaba, ni el reloj de pulsera, ni otros bienes". Rechazó la hipótesis sostenida por la policía, estimando que no "se puede pensar que las personas son imbéciles diciendo que los asesinos eran ladrones". Godwin Agbroko era un periodista conocido, que frecuentemente firmaba una crónica en *This Day*. Redactor jefe de varios periódicos durante la dictadura militar (1993-1999), continuó dando un tinte irónico y sin complacencia de la vida política.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Superficie : 2.344.860 km².

Población : 57.549.000.

Idioma : francés.

Jefe del Estado : Joseph Kabila.

En este país, tan grande como Europa occidental, la prensa se tambalea entre la violencia de los militantes políticos y sus jefes, la anarquía que impera en algunas regiones y la pobreza endémica que a veces le empuja a dejarse corromper. En 2006 se organizó la mayor misión de la ONU en todo el mundo, para supervisar una histórica elección presidencial. Aunque varios periodistas fueron víctimas de los odios políticos, otros jugaron un papel peligroso, que habría podido inclinar al país hacia la guerra civil.

La desmesura del territorio del antiguo Zaire es a la imagen de los problemas que tienen planteados los periodistas de este país. En Kinshasa, donde existe una prensa pletórica, polémica e indócil, son usuales las detenciones abusivas y la brutalidad policial. En 2006, y como en años anteriores, cerca de una quincena de directores de publicaciones, redactores jefes o periodistas que trabajan en la capital, fueron enviados a pudrirse en las siniestras celdas del Centro Penitenciario y de Reeducción de Kinshasa (CPRK), con frecuencia sobre la base de la simple denuncia de un político o un empresario, o de una llamada telefónica al jefe de la policía. Desde hace varios años, Reporteros sin Fronteras, y su organización colaboradora Periodista en Peligro (JED), vienen pidiendo al gobierno congoleño que reforma la ley de difamación, que establece penas de cárcel y permite la detención preventiva de periodistas. En vano, de momento. Las autoridades no han renunciado todavía a usar y abusar de un artículo que condena "la imputación perjudicial", sin que los jueces tengan que pronunciarse sobre la veracidad de las informaciones incriminadas sino solamente sobre el hecho de que "atenten, o no, al honor o a la consideración" del querellante. Dada, además, la corrupción existente en el sistema judicial, son frecuentes las injusticias.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARTIDARIOS

Ciertamente también existe un problema de corrupción en la prensa congoleña. Muchos periodistas venden las páginas de sus periódicos al mejor postor, poniéndose en situación de maestros cantores o portavoces de políticos poco escrupulosos. Por otra parte, con frecuencia aparecen manifestaciones de odio en las columnas, o en las ondas

de algunos medios de comunicación congoleños, instrumentados por clanes políticos o étnicos. La campaña de la elección presidencial de julio representó una ocasión para que los medios públicos y privados manifestaran ruidosamente sus preferencias por tal o cual candidato, a menudo sin tener para nada en cuenta la deontología. Por eso, los medios de comunicación partidarios, en particular los de Joseph Kabila y Jean-Pierre Bemba, fueron el blanco de los ataques de sus adversarios, que no dudaron en enviar a sus milicias, o a sus militantes, para silenciar la voz del "otro". Signo de los tiempos, el 20 de agosto, al día siguiente de la proclamación de los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial, estallaron combates entre las guardias pretorianas de ambos candidatos finalistas, en torno al inmueble de las televisiones de Jean-Pierre Bemba. Un mes más tarde, el 18 de septiembre, un incendio de origen indeterminado destruyó los locales y los estudios de *Canal Congo Télévision (CCTV)*, *Canal Kin Télévision (CTV)* y *Radio Liberté Kinshasa*, causando quemaduras de segundo grado al director general de los canales, Stéphane Kitutu.

AMENAZAS Y ZONAS DE SOMBRAS

Otros muchos periodistas se esfuerzan en practicar honestamente su oficio, pero pagan un alto precio - su seguridad, su libertad o su vida - por molestar a quienes desvían el bien público. Uno de ellos, Kazadi Mukendi, periodista del semanario *Lubilanji Expansion*, pasó mes y medio en la cárcel por denunciar un caso de corrupción, a pesar de que el fiscal ordenó que le pusieran en libertad un mes y medio antes. En cuanto a Bapuwa Mwamba, editorialista de oposición que había regresado recientemente del exilio, fue asesinado el 8 de julio

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

en su domicilio, sin duda por algunos militares ávidos de dinero fácil.

Menos de un año antes, el periodista político Franck Ngyke y su esposa, Hélène Mpaka, fueron asesinados, en circunstancias todavía poco claras, en su domicilio de Kinshasa. Gracias a la presión de los periodistas congoleños y de organizaciones internacionales, y por primera vez en la historia reciente del país, se abrió una investigación para aclarar el doble homicidio que desembocó en el proceso, relativamente confuso, de tres presuntos culpables, tres ex militares con móviles muy vagos. Por su parte, la organización JED llevó a cabo una investigación independiente, destinada a explorar la pista política, a pesar del ostentoso desinterés de las autoridades por esa hipótesis. Todavía no se han confirmado, ni desmentido, sus conclusiones. Sin embargo, las repetidas amenazas de muerte recibidas por Donat M'Baya Tshimanga, presidente de la asociación, y Tshivis Tshivuadi, secretario general, parecen indicar que han molestado mucho las cuestiones reveladas en su investigación, y especialmente el papel jugado por algunas personas cercanas al Ministro del Interior.

Para hacer frente a todos estos desafíos, Reporteros sin Fronteras envió en marzo una delegación a Kinshasa, con el objetivo de entrevistarse con el presidente Joseph Kabila, varios ministros y embajadores, la misión local de la ONU y los responsables de los principales medios de comunicación. Aunque la organización pudo conseguir la libertad de tres periodistas que entonces estaban encarcelados, también pudo constatar la insuficiencia de mecanismos de regulación y autorregulación. La Alta Autoridad de los Medios de Comunicación (HAM), dirigida por el respetado periodista Modeste Mutinga, está sometida a tales presiones que le resulta muy difícil trabajar serenamente. Al tiempo que le es imposible no sancionar las derivas y los patinazos de los medios de propaganda, tiene que enfrentarse a

recurrentes acusaciones de "parcialidad". Y en ese contexto, unos partidarios de Jean-Pierre Bemba que regresaban de un mitin de su campeón, saquearon la sede social el 27 de julio.

HOSTILIDAD

Pero los militantes políticos no son los únicos que no respetan esa importante institución de las democracias modernas. El Ministro de Información, obligado por Henri Mova Sanakyi, "un "duro" del partido de Joseph Kabila, no ha dudado en obstruirla frecuentemente, y especialmente a finales de agosto cuando ordenó el corte salvaje de la emisión de los canales de Jean-Pierre Bemba. Por otra parte, a lo largo del año el ministro se ha distinguido varias veces por su falta de consideración con las reglas democráticas. El 3 de julio, por iniciativa suya expulsaron del país a Ghislaine Dupont, enviada especial de *RFI*. En los meses precedentes, el ministro la atacó violentamente y, en el diario kabilista *L'Avenir* se puso en marcha una peligrosa campaña de odio contra ella, con acento xenófobo.

La situación no es mucho mejor en las provincias, que en Kinshasa. Los potentados locales no dudan en enviar a sus secuaces a ajustar cuentas con los periodistas demasiado curiosos. El 18 de mayo, por ejemplo, a Ricky Nzuzi, camarógrafo de la *Radio Télévision Nationale Congoleña (RTNC)* en Lumumbashi, unos desconocidos le secuestraron, le dieron una paliza y le tiraron a una fosa por la noche. En las zonas donde causan estragos los ejércitos privados, con vagos objetivos políticos, los periodistas están totalmente inseguros. Acquitté Kisembo, colaborador de la *AFP*, se da por desaparecido desde 2003 en Ituri, y todo hace pensar que le asesinaron unos milicianos del sector. Por otra parte, Reporteros sin Fronteras pidió al Tribunal Penal Internacional que ampliara la investigación sobre el señor de la guerra Thomas Lubanga, trasladado a La Haya en este año, en relación con esa inexplicada desaparición.



RUANDA

Superficie : 26.340 km².

Población : 9.038.000.

Idiomas : kinyarwanda, francés, inglés, suahili.

Jefe del Estado : Paul Kagamé.

Es cierto que se han superado grandes desafíos para reconstruir un país profundamente desgarrado por el genocidio de 1994. Pero, en él, la libertad de prensa no está en absoluto garantizada y los periodistas rwandeses tienen que sufrir permanentemente la hostilidad del gobierno y la vigilancia de los servicios de seguridad.

A Ruanda, un país profundamente magullado por el genocidio de los tutsis en 1994, le está costando mucho salir de sus años negros. Ciertamente se han reconstruido las infraestructuras del país y que se ha creado un sistema para juzgar a los "genocidas de barrio". Pero el presidente Paul Kagame y su gobierno no han aceptado nunca garantizar una real libertad de prensa. Y hacen que el precio más alto lo paguen los periodistas que les molestan, o que revelan los aspectos más sombríos de su política.

Por otra parte, el año 2006 comenzó con la agresión del director de uno de los pocos periódicos independientes que se publican en Kigali. A Bonaventure Bizumuremyi, director del semanario privado *Umuco*, le despertaron el 15 de enero, a las 3 de la madrugada, cuatro hombres armados con garrotes y cuchillos. Llamaron a la puerta de su domicilio, situado en un barrio popular de Kigali. Una vez dentro, saquearon la casa y le amenazaron, conminándole a dejar de publicar artículos desfavorables para el Frente Patriótico Rwandés (FPR, en el poder). Tras la intervención de los vecinos, los cuatro hombres abandonaron tranquilamente el domicilio del periodista. La víspera de esa violenta intrusión en su casa, a Bonaventure Bizumuremyi le siguió un vehículo policial hasta su domicilio. También había recibido amenazas por teléfono. En la última edición de *Umuco* había denunciado la falta de separación entre los poderes en Ruanda y criticado al FPR, reprochándole su incapacidad para dirigir el país.

Este periódico está acostumbrado a tener disputas con el poder. Uno de sus periodistas, Jean-Léonard Rugambage, pasó once meses en la cárcel de Gitarama con diversos pretextos todos ellos relacionados, de cerca o de lejos, con el genocidio de 1994. Le detuvieron en septiembre de 2005, diez días después de la publicación de un número de *Umuco* en el que denunciaba la corrupción de

algunos jueces de gacaca del distrito de Ruyumba, y la utilización de esos tribunales populares para arreglar cuentas personales. El 23 de noviembre le condenaron a un año de cárcel por "desacato al tribunal", tras dudar de la imparcialidad del presidente del tribunal encargado de juzgarle; y tenía pendiente una acusación de asesinato, que no se tenía en pie. Finalmente, los días 26 y 28 de julio de 2006 le declararon inocente de ambas acusaciones, y salió en libertad. Desde entonces vuelve a ocupar su puesto de redactor jefe de *Umuco*.

CONDENADO POR UN ANÁLISIS POLÍTICO

Otro periódico que ha padecido con frecuencia la cólera del poder es *Umusesa*, un semanario en kinyarwanda respetado por la ironía de sus análisis políticos. El 3 de agosto, el Alto Tribunal de la República ruandesa, la más alta jurisdicción del país, confirmó la condena por "desacato público" del director del semanario Charles Kabonero, a una pena de un año de cárcel, con la condena en suspenso, y multa de un millón de francos rwandeses (unos 1.450 euros), por publicar una serie de artículos críticos sobre el funcionamiento del gobierno. Al director de publicación de *Umusesa* le había denunciado Denis Polisi, vicepresidente del Parlamento y secretario general del FPR, que se refería a un artículo publicado en agosto de 2004 y titulado: "Entre Kagame y Polisi, ¿quién gobierna realmente?". Entre otras cosas, el artículo juzgaba el peso político de Denis Polisi a la luz de su posición de secretario general del partido en el poder, y antiguo miembro de la diáspora tutsi, refugiado en Burundi. Charles Kabonero revelaba también que Denis Polisi alquilaba oficinas a varias instituciones paraestatales, en un inmueble de su propiedad.

Por otra parte, Charles Kabonero fue objeto, en abril, de una violenta campaña de calumnias, entre otros en el bimensual progubernamental *Focus*. Sobre la base de un falso correo electrónico, el



RUANDA

periódico le acusó de haber conspirado con el teniente Abdul Ruzibiza, ex oficial de los servicios especiales del FPR hoy refugiado en el extranjero,

con la intención de poner en marcha una oleada de atentados con bomba en Kigali, y derrocar el poder establecido.

SOMALIA

Superficie : 637.660 km².

Población : 8.228.000.

Idioma : somalí.

Jefe del Estado : Abdullahi Yusuf Ahmed.

La reanudación de hecho de la guerra hizo que 2006 fuera uno de los años más violentos para la prensa, desde hacía mucho tiempo. A un corresponsal extranjero le mataron en pleno día en Mogadiscio, mientras que una treintena de periodistas somalíes, molestos testigos de un conflicto hecho de mentiras y desinformación, fueron detenidos por uno u otro de los beligerantes.

Somalia, que al comienzo del año 2006 era un caótico archipiélago de señoríos, en el espacio de pocos meses se convirtió en el terreno de enfrentamiento entre un movimiento político-militar fundamentalista y un precario gobierno de transición. Por eso, los periodistas somalíes se encontraron frente a nuevos desafíos. Ya cuando el país estaba dividido en feudos de los señores de la guerra, protegidos por milicias de adolescentes mercenarios, eran los blancos preferidos por los poderosos, empresarios o autoproclamados gobernadores. En 2006, molestos testigos de una guerra en la que las mayores armas son la desinformación y la mentira, tuvieron que acomodarse por un lado con una Unión de Tribunales Islámicos (UTI) devota y nacionalista y, por otro, con un gobierno federal de transición, irritable y preocupado por su imagen en el panorama internacional.

REPETIDAS DETENCIONES

A lo largo del año, sobre la marcha detuvieron a una treintena de periodistas, a la vez en Mogadiscio (Sudeste), la base de la UTI, y en las regiones conquistadas por los tribunales islámicos, como Baidoa (Sudoeste), sede del gobierno, o en la región semi autónoma de Puntland (Noreste).

En la mañana del 24 de octubre, las milicias gubernamentales detuvieron, en el pueblo de Daynunay, a 15 km. de Baidoa, a Fahad Mohammed Abukar, periodista de *Radio Warsan*, Mohammed Adawe Adam, de *Radio Shabelle* y Muktar Mohammed Atosh, de la emisora *HornAfrik*. A los tres les cogieron en posesión de una cámara digital de vídeo, que contenía imágenes del cadáver de un soldado etíope de origen somalí, muerto en Burhakaba, así como imágenes de tropas etíopes presentes en territorio somalí.

Estuvieron detenidos una semana, antes de que les dejaran en libertad. Nunca se difundieron las imágenes que habían grabado. Igualmente, Abdullahi Yasin Jama, periodista de *Radio Warsan*, cayó en una trampa tendida por las milicias del gobierno de transición en Baidoa, el 24 de noviembre. Detenido cuando acudía invitado a una falsa rueda de prensa, los milicianos retuvieron a la fuerza al periodista durante tres días, y le pegaron. Le castigaban por haber hablado de la "presencia masiva" de soldados etíopes en Somalia; algo que los gobiernos de Baidoa y Addis Abeba han dedicado la mitad del año a desmentir, sin conseguir convencer realmente.

El 29 de septiembre, las milicias de la UTI en Kismayo (Sudeste) detuvieron a tres periodistas de la emisora privada *HornAfrik*: Sahro Abdi Ahmed, Layla Sheik Ismail y Adam Mohammed Salad. Los tres quedaron en libertad a las pocas horas, tras recibir la orden de no volver a hablar de los tribunales islámicos. Por otra parte, el 17 de diciembre detuvieron en el aeropuerto de Mogadiscio al secretario general de la Unión Nacional de Periodistas Somalíes (NUSOJ), Omar Faruk Osman, y al coordinador de la organización, Alí Moalim Isak, antes de que embarcaran para un viaje de negocios. En principio les llevaron al puesto de policía del aeropuerto y después, con los ojos vendados, les trasladaron a la comisaría del distrito de Waberi. Incautaron el ordenador de Omar Faruk Osman, así como algunos documentos que llevaba, sus pasaportes y sus teléfonos móviles. Un policía acudió a interrogarles en la celda, y les obligó a revelar la contraseña para acceder a los e-mails del periodista. Les pusieron en libertad el mismo día, pero nunca les han devuelto sus pertenencias. Como consecuencia, y por temor a represalias, varios responsables de la NUSOJ emprendieron el camino del exilio.

SOMALIA

OBSTÁCULOS A LA NUSOJ

Del resto, la organización colaboradora de Reporteros sin Fronteras en Somalia, pasó por muchos inconvenientes a lo largo del año, a medida que aumentaba su reputación de defensor de la libertad de prensa. Así, el 3 de julio, unos milicianos pagados por un rival expulsaron, amenazándola con las armas, a la dirección de la NUSOJ de sus oficinas de Mogadiscio, obligando a la organización a instalarse en otro lugar. En octubre, unas negociaciones con la dirección de la UTI les permitieron evitar que los religiosos impusieran un draconiano “código de conducta” a la prensa, prohibiendo entre otras cosas difundir informaciones “capaces de crear conflictos entre la población y los tribunales islámicos”.

Porque el país sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo. El 4 de agosto cayó en una emboscada, tendida por tres hombres armados en la carretera de Baidoa a Mogadiscio, un coche que transportaba a algunos responsables de la NUSOJ; en el incidente mataron a su chofer, Madey Garas. Y dieciocho meses del asesinato, todavía impune, de Kate Peyton, enviada especial de la *BBC* a Mogadiscio, mataron a un periodista sueco en la capital, en pleno día, en el transcurso de una concentración de apoyo a los tribunales islámicos. Cuando el 23 de junio grababa a un grupo de manifestantes, a Martín Adler, reportero independiente acostumbrado a las zonas en conflicto, le mató un hombre encapuchado que le disparó una bala en el lado izquierdo del pecho. Los tribunales islámicos, que condenaron el asesinato, aseguraron haber efectuado varias detenciones, sin facilitar más detalles.

SUDÁN

Superficie : 2.505.810 km².

Población : 36.233.000.

Idiomas : árabe, inglés.

Jefe del Estado : Omar Hassan al-Bashir.

Los periodistas sudaneses son presa fácil para un gobierno que, para justificar la represión, usa y abusa de una legislación liberticida, de un nacionalismo teñido de religión y de un contexto regional revuelto. En 2006 detuvieron a una quincena de ellos, así como a dos reporteros extranjeros, molestos testigos de las masacres de Darfour.

Las masacres de Darfour son una llaga abierta para Sudán, una herida a la que el gobierno no soporta que nadie se acerque. Dos periodistas extranjeros y sus colaboradores pagaron en 2006 el precio de ese extremado nerviosismo, cuando les arrojaron a la cárcel por haberse interesado demasiado en el drama de esa inmensa región fronteriza con Tchad.

El fotógrafo y militante humanitario esloveno Tomo Kriznar, que por otra parte es consejero del presidente de su país, fue detenido el 19 de julio en el Norte de Darfour. El 14 de agosto, el tribunal penal de El Fasher, la capital del Estado, le condenó a dos años de cárcel. Le habían acusado de "espionaje", "publicación de noticias falsas" y "entrar en Sudán sin visado". En una entrevista que tuvo lugar el 1 de agosto, Tomo Kriznar reconoció haber entrado en Sudán sin visado desde la frontera tchadiana, invitado por el Movimiento de Liberación de Sudán (SLM), pero rechazó la acusación de espionaje. La Embajada de Sudán en Viena (Austria) le había negado el visado, a causa de sus escritos, que consideraba "negativos". En efecto, había publicado varios artículos, en periódicos eslovenos y en su sitio de Internet, www.tomo-kriznar.com, sobre la situación en Darfour. Después de unas negociaciones, y de la intervención personal del presidente esloveno, a Tomo Kriznar le amnistió el Presidente, el 2 de septiembre.

Pocas semanas después del periodista esloveno, el 6 de agosto fue detenido por las fuerzas de seguridad gubernamentales, junto con sus colaboradores, el reportero norteamericano Paul Salopek, que realizaba un reportaje para el mensual privado estadounidense *National Geographic*. Disponía de dos pasaportes norteamericanos, una práctica frecuente entre los periodistas que cubren zonas de conflicto, y de fotografías tomadas por satélite de la región, disponibles en Internet. Inculpado de "espionaje" y "difusión ilegal de informaciones",

también le acusaron de haber entrado en territorio sudanés sin visado. Paul Salopek, que también es corresponsal del diario *Chicago Tribune*, junto con su intérprete Suleiman Abakar Moussa y su chofer Idriss Abdulraman Anu, estos dos últimos de nacionalidad tchadiana, no salieron en libertad hasta el 9 de septiembre, tras la obstinada intervención del gobernador del Estado de Nuevo México, Bill Richardson.

El error de ambos periodistas fue sobre todo haber ido, a pesar de todos los obstáculos administrativos y políticos, a cubrir una actualidad que el gobierno sudanés querría ocultar. Con los enviados especiales extranjeros, presentes en Darfour o en Jartum, se llevaron a cabo innumerables actos de intimidación, o amenazas apenas veladas.

PRESAS FÁCILES

Hay que decir que los periodistas sudaneses son una presa fácil para el poder. A lo largo del año 2006 detuvieron a más de quince, y eso a pesar de que en julio de 2005 desaparecieron oficialmente la censura y las leyes de excepción. A uno de ellos incluso le asesinaron salvajemente, traumatizando a una profesión que ya vivía con el temor de la represión gubernamental. En efecto, el 6 de septiembre la policía encontró, en una calle de un suburbio del sur de Jartum, el cuerpo decapitado de Mohamed Taha, redactor jefe del diario privado sudanés *Al-Wifaq*. La vispera por la noche varios hombres encapuchados secuestraron al periodista en su domicilio, situado en el este de la capital. Se lo llevaron, con destino desconocido, en un coche. La familia comunicó inmediatamente el secuestro a la policía.

A Mohamed Taha le habían juzgado en 2005 por "blasfemo", como consecuencia de la denuncia presentada por un grupo fundamentalista denominado Ansar al-Sunnah. El artículo inculminado,

SUDÁN

escrito por este periodista que por otra parte era miembro del movimiento de los Hermanos Musulmanes, hacía referencia a un manuscrito islámico de hace cinco siglos que plantearía algunas dudas acerca de la genealogía del profeta. Tras la publicación del artículo, algunos imanes de Jartum organizaron importantes concentraciones, para exigir que se condenara a muerte al periodista. Su periódico estuvo suspendido durante dos meses.

Enseguida se dirigieron las sospechas hacia los islamistas radicales, y también hacia los rebeldes

de Darfour, de los que Mohamed Taha era un enemigo declarado. Abou Obeida Abdallah, periodista del diario privado *Al-Rai al-Aam*, permaneció detenido desde el 29 de septiembre hasta el 15 de octubre, oficialmente en el marco de la investigación sobre el asesinato de Mohamed Taha. Por otra parte había cubierto la cumbre que, en el mes de mayo, celebraron el gobierno y algunos grupos rebeldes de Darfour. No se filtró nada sobre su interrogatorio. Al terminar el año los investigadores no habían llegado a ninguna conclusión satisfactoria sobre el asesinato.

ZIMBABUE



*Superficie : 390.760 km².
Población : 13.010.000.
Idiomas : inglés, shona, ndebele.
Jefe del Estado : Robert Mugabe.*

El país, dirigido desde 1980 por el octogenario Robert Mugabe, es uno de los más feroces del continente con los periodistas. Vigilancia, amenazas, encarcelaciones, censura, chantaje, abusos de poder, denegación de justicia, todo es válido para controlar la información. Hasta el punto de que la justicia zimbabuense, cada vez más celosa de sus prerrogativas y cansada de que no la respeten, ha empezado a desautorizar al gobierno y sus agencias.

Manifiestamente, el control absoluto de la información, cueste lo que cueste, es una de las obsesiones del presidente zimbabuense Robert Mugabe. Desde 2002, y tras haber hecho que se aprobara una de las leyes más kafkianas del continente para reprimir a la prensa, se cerrara el diario más popular del país y se interfirieran los radios de la oposición, el gobierno zimbabuense no ha aflojado la presión contra las últimas voces independientes del país. Gracias al temible instrumento que es la Comisión de Medios de Comunicación e Información (MIC), en 2006 la represión alcanzó a los semanarios privados *Zimbabwe Independent* y *Financial Gazette (FinGaz)*, y a la radio privada *Voice of the People (VOP)*. Los servicios de inteligencia se encargaron de todas las demás formas de injusticia, sufridas por los periodistas zimbabuenses.

UN PULSO INTERMINABLE

De acuerdo con sus estatutos, la MIC, órgano de regulación de los medios de comunicación estrechamente controlado por el poder, procede cada año a reexaminar las licencias de los periódicos y las acreditaciones de los periodistas. Con el peligro de que eso sirva de chantaje. Y así, en la segunda semana de enero de 2006 la MIC amenazó con suspender la autorización de publicación de *FinGaz*, si el periódico no publicaba un desmentido del artículo aparecido la semana anterior, en el que se relataba como la Comisión, tras acceder a conceder una licencia al propietario del desaparecido diario *Daily News*, finalmente cedió a las presiones de los servicios de inteligencia y reconsideró su decisión. Igualmente, el 2 de febrero la MIC renovó finalmente las acreditaciones de los periodistas del *Zimbabwe Independent*, pero solo después de obligar al periódico a publicar el desmentido de un artículo aparecido el año anterior.

Evidentemente, la primera preocupación de la MIC, cuyo presidente vitalicio es Tafataona Mahoso, un antiguo compañero de viaje del jefe del Estado, es otra cosa distinta de la publicación de la verdad y la protección de los periodistas. Su postura es conocida. Por otra parte, incluso la justicia zimbabuense ha reconocido que la Comisión es incapaz de resolver algunos asuntos con equidad. Así, el 8 de febrero, el Alto Tribunal de Harare anuló la decisión de la MIC de negar una licencia de publicación a la editorial del *Daily News* y de su suplemento, el *Daily News on Sunday*, prohibido desde 2003. Los abogados de los periódicos recurrieron a la justicia, argumentando que el presidente de la MIC se había negado a declararse incompetente, a pesar de un mandato del Tribunal Supremo, de 2005, que le sentenció, por primera vez, de tomar partido. El juez del Alto Tribunal de Harare indicó que efectivamente la decisión de la MIC era sesgada, entre otras cosas por la influencia de los servicios de inteligencia, y que en consecuencia la Comisión tenía que volver a examinar la petición de licencia de los periódicos. Fortalecida por dos sentencias favorables, la editorial de los periódicos atacó el 28 de marzo al Ministro de Información y Publicidad, Tichaona Jokonya, ante el Alto Tribunal, con el fin de forzar que fuera el gobierno, en lugar de la MIC, descalificada, quien se pronunciara sobre la autorización de publicación. Pero, entre argucias jurídicas y violaciones de la ley, el gobierno zimbabuense hizo de todo para retrasar el momento en que se vería obligado a adoptar una decisión. Y, de hecho, todavía no ha tomado ninguna.

Por tanto, la MIC ha continuado vigilando tranquilamente y castigando las voces discordantes. "Peticiones de investigación" de tal o cual periodista, amenazas de retirada de licencia o acreditación, denuncias a la policía; esas son sus armas. Y

ZIMBABUE



así, en la semana del 3 de octubre la policía hizo irrupción en uno de los puntos de distribución del diario privado *The Zimbabwean*, en Harare. Los agentes de policías se llevaron una copia de la autorización de importación del periódico, así como algunos ejemplares de la semana anterior. El diario, uno de los últimos independientes que quedan en el país, se publica en el Reino Unido y se imprime en Sudáfrica, evitando así la draconiana legislación de la prensa privada, que la MIC custodiaba como una perra guardiana. La semana anterior el periódico había publicado un artículo, en el que algunas fuentes militares denunciaban casos de corrupción en la policía zimbabuense. Pocos días antes, el 1 de octubre, Tafataona Mahoso, pidió al Ministerio de Información que investigara al sindicato de los periodistas zimbabuenses (Zimbabwean Union of Journalists, ZUJ), estimando que animaba un "lobby anti Zimbabwe". Aseguraba que poseía documentos que daban cuenta de una petición de fondos, formulada por la ZUJ, a la Embajada de Holanda y a la UNESCO. En el mismo momento, Tafataona Mahoso presentó también una petición para que investigaran a Nunurai Jena, secretario de la ZUJ en la provincia de Mashonaland West, al que acusaba de trabajar en la radio pública norteamericana *Voice of America* (VOA), con sede en Washington, sin tener autorización de la MIC para hacerlo. El 28 de septiembre, finalmente la Comisión criticó violentamente la antena zimbabuense de la organización de defensa de la libertad de prensa Media Institute of Southern Africa (MISA-Zimbabwe) que, según dice, apoya "un cambio de régimen".

RESISTENCIA DE LA JUSTICIA

Pero la justicia zimbabuense resiste cada vez más los abusos de poder del gobierno. Así, el 25 de

septiembre, el presidente del tribunal de Harare decidió rechazar el tercer retraso del juicio de la radio privada *VOP*, solicitado por la acusación. "Esto se está convirtiendo en un circo", declaró, antes de decidir también dejar sin efecto las diligencias abiertas a los diez miembros del directorio de la emisora. Arnold Tsunga, Millie Phiri, Isabella Matambanadzo, Davis Masunda, Nhlanhla Ngwenya, Lawrence Chibwe y John Masuku, miembros del directorio, fueron detenidos en enero de 2006 con la excusa de que "poseían y utilizaban material de transmisión sin autorización". Maria Nyanyiwa, Takunda Chigwanda y Nyasha Bosha, empleados de la radio, estuvieron detenidos cuatro días, en diciembre de 2005, tras un registro de la policía en los locales de la emisora, en el centro de la capital. Todos quedaron en libertad con fianza.

Sobre la marcha, y cuando los recursos puramente legales no le bastan, el gobierno zimbabuense recurre al ejército, y entre otros a la poderosa Central Intelligence Organisation (CIO). Incapaz de conseguir detener a su personal, residente en el extranjero, a partir de la segunda quincena de junio el gobierno ordenó interferir la emisión de *Studio 7*, el programa de *VOA* destinado a Zimbabwe. Ahora se encuentra parasitada por un "ruido de chicharra", idéntico al que desde febrero de 2005 cubre la programación en onda corta de la emisora privada *SW Radio Africa*, con sede en Londres, y la de *VOA* emitida desde Ámsterdam, desde septiembre de 2005. Según las informaciones de Reporteros sin Fronteras, esas interferencias son posibles gracias a la presencia en Harare de expertos chinos, invitados para formar a sus homólogos zimbabuenses en telecomunicaciones y radiocomunicaciones, en el marco de los acuerdos de cooperación económica y técnica firmados entre ambos países.



Informe anual 2007

AMÉRICAS

EL AÑO DE TODOS LOS PELIGROS

El grado de desarrollo económico, o el nivel democrático de un país ¿garantizan una libertad real de su prensa? No, si juzgamos por la situación de las Américas en 2006, donde la celebración de doce grandes elecciones ha coincidido con un sombrío balance para los periodistas. De cinco en 2002 a siete en 2005 (con un triste intervalo de doce en 2004), el número de periodistas a los que han matado en el continente ha pasado a dieciséis, a los que hay que añadir cuatro desaparecidos.

México totaliza nueve muertos y tres desaparecidos, en un contexto de expansión del narcotráfico y de inestabilidad política, agravada por la explosión de la crisis social en el Estado de Oaxaca a partir del mes de mayo, y la controvertida elección de Felipe Calderón en las presidenciales del 2 de julio. La muerte por disparos del camarógrafo norteamericano Brad Will, de la agencia *Indymedia*, en pleno rodaje de una manifestación de maestros el 27 de octubre en Oaxaca, es un ejemplo de la violencia de las autoridades y, a la vez, de la persistencia de la impunidad. Dos policías implicados en el asesinato del periodista, y considerados cercanos al gobierno local, quedaron en libertad apenas un mes después de ser detenidos.

En Colombia mataron a tres periodistas y cerca de otros diez, amenazados, se vieron obligados a marcharse de su región, e incluso del país. La ruptura de las conversaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de nuevo obstaculiza el acceso de los medios de comunicación a determinadas regiones. El fracaso de la desmovilización de los paramilitares de extrema derecha, con frecuencia reconvertidos al narcotráfico y a los asesinatos por contrato, hace que los periodistas locales corran grandes riesgos en los departamentos del Norte. Precisamente unos paramilitares "desmovilizados" serían los autores, el 4 de febrero en Montería (Norte) del atentado contra Gustavo Rojas Gabalo, de *Radio Panzemu*, fallecido tras cuarenta y cuatro días de hospitalización.

LAS PRISIONES DEL CARIBE

La sola dictadura del continente, Cuba, no es la única que encarcela a periodistas, pero sigue manteniendo su rango de segunda cárcel del mundo para la prensa, con veinticuatro detenidos. La sucesión a la cabeza del Estado entre Fidel Castro y su hermano Raúl, el 31 de julio, no ha modificado en nada la actitud del régimen con los medios de comunicación disidentes. El segundo semestre estuvo marcado por toda una serie de intimidaciones y citaciones de la policía política. Dos periodistas detenidos en 2005 salieron en libertad, pero han enviado a otros dos de sus colegas entre rejas: Armando Betancourt, colaborador independiente de *Nueva Prensa Cubana* en Camagüey, detenido sin juicio por la Seguridad del Estado desde el 23 de mayo, y Raymundo Perdigón Brito, fundador de la agencia *Yayabo Press*, condenado a cuatro años de cárcel, el 5 de diciembre, por "peligrosidad social". A un tercero, Guillermo Espinosa Rodríguez, de la *Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO)*, le han caído dos años de arresto domiciliario.

En Cuba está detenido también un periodista que hace el número veinticinco, aunque en este caso el responsable es el ejército norteamericano. Sami Al-Haj, camarógrafo sudanés del canal qatari *Al-Jazira*, forma parte de los 400 "enemigos combatientes" detenidos por Estados Unidos en la base militar de Guantánamo, en nombre de la "guerra contra el terrorismo" y al margen de cualquier marco jurídico. Encarcelado sin cargos, sometido a interrogatorios prácticamente diarios, el 13 de junio Sami Al-Haj inició su quinto año de cautiverio en esa base, del que ahora la comunidad internacional reclama el cierre.

A este escándalo jurídico y humanitario se añade la neta degradación de la libertad de prensa en Estados Unidos, que se puso de manifiesto con el encarcelamiento, por dos veces, del blogger californiano Josh Wolf, primero en agosto y después en septiembre. El joven podría permanecer en la celda hasta julio de 2007, mientras no entregue unos archivos de vídeo. A nivel federal hay abiertos una quincena de casos que se refieren al secreto profesional, mientras que 33 Estados de la Unión reconocen a los periodistas el derecho a la confidencialidad. Todavía no se ha debatido, ni votado, una proyecto de ley federal en ese sentido, presentado en febrero de 2005.

¿TRANQUILIDAD O LIBERTAD?

En América Central se extiende el contraste entre tres tipos de países. En Costa Rica y Panamá, la prensa disfruta de una relativa libertad. En Nicaragua y El Salvador, la escasez de ataques a periodistas se debe menos a una libertad real que al dominio de los políticos sobre los medios de comunicación, y a la autocensura. En Guatemala y Honduras, esas dificultades se conjugan con la violencia contra una prensa poco

dócil. El 9 de septiembre, la prensa guatemalteca se vistió de luto por el asesinato del periodista radiofónico Eduardo Maas Bol; y Vinicio Aguilar Mancilla, de la emisora independiente *Radio 10*, escapó en agosto a un atentado.

En cambio, en Haití, la prensa solo sufrió algunas agresiones, o abusos de autoridad. Sin embargo, todavía no se ha hecho justicia a los periodistas asesinados durante la presidencia de Jean-Bertrand Aristide, o durante el gobierno de transición. En libertad, los presuntos autores de esos crímenes incluso se atreven a mostrarse. El nuevo gobierno de René Préval tiene una gran tarea por delante para instaurar un sistema judicial justo y eficaz.

América del Sur también tuvo su cuota de tragedia, con tres muertos y un desaparecido. En Ecuador, en febrero asesinaron a dos periodistas con veinticuatro horas de intervalo pero solo la muerte de José Luis León Desiderio, de *Radio Minutero*, podría tener relación con sus actividades. En Paraguay, la desaparición y el probable asesinato, el 4 de febrero, de Enrique Galeano, de la emisora *Radio Azotey*, y un atentado fallido contra un periodista del diario *ABC Color*, pusieron de manifiesto hasta qué punto la prensa sigue expuesta a las dudosas conexiones entre algunos responsables políticos y el crimen organizado. Con un centenar de casos de agresiones y amenazas, Perú sigue ostentando el record continental de brutalidades diarias contra la prensa y dos políticos, presuntos autores intelectuales del asesinato de dos periodistas en 2004, obtuvieron una escandalosa clemencia judicial.

BORRASCAS POLÍTICAS

En Venezuela sigue viva la tensión entre el gobierno de Hugo Chávez y la prensa privada. Cuatro años y medio después del fallido golpe de Estado contra el presidente bolivariano, reelegido por una amplísima mayoría el 3 de diciembre de 2006, los grandes grupos audiovisuales continúan en el punto de mira del poder, aunque éste utiliza poco, hasta ahora, arsenal legislativo - Ley de responsabilidad social de los medios audiovisuales de noviembre de 2004, y Ley de reforma del código penal de marzo de 2005 - para contener su influencia. Veinticinco artículos del nuevo código penal han sido incluso objeto de un recurso de anticonstitucionalidad, presentado por el Fiscal General de la República. La prensa paga ante todo el precio de una inseguridad tenaz. Jorge Aguirre, fotógrafo del diario *El Mundo*, fue abatido por un falso policía en una manifestación, y a una veintena de periodistas les agredieron, sobre todo durante la campaña de las presidenciales.

También se produjo una intensificación de la violencia en período electoral en Brasil, donde un concejal golpeó hasta la muerte a un periodista y un cronista radiofónico resultó herido en un atentado, en la propia redacción. En octubre, en el momento de las votaciones, algunos medios de comunicación padecieron medidas judiciales de censura preventiva, e incluso el espionaje de la policía federal. Sin embargo, las difíciles relaciones entre la presidencia y los grandes medios privados pasan por una fase de apaciguamiento. Lo que no ocurre en Argentina, donde el presidente Kirchner sigue negándose a recibir a la prensa en la Casa Rosada. Las intimidaciones, las presiones políticas y sobre todo el chantaje de la publicidad oficial, han acabado propiciando censuras de programas y despidos de periodistas en las redacciones locales, y también en los medios de comunicación públicos nacionales. La piratería de los buzones del correo electrónico de dos periodistas del diario *Clarín* provocó un escándalo en el mes de abril.

Apenas llegada a la cabeza de la clasificación mundial de la libertad de prensa en el hemisferio Sur, Bolivia cayó de nuevo en una crisis política, en el último trimestre. Evo Morales, primer presidente indígena del país investido a comienzos del año 2006, se enfrenta ahora a amenazas secesionistas en cuatro departamentos. La prensa estuvo en la primera línea de los enfrentamientos entre oponentes y partidarios del gobierno. Lo mismo que en Venezuela, aumentan las divergencias entre los medios de comunicación públicos y privados, y no se excluye que pueda darse una "guerra mediática". En Santa Cruz, bastión de la oposición, ya se han producido dos intentos de atentado a la cadena pública *Canal 7*.

Benoit Hervieu
Responsable del despacho Américas

ARGENTINA

Superficie : 2.780.400 km².

Población : 38.750.000.

Idioma : español.

Jefe del Estado : Néstor Kirchner.

Mientras siguen siendo bastante tensas las relaciones entre la presidencia y la prensa, la presión política y el chantaje de la publicidad oficial han llevado a un cierto número de medios de comunicación, nacionales o regionales, a censurar sus programas.

Calificando públicamente a los periodistas de "burros" e "ignorantes" durante la fiesta nacional del 9 de julio, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente Néstor Kirchner, no contribuyó precisamente a tranquilizar las relaciones, ya muy tensas, entre la prensa y el poder. El Presidente sigue absteniéndose de organizar ruedas de prensa en la Casa Rosada pero ha sido sobre todo la presión política, tanto a nivel local como nacional, la que ha llevado a algunos medios audiovisuales a suprimir programas de su parrilla, e incluso a veces a despedir a los periodistas que los animaban.

El año 2006 empezó mal para José "Pepe" Eliashev, de la *Radio Nacional* (pública), cuyo programa de debate "Esto que pasa" desapareció el 1 de enero. El periodista cree que le despidieron por haber criticado, con razón, el silencio del gobierno federal con respecto a la prensa. A nivel local, el chantaje de la publicidad oficial ha obligado en muchas ocasiones a los medios de comunicación a someterse a la voluntad editorial de los gobernadores, o de los cargos públicos. En Tucumán (Norte), el 13 de marzo se aplazó sine die la difusión del programa "Periodismo de Verdad" en el canal local *5 ATS*. El motivo oficial fue que el canal quería dedicar más espacio al ocio y menos a la política. Pero la razón ociosa fue que el gobierno de la provincia había amenazado con no concederle un maná publicitario de 20.000 euros, indispensable para la supervivencia del medio. El 3 de mayo siguiente ocurrió lo mismo con el programa "Séptimo Día", difundido por una emisora local de la provincia de Santa Cruz, la región de donde procede el presidente Kirchner. Idem, finalmente, en julio para el programa matinal "Desayuno" del canal público *Canal 7* cuya presentadora del noticiario de la noche, Marcela Pacheco, fue despedida un mes antes, sin explicaciones.

Sergio Villordo, alcalde de Quilmes (provincia de Buenos Aires), intentó resueltamente el cierre de dos emisoras privadas de radio, *FAN 103.9* y *Radio Quilmes 106.9*, consiguiendo que el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) no les renovara la licencia. En el mes de junio se presentó el caso en la Cámara de los Diputados, que desaprobó la medida, aunque sin éxito. En agosto, Pedro Navarro, director de *Radio Quilmes*, tuvo que ser hospitalizado después de que le agrediera un concejal del Partido Justicialista (en el poder). En total, 34 periodistas argentinos fueron víctimas de violencia a lo largo del año, con frecuencia cometida por políticos, funcionarios o policías. Por cuestionar la gestión del alcalde de Santa Elena - en la provincia de Entre Ríos, donde son muy numerosas las agresiones -, Carlos Furman, de la emisora de radio *2 de octubre*, tuvo que refugiarse durante más de tres meses en un hotel, y llevar un chaleco antibalas. Dos periodistas de radio, Néstor Pasquini y Hugo Francischelli, están detenidos desde el 20 de diciembre en Córdoba (Centro-Norte), por "incitación a la violencia", "incendio intencionado" y "golpes y heridas". Dos semanas antes ambos, a quienes podrían condenar a una pena de tres a quince años de cárcel, cubrieron una manifestación que se transformó en un motín. Finalmente, el pirateo de los buzones del correo electrónico de varios periodistas nacionales, entre los que había dos del diario *Clarín*, provocó un escándalo en el mes de mayo.

Cuando se acercan las presidenciales de 2007, la relación con los medios de comunicación y la cuestión del reparto de la publicidad pública, se han convertido en dos retos de la campaña. La oposición ha presentado en el Congreso tres proposiciones de ley, para repartir mejor el maná publicitario entre los medios de comunicación. Pero nunca han figurado en el orden del día de los debates.

BOLIVIA

Superficie : 1.098.580 km².

Población : 9.182.000.

Idioma : español.

Jefe del Estado : Evo Morales Ayma.

En la última clasificación de la libertad de prensa establecida en septiembre de 2006 por Reporteros sin Fronteras el país se situó a la cabeza del hemisferio Sur, por el escaso número de agresiones a periodistas. Sin embargo, la inestabilidad política podría acentuar las divergencias entre los medios de comunicación públicos y privados.

Con "solamente" trece casos de agresiones a periodistas a lo largo de todo el año 2006, Bolivia se distingue positivamente de sus vecinos Perú, Argentina o Brasil. Pero, sin embargo, este armonioso cuadro no debe prestarse a engaño. Por una parte, la prensa boliviana todavía dispone de medios muy débiles en comparación con los de los países vecinos, y raramente los periodistas se arriesgan a tratar temas sensibles, como el narcotráfico o la corrupción; en especial, los casos de corrupción les llevan frecuentemente a autocensurarse. Sobre todo, la relativa calma que impera en los medios de comunicación podría no durar, teniendo en cuenta la situación política que permanece muy inestable. En el mes de diciembre la prensa, tanto la progubernamental como la de oposición, fue la primera en exponerse a los arreglos de cuentas entre partidarios y detractores del gobierno, en medio de un clima de crisis constitucional.

Bolivia pasó una página histórica en diciembre de 2005 llevando al poder a su primer presidente de origen indígena, Evo Morales. Demócrata, aunque reclamándose de Fidel Castro - poco después de su investidura, en enero, regañó públicamente a un periodista televisivo que calificó a Fidel de "dictador" -, el antiguo líder cocalero no esconde su desconfianza de los medios de comunicación privados. Además, su política de nacionalización de

los hidrocarburos y su convocatoria de una Asamblea Constituyente, elegida en el mes de agosto, chocan con la feroz oposición de la oligarquía y de los partidos de derechas, que gobernaron en otros tiempos.

La oposición, mayoritaria en cuatro de los nueve departamentos del país, no duda en esgrimir amenazas de secesión, en manifestarse y en atacar a los medios de comunicación públicos. El 8 de septiembre de 2006 dos bombas incendiarias dañaron los locales de la cadena pública *Canal 7* en Santa Cruz (Este), feudo de la oposición más radical al gobierno de La Paz. Según las autoridades, el atentado fue obra del movimiento Unión Juvenil Cruceñista, muy hostil a Evo Morales. En la misma semana, Juan Domingo Yanique, corresponsal de la radio pública *Red Patria Nueva* en el Departamento de Pando (Norte), otro feudo de la oposición, fue agredidos por miembros de un Comité cívico local, que repetían el nombre de su emisora. Otro corresponsal de *Canal 7*, y su colega de *Radio Televisión Popular*, sufrieron violencia en el mes de octubre, en unos enfrentamientos entre mineros.

Las autoridades tampoco cuidan a los medios de comunicación privados. El 12 de octubre, en La Paz, unos partidarios del gobierno saquearon los locales del canal privado *Unitel*.

BRASIL

Superficie : 8.547.400 km².

Población : 186.405.000.

Idioma : portugués.

Jefe del Estado : Luiz Inácio Lula da Silva.

El asesinato en julio del periodista Ajuricaba Monassa, cerca de Río de Janeiro, y el atentado en mayo al animador de una radio comunitaria, ponen de manifiesto la persistencia de la violencia contra la prensa local. Intimidaciones y censuras de medios de comunicación sirvieron también de telón de fondo a la campaña electoral de octubre.

Ajuricaba Monassa de Paula, de 73 años, no sobrevivió a la paliza que le dio el concejal Osvaldo Vivas, el 24 de julio de 2006, en Guapirimim (Estado de Río de Janeiro). El periodista independiente pagó con su vida el haber denunciado la existencia de dudosas prácticas económicas en la municipalidad. Dos meses y medio antes, en Quiterianópolis (Noreste), el cronista radiofónico comunitario Carmelo Luis de Sá había escapado a un atentado a disparos en pleno programa, cometido por el propio hijo del alcalde de la ciudad.

La prensa brasileña, sobre todo la local, sigue corriendo graves riesgos de represalias. Por revelar el tráfico de cadáveres, en beneficio de una organización mafiosa de la región de Río de Janeiro, la periodista María Mazzei, del diario *O Dia*, tuvo que esconderse a finales del mes de agosto. Con frecuencia, las autoridades policiales y judiciales locales tardan en reaccionar; eso, cuando las primeras no son cómplices de intimidaciones o amenazas. La justicia tardó más de un mes en recibir la denuncia por repetidas amenazas de muerte presentada el 7 de junio por Vilmar Berna, defensor del medio ambiente y director del *Jornal do Meio Ambiente* en Niterói (Estado de Río de Janeiro). Y, para ello, fue necesario que el diario nacional *A Folha de São Paulo* dedicara un artículo al asunto. En el momento más intenso de las revueltas organizadas en São Paulo por la organización mafiosa Primer Comando de la Capital (PCC), tres hombres fuertemente armados y encapuchados irrumpieron en la redacción del diario *Imprensa Livre*, agrediendo a los siete empleados que se encontraban allí y quemando 3.000 ejemplares de la edición del 18 de mayo. En total, a lo largo del año se han constatado una treintena de casos de agresiones, y el saqueo de cuatro medios de comunicación.

UNA CAMPAÑA AGITADA

La prensa nacional no quedó al margen cuando, poco antes de las elecciones generales del 10 al 29 de octubre, estalló un escándalo implicando al entorno de presidente. El 15 de septiembre Gedimar Passos, militante del Partido de los Trabajadores (PT, el partido de Lula) fue detenido en un hotel de São Paulo en posesión de un maletín con 600.000 euros. La cantidad estaba destinada a comprar un dossier comprometido para el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), y su jefe de filas Geraldo Alckmin, derrotado por Lula en las urnas el 29 de octubre.

Dos días después de la segunda vuelta de las presidenciales, tres periodistas del semanario *Veja* fueron citados en las oficinas de la policía de São Paulo, donde les presionaron para que facilitaran sus fuentes. El 8 de noviembre, el diario *A Folha de São Paulo* reveló que la policía federal había instalado escuchas en su oficina de Brasília, también en el marco del "escándalo del dossier". Los policías pretendían identificar a los periodistas que hubieran tenido el más mínimo contacto con el intermediario Gedimar Passos.

La campaña también causó víctimas localmente. El 1 de octubre, el *Diário de Marília*, con sede en la ciudad del mismo nombre (Estado de São Paulo), sufrió un asalto de partidarios del ex alcalde Abelardo Camarinha y de su hijo, diputado local. Ambos eran ya sospechosos de haber encargado el incendio intencionado de la redacción, el 8 de septiembre de 2005. De agosto a octubre las jurisdicciones electorales, regionales y federales, accedieron a las peticiones de los candidatos a senadores, diputados o gobernadores, prohibiendo que se publicaran algunas cosas, confiscando material o efectuando embargos en medios de comunicación y en sitios informativos,

BRASIL

en los Estados de Amapá, Minas Gerais, Paraná y en el Distrito Federal.

A pesar de todos esos obstáculos, y de que continúa vigente la ley de prensa del 9 de febrero de 1967, heredada de la dictadura militar y que establece penas de cárcel para los delitos de prensa, el gobierno federal dio pruebas en materia de libertad de expresión. El 3 de mayo, el presidente Lula firmó personalmente la Declaración de Chapultepec, de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la libertad de información y expresión. El 26 de julio, el inquilino del Planalto vetó una proposición de ley para reglamentar la profesión de periodista, que hacía obligatorio poseer una licenciatura y estar afiliado a una estructura colegial. Con respecto al asunto de la licenciatura obligatoria, hay abierto un debate que divide a la prensa brasileña y las dos mayores jurisdicciones federales se han contradicho mutuamente sobre

la cuestión. El 8 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia se pronunció a favor. Por unanimidad, el Tribunal Supremo Federal, cuya decisión prima, le desautorizó quince días después.

UN PRECEDENTE INQUIETANTE

La blogosfera brasileña se inflamó cuando cerraron "Repique no meio do mundo". En este caso, lo único que hizo la justicia electoral brasileña fue ordenar al responsable del blog, el 17 de agosto de 2006, que retirara la caricatura de un candidato a las elecciones senatoriales. Fue el albergador brasileño del blog, UOL, quien por propia iniciativa decidió después cerrar la publicación. El caso de "Repique no meio do mundo" es un precedente inquietante, porque podría incitar a los prestatarios técnicos de la Red brasileña a censurar publicaciones digitales, al margen de cualquier decisión judicial.

CANADÁ

Superficie : 9.970.610 km².

Población : 32.268.000.

Idiomas : francés, inglés.

Jefe del gobierno : Stephen Harper.

Las relaciones entre el gobierno federal y la prensa se han enfriado notablemente desde la entrada en funciones del Primer Ministro, Stephen Harper. Y la justicia deja en mal lugar al secreto profesional.

Stephen Harper, líder del Partido Conservador que salió victorioso de las legislativas del mes de enero, nombrado Primer Ministro de Canadá el 6 de febrero de 2006, parece desconfiar de los periodistas. Las maneras de su gobierno con los medios de comunicación recuerdan a veces a las de su vecino estadounidense, del que por otra parte es aliado. Las relaciones entre la prensa y el poder federal canadiense se enfriaron bruscamente cuando éste decidió, el 22 de abril, prohibir cualquier cobertura audiovisual de la repatriación de los cuerpos de los militares muertos en Afganistán. La represión de los periodistas presentes, tres días después, en la entrada de la base militar de Trenton (Ontario), generó una fuerte conmoción, incluso entre los familiares de los soldados. Igualmente, en el mes de noviembre la prensa se quejó del silencio del Primer Ministro con ocasión de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Lo mismo que sus colegas norteamericanos, aunque en menor medida, también los periodistas canadienses temen por el futuro del secreto profesional. Una nueva disposición del código penal, introducida el 15 de septiembre de 2004, les obliga a entregar sus documentos, notas y grabaciones sonoras y de vídeo, siempre que la policía las considere útiles en el marco de alguna investigación criminal; negarse a hacerlo supone una multa que puede elevarse hasta 250.000 dólares y/o una pena máxima de seis meses de cárcel. La cláusula se aplicó por primera vez en 2006 cuando, en el mes de febrero, la justicia conminó a Bill Dunphy, del diario *Hamilton Spectator*, a facilitarle la notas de una entrevista que le hizo a un presunto dealer, cuyo hermano estaba acusado de asesinato. El caso se ha apelado. A Ken Peters, un colega de la misma redacción, le condenaron en 2004 a 30.000 dólares, por callar el nombre de una fuente. Dos años más tarde todavía estaba esperando el juicio de apelación.

CHILE

Superficie : 756.630 km².

Población : 16.295.000.

Idioma : español.

Jefe del Estado : Michelle Bachelet.

Las agresiones siguen siendo escasas, pero la policía y el ejército no han perdido sus costumbres represivas, heredadas de la dictadura militar. El 30 de mayo agredieron a cinco periodistas y detuvieron arbitrariamente a otros tres, al final de una reunión.

Más bien con una buena puntuación en relación con el resto del continente en materia de libertad de prensa, el país no ha terminado de saldar cuentas de la dictadura del general Pinochet (1973-1990). El antiguo dictador, fallecido el 10 de diciembre de 2006, nunca respondió del asesinato durante su presidencia de 3.000 personas, entre los que se cuentan 68 profesionales de los medios de comunicación. En la víspera de los funerales, sus partidarios agredieron a varios periodistas televisivos.

Ahora, los periodistas chocan todavía con el silencio sobre ese período y son muchos los que se quejan de la persistente falta de pluralismo en los medios de comunicación. Por publicar, de acuerdo con un grupo de ex presos políticos, un artículo que incluía los nombres de algunos antiguos torturadores, Jorge Molina, del diario digital *El Mostrador.cl*, presionado, tuvo que dimitir de sus funciones.

Los policías y militares chilenos no han abandonado del todo las siniestras costumbres heredadas de la dictadura. La prensa pagó ampliamente el precio de la primera manifestación de envergadura a la que tuvo que enfrentarse Michelle Bachelet, primera presidenta del país elegida el 15 de enero. El 30 de mayo, delante del palacio presidencial de La Moneda, los policías reprimieron con dureza un

amplio movimiento de protesta en favor de la reforma del sistema escolar, que se saldó con la detención de ocho periodistas. Las fuerzas del orden arrojaron piedras a Marco Cabrera, Gustavo Pavez y Libio Saavedra, camarógrafos de los canales de televisión *Red TV*, *Canal 13* y *Canal 9*, y después les pegaron en el suelo. Los tres periodistas, y otros dos colegas fotógrafos que sufrieron agresiones similares, tuvieron que ser hospitalizados. El mismo día, se llevaron a la fuerza a una comisaría a Julio Oliva, redactor jefe del semanario *El Siglo*, y a otros dos periodistas. Los carabineros les dijeron que su proximidad al Partido Comunista era motivo suficiente para detenerles. El escándalo provocado por esas violaciones de los derechos de la prensa llevaron a Michelle Bachelet a cesar al día siguiente al jefe de las fuerzas especiales de la policía, Osvaldo Jara.

Los periodistas tienen que hacer frente también a la violencia de grupos neonazis. Un año después de que destrozaran la sede de la televisión nacional *TVN* en Valparaíso, la redacción del semanario *Impacto* recibió a su vez amenazas de muerte de un grupúsculo de extrema derecha.

Se sigue pudiendo aplicar sanciones penales a los delitos de prensa y son moneda corriente los procedimientos por difamación, aunque no necesariamente llegan hasta el final.

COLOMBIA



Superficie : 1.138.910 km².

Población : 45.600.000.

Idioma : español.

Jefe del Estado : Alvaro Uribe Vélez.

Tres periodistas asesinados y otros siete amenazados, que se vieron obligados a marcharse de la región, e incluso del país. Desmovilizados pero no desarmados, los paramilitares continúan sembrando el terror, en particular en los departamentos del Norte.

Reelegido el 28 de mayo de 2006, el presidente Alvaro Uribe ha iniciado más bien mal su segundo mandato: otra ruptura en las conversaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, estimadas en 17.000 combatientes y notorias predadoras de la libertad de prensa), un escándalo de falsos atentados del ejército atribuidos a las FARC, otro escándalo político provocado por las conexiones entre algunos políticos de la mayoría y los paramilitares y, sobre todo, el fracaso de la desmovilización de estos últimos. El plan "Justicia y Paz", iniciado en 2003 y finalizado en abril de 2006, ha llevado a la desmovilización oficial de 30.000 milicianos de extrema derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aunque a cambio de la impunidad. El plan no es un asunto de nadie, ni sobre todo de los periodistas locales, abandonados a las amenazas de estos otros predadores de la prensa, que no se han desarmado y se han reconvertido al narcotráfico, y a los asesinatos por contrato.

En el marco de la investigación sobre el asesinato de Gustavo Rojas Gabalo, apodado "El Gaba", cronista de *Radio Panzemu* en Montería (Noroeste), detuvieron a cuatro hombres, y entre ellos a dos antiguos miembros de las AUC. Al periodista, que no dudaba en atacar la corrupción local, le abatieron dos individuos que iban en una moto el 4 de febrero de 2006. Murió tras cuarenta y cuatro días de hospitalización. El mes de agosto fue letal para la prensa colombiana con el asesinato, el día 9 en Yumbo (Oeste), de Milton Fabián Sánchez, de la radio comunitaria *Yumbo Estéreo*. El crimen no se ha aclarado, pero también este periodista se dedicaba a temas sensibles, como la violación de los derechos humanos y la seguridad. Atilano Segundo Pérez, director de programas de la emisora local *Radio Toledar*, pagó quizá con su vida, el 22 de agosto en Los Alpes de Cartagena (Norte), el hecho de haberse referido en antena a las actividades criminales de un grupo paramilitar, supuestamente desmovilizado.

EXILIOS FORZOSOS

Con frecuencia, son los paramilitares, particularmente implantados en los departamentos costeros del norte del país y denunciados como principales predadores por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), los autores de las amenazas que obligan a los periodistas a marcharse de su región, e incluso del país. Olga Cecilia Vega, corresponsal del diario norteamericano *The New Herald*, entrevistó a un jefe militar de las FARC en octubre de 2005. Desde entonces no cesó de recibir amenazas y advertencias, y de ser objeto de sospechosos seguimientos. El 1 de febrero tuvo que huir precipitadamente de Florencia (Sur), tras el ultimátum de dos desconocidos, que le acusaron de ser una "guerrillera". En 2002, la periodista, que entonces trabajaba en *RCN Radio*, escapó a dos atentados perpetrados por las AUC.

Otros nueve periodistas se vieron obligados a marcharse, en condiciones similares. El 6 de julio de 2006, Heriberto Hoyos Medina, un antiguo rehén de las FARC y presentador del programa "Las voces del secuestro" en *Radio Caracol*, escapó resueltamente del país a causa de las repetidas amenazas de un misterioso Frente de Acción y Justicia por la Libertad y la Democracia. En cuanto a un no menos misterioso Frente Social para la Paz, intentó comprometer a Hollman Morris, periodista y productor del programa "Contravía" - emitido en el canal público *Canal Uno* - haciendo circular una cinta de vídeo manipulada, que le presentaba como portavoz de las FARC. Detrás de los firmantes se esconderían antiguos paramilitares, pero Hollman Morris se había granjeado también la antipatía del ejército, el gobierno y el propio presidente Alvaro Uribe, del que en antena criticó el tratamiento que daba a la guerra civil. Las calumniosas acusaciones de colusión con la guerrilla sirvieron también para alimentar en junio la ira de los paramilitares - rebautizados como Frente Democrático Colombia Libre o



COLOMBIA

Autodefensas Colombia Libre, Mesa Nacional Unificada - contra el colectivo Medios para la Paz, y otras veintiocho ONG's, entre ellas la FLIP. En el Norte, un comando de las "Aguilas negras" llevó a cabo, entre octubre y diciembre, una campaña de terror contra los medios locales, y en particular contra la emisora *Radio Galón*, con sede en Santa Marta.

El conflicto larvado entre Colombia y Venezuela - el gobierno de Alvaro Uribe sospecha que el de

Hugo Chávez encubre a las FARC - tuvo su primera repercusión en el terreno de los medios de comunicación. El 19 de noviembre, Freddy Muñoz, corresponsal colombiano del canal latinoamericano *Telesur*, creado por impulso de Hugo Chávez y con sede en Caracas, fue detenido e inculpado, un mes más tarde, de "rebelión y terrorismo". El periodista, acusado sin pruebas de ser el artífice de un atentado cometido por las FARC en 2002, quedó en libertad bajo control judicial el 9 de enero de 2007.



CUBA

Superficie : 110.860 km².

Población : 11.270.000.

Idioma : español.

Jefe del Estado : Raúl Castro (interino).

La retirada del poder de Fidel Castro, al que sucedió su hermano Raúl el 31 de julio, no ha rebajado la presión contra la prensa independiente. En el país hay veinticuatro periodistas encarcelados. Tras llevar a cabo durante siete meses varias huelgas de hambre, para reclamar el libre acceso de todos los cubanos a Internet, Guillermo Fariñas Hernández ha sido galardonado con el Premio Ciberlibertad de Reporteros sin Fronteras.

Raúl Castro ¿soltará lastre en las libertades fundamentales? Es una pregunta que se plantea más allá de las filas de la disidencia cubana desde que Fidel Castro, enfermo, se retiró del poder el 26 de julio y cedió oficialmente las riendas del Estado a su hermano, hasta entonces Ministro de Defensa y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. De momento, el régimen no ha dejado de endurecer la vida de los disidentes, y en particular la de los periodistas independientes.

Cuba sigue manteniendo su rango de segunda cárcel del mundo para los periodistas. Dos puestas en libertad se "compensaron" rápidamente con dos nuevos encarcelamientos, manteniendo a 24 el número de periodistas detenidos en la isla. El 22 de marzo, Lamasiel Gutiérrez Romero, corresponsal del sitio *Nueva Prensa Cubana* en la Isla de la Juventud (Oeste), salió de la cárcel de Mantonegro (provincia de La Habana), donde cumplía una condena de siete meses por un "delito de resistencia y desobediencia civil". Vigilada muy de cerca por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el periodista regresó a su domicilio de la Isla de la Juventud, que tiene prohibido abandonar. El 20 de noviembre, Oscar Mario González Pérez, cofundador de la agencia *Grupo de Trabajo Decoro*, quedó en libertad tras pasar detenido un año y cuatro meses, sin sentencia. Detenido el 22 de julio de 2005, en la víspera de una manifestación disidente en La Habana, en ningún momento le inculparon de nada.

También detenido sin el menor cargo, Armando Betancourt, colaborador independiente de *Nueva Prensa Cubana* y director de *El Camagüeyano*, una pequeña revista clandestina, fue arrestado por la Seguridad del Estado (policía política) el 23 de mayo en Camagüey (Centro). Trasladado una semana más tarde a una unidad de la PNR, le encerraron en una celda de aislamiento y le prohibieron recibir visitas.

Raymundo Perdigón Brito apenas tuvo tiempo de poner en marcha la pequeña agencia *Yayabo Press*, que fundó junto con su hermana el 17 de noviembre. Al periodista le detuvieron y, el 5 de diciembre, el tribunal provincial de Sancti Spiritus (Centro) le condenó a una pena de cuatro años de cárcel por "peligrosidad social predelictiva".

Idéntica negativa a dejar sus actividades le costó, a Ahmed Rodríguez Albacia, de 22 años, de la agencia *Jóvenes sin Censura*, permanecer detenido del 4 al 12 de diciembre en el cuartel general de la Seguridad del Estado, en La Habana.

A lo largo del segundo semestre, las interpelaciones y las detenciones arbitrarias de corta duración sobrepasaron en número - en total, una treintena - a las amenazas normales y las agresiones. El 13 de septiembre, Odelín Alfonso, corresponsal de *Cubanet*, y Milisa Valle Ricardo, de *Jóvenes sin Censura*, pasaron la jornada en los locales de la PNR; la primera en La Habana y la segunda en Holguín (Este). Citado por dos veces en la Seguridad del Estado, en febrero y abril, Roberto Santana Rodríguez, colaborador independiente de *Cubanet* en La Habana, corrió la misma suerte el 2 de noviembre. En Santiago de Cuba (Sudeste), a Guillermo Espinosa Rodríguez, de la *Agencia de Prensa Libre Oriental* (APLO), le cayeron dos años de arresto domiciliario por "peligrosidad social".

Tampoco se ha relajado la presión sobre las víctimas de la "primavera negra" de marzo 2003, tanto en los casos de los veinte periodistas que continúan encarcelados, como en los de quienes disfrutaron de una suspensión de condena, por razones de salud. Liberados en 2004, los periodistas independientes Oscar Espinosa Chepe y Jorge Olivera Castillo, que tienen prohibido salir del territorio, tuvieron que volver a pasar por la justicia habanera, el uno para un "control político" y el otro

CUBA



para un trabajo de interés general. A José Ubaldo Izquierdo Hernández, del *Grupo de Trabajo Decoro*, el servicio médico de la cárcel le declaró "no apto para la detención", a causa de que ha empeorado mucho su estado de salud, pero le mantienen internado. Afectado por una tuberculosis celular, Normando Hernández González, director del *Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey*, ingresó en el hospital el 5 de diciembre y fue reenviado a la cárcel el 27. Juan Carlos Herrera Acosta, de la *APLO*, y Fabio Prieto Llorente, han soportado las repetidas palizas de sus guardianes. Alberto Gil Triay Casales, de la agencia *La Estrella Solitaria*, condenado en noviembre de 2005 a siete años de cárcel por "propaganda subversiva", efectuó en septiembre una huelga de hambre.

INTERNET

Ya se sabía que el gobierno cubano era experto en materia de escuchas telefónicas, pero ahora le descubrimos igualmente exitoso en materia de

Internet. Como el modelo chino - desarrollar Internet al tiempo que se le controla - era demasiado caro, Fidel Castro ha optado por un método más simple, para garantizar su influencia en este medio de comunicación : simplemente mantiene al margen de la Red a la práctica totalidad de su población. En Cuba, acceder al Net es un privilegio al que muy pocos tienen derecho, y que necesita autorización expresa del Partido único. Incluso si uno consigue conectarse a la Red, frecuentemente de forma ilegal, en cualquier caso accede a un Internet ultracensurado.

Entre febrero y agosto, Guillermo Fariñas Hernández, director de la agencia *Cubanacán Press* en Santa Clara (Centro), se negó varias veces a alimentarse con el fin de conseguir acceso libre a Internet para todos los cubanos. El 12 de diciembre se le otorgó el Premio Ciberlibertad de Reporteros sin Fronteras - Fundación de Francia.

ECUADOR

Superficie : 283.580 km².

Población : 13.230.000.

Idioma : español.

Jefe del Estado : Rafael Correa.

En este año han enlutado a la prensa dos asesinatos, cuyo móvil no se ha establecido. Sobre todo, la campaña presidencial de noviembre polarizó excesivamente a los medios de comunicación.

Dos asesinatos, con menos de veinticuatro horas de intervalo, enlutaron a la prensa ecuatoriana en el mes de febrero de 2006. José Luis León Desiderio, de la emisora *Radio Minutera*, fue el primero en sucumbir a las balas de dos asesinos, en la noche del 13 al 14 de febrero, no lejos de su domicilio en el suburbio pobre de Guayaquil. El periodista animaba un programa de debate, y sus colegas no excluyen que pudiera tratarse de una venganza. Sin embargo, Guayaquil es famosa por su inseguridad y el fotógrafo Raúl Suárez Sandoval, de 43 años, fue la víctima de la noche del 14 de febrero. Al parecer, el asesinato no tendría ninguna relación con sus actividades.

Después del derrocamiento del presidente Lucio Gutiérrez, en abril de 2005, la libertad de prensa ha pasado por un periodo de tregua. Aparte de la brutalidad policial cometida el 31 de mayo con dos periodistas deportivos, a lo largo del año se han constatado pocos casos de agresiones. Más espectacular fue el secuestro de ocho periodistas,

durante varias horas, llevado a cabo por las internas de la cárcel de mujeres de Guayaquil.

Sin embargo, la relativa calma en los medios de comunicación observada en el país podría no durar. En efecto, Ecuador sigue expuesta a una grave inestabilidad política y, en la última década, ningún presidente ha terminado su mandato. Los medios de comunicación contribuyeron a alimentar una indecente campaña electoral entre los dos finalista de las presidenciales del 26 de noviembre, que se saldaron con una amplia victoria del economista de izquierda Rafael Correa. Su adversario, el millonario bananero ultraliberal Alvaro Noboa, atacó en particular al canal *Ecuavisión*, acusándole de apoyar a Rafael Correa y de "participar en la destrucción del país". No hay un ambiente relajado y los medios de comunicación, igual que durante la campaña estuvieron expuestos a la venganza de cada uno de los campos políticos, ahora podrían ser los blancos de algunos arreglos de cuentas.

ESTADOS UNIDOS

Superficie : 9 629 090 km².

Población : 298 213 000.

Idioma : inglés.

Jefe del Estado : George W. Bush.

La libertad de prensa, empalidecida ya por la detención, en la base militar de Guantánamo, del camarógrafo sudanés de *Al-Jazira* Sami Al-Haj, se agravó aun más con el encarcelamiento del periodista y blogger independiente Josh Wolf. Con el aval del gobierno, la justicia federal continúa sancionando la protección de las fuentes.

En el año 2005 la prensa norteamericana dio un mal giro con las doce semanas de detención de Judith Miller, entonces en el *New York Times*, condenada por negarse a revelar sus fuentes. El año 2006 ha confirmado la neta degradación de la situación de los medios de comunicación en el país de la Primera Enmienda. El 5 de junio, la Corte Suprema, negándose de nuevo a pronunciarse sobre el derecho de los periodistas a no facilitar los nombres de sus contactos, prolongó un statu quo insostenible que consiste en que el secreto de las fuentes está reconocido en 33 Estados de la Unión, pero no a nivel federal. Lógicamente, la renovación del Congreso, el 7 de noviembre, ha retrasado la votación de una "ley escudo" federal, concediendo ese privilegio a los periodistas. La administración Bush, sancionada también por sus violaciones de las libertades públicas, ahora tiene que contar con la mayoría parlamentaria demócrata. Antes del final del mandato presidencial ¿logrará esa mayoría llegar hasta el punto de aprobar las proposiciones de ley sobre libertad de circulación de la información ("Free Flow of Information Act"), aparcadas en el Capitolio desde febrero de 2005?

Mientras tanto, la justicia federal continúa esgrimiendo el argumento de la "seguridad nacional", para sancionar a periodistas. Todavía están abiertos los procedimientos de una quincena de casos relativos al secreto profesional, y algunos de ellos no tienen nada que ver con la seguridad nacional. Así, un juez federal requirió el 15 de agosto, con amenaza de cárcel, a Lance Williams y Mark Fainaru-Wada, del *San Francisco Chronicle*, que facilitaran sus fuentes informativas. Ambos periodistas hicieron públicos en 2004 los elementos de la investigación de un gran jurado, que implicaban a la sociedad BALCO (Bay Area Laboratory Cooperative), sospechosa de haber proporcionado productos dopantes a algunos deportistas de alto nivel. El caso se ha apelado.

UN BLOGGER ENCARCELADO

Por lo que respecta a Josh Wolf, no tuvo la suerte de permanecer en libertad. Blogger y periodista independiente, este californiano de 24 años grabó en 2005 una manifestación contra el G8, durante la cual sufrió daños un coche policial. En el marco de la investigación de un gran jurado sobre aquellos hechos, la justicia federal ordenó a Josh Wolf que entregara su cinta de vídeo. La negativa del blogger le costó un mes de detención en agosto y posteriormente, el 18 de septiembre, que un tribunal federal de apelación volviera a enviarle a la celda. El 18 de noviembre, el citado tribunal decidió mantener a Josh Wolf en la cárcel hasta que finalice la investigación del gran jurado sobre el automóvil dañado... en julio de 2007, si no se aviene a entregar sus archivos de vídeo. El 26 de mayo, un tribunal de apelación del Estado de California reconoció a los bloggers el privilegio del secreto de las fuentes, igual que el de los periodistas.

Atacado por el gobierno de George W. Bush por revelar sus programas de espionaje bancario y telefónico, una vez más el *New York Times* pagó el precio de las diferencias existentes entre las legislaciones local y federal. El 27 de noviembre, la Corte Suprema se negó a suspender una decisión judicial que obligaba al diario a facilitar los extractos telefónicos de dos de sus periodistas, y entre ellos el de Judith Miller. De nuevo fue un asunto de fugas en los servicios de inteligencia el que llevó a la justicia federal a exigir, el 1 de agosto, los nombres de las fuentes de la periodista, y de su colega Philip Shenon; sin embargo habían ganado el caso en primera instancia, con un juez de Nueva York, en febrero de 2005.

QUINTO AÑO EN GUANTÁNAMO

Evidentemente, el caso más grave sigue siendo el de Sami Al-Haj, encarcelado sin cargos en la base militar de Guantánamo. Interrogado en ciento

ESTADOS UNIDOS

cincuenta ocasiones para que confiese unas fantasmagóricas relaciones entre el canal qatari *Al-Jazira*, en el que trabaja como camarógrafo, y Al Qaeda, el periodista sudanés inició el 13 de junio de 2006 su quinto año de internamiento sin juicio. En uno de los escasos contactos que ha tenido con su abogado, el londinense Clive Stafford-Smith, también amenazado por las autoridades militares del campo, el periodista habló por primera vez de la decisión de terminar con su vida. El 29 de junio, la Corte Suprema decidió que son inconstitucionales las jurisdicciones militares encargadas de juzgar a los 400 detenidos en Guantánamo. A pesar de esa pequeña victoria del derecho, el la base es casi inaccesible para la prensa: el 14 de junio expulsaron a cuatro periodistas de los diarios *Los Angeles Times*, *Miami Herald* y *Charlotte Observer*. Peor aún, justo al final del mandato, el 17 de octubre, se aprobó una ley que autoriza la utilización de tortura con los presos.

UNA EMPRESA NORTEAMERICANA AL SERVICIO DE LA CENSURA DE LA WEB

Estados Unidos, fiel a la Primera Enmienda de su Constitución, no censura Internet en su territorio. Sin embargo, son norteamericanas algunas de las empresas que ayudan a países represivos, como Birmania o Túnez, a filtrar la Web. Igualmente en China, los buscadores Yahoo!, Google y Microsoft (MSN) se han avenido a censurar los resultados de las búsquedas. Unos miembros de la Cámara de Representantes han presentado un proyecto de ley, Global Online Freedom Act (GOFA), para regular la actividad de esos gigantes de Internet. Pero el texto avanza lentamente en el Congreso, y su futuro es incierto.

Otro tema de preocupación, el principio de la neutralidad de Internet, fue rechazado por el Senado en junio de 2006. Según el concepto, que de momento se respeta en la Red mundial, los operadores de telecomunicaciones (ej: Verizon, France Telecom.) no están autorizados a establecer diferencias entre las personas, u organizaciones, a quienes proporcionan servicio en la Red. Tanto si el cliente es un blog pequeño, como si se trata de un gran sitio comercial, tiene derecho a recibir la misma calidad en el servicio. Reporteros sin Fronteras sostiene que "defender la neutralidad de Internet es defender la libertad de expresión". En efecto, si los operadores de telecomunicaciones estuvieran autorizados a ofrecer diferentes servicios según el precio pagado por quienes proporcionan contenidos, es probable que las pequeñas publicaciones digitales, y entre ellas los blogs, quedaran relegados a un Internet de saldo, cuyos rendimientos serían muy inferiores a los de las empresas comerciales.

De la justicia californiana nos llegó, sin embargo, una buena noticia. La Corte Suprema de ese Estado decidió, en noviembre de 2005, y en el marco de una denuncia por difamación, que los intermediarios técnicos de Internet no pueden ser considerados responsables de los contenidos que transmiten. Una jurisprudencia que, por otra parte, se extiende a los moderadores de los foros y a los autores de blogs en que se colocan mensajes difamantes. Solo se puede emprender acciones judiciales contra los autores intelectuales de los contenidos.

GUATEMALA

Superficie : 108.890 km².

Población : 12.600.000.

Idioma : español.

Jefe del Estado : Oscar Berger.

En septiembre mataron a un periodista. Un mes antes, otro escapó por poco a la muerte en un atentado. A pesar de la despenalización de los delitos de prensa siguen produciéndose muchas agresiones, y la concentración de medios de comunicación favorece la presión de las autoridades.

Después de que lo hicieran Honduras, Costa Rica, Perú, Argentina y Paraguay, en 2006 Guatemala se ha convertido en el sexto país de Latinoamérica que despenaliza los delitos de prensa. El 1 de febrero, la Corte Constitucional validó el recurso de inconstitucionalidad presentado por Mario Fuentes Destarac, presidente de la Cámara Guatemalteca del Periodismo, contra los artículos 411 y 412 del código penal, que establecían de uno a tres años de cárcel para cualquier ofensa al presidente o a un órgano del Estado, y de seis meses a dos años de cárcel para los casos de desacato a una autoridad pública, o a un funcionario. La Corte estimó que esas disposiciones eran contrarias al artículo 35 de la Constitución, según el cual la libertad de expresión no puede verse limitada por ninguna ley o reglamento.

Pero ese avance jurídico no atenúa un balance que, por otra parte, es dramático para los periodistas. Aparte de las decenas de agresiones y amenazas a los medios de comunicación, cometidas con frecuencia por policías, militares, agentes de seguridad privada y también antiguos paramilitares de la guerra civil (1960-1996), en este año la prensa estuvo de duelo por un asesinato y un atentado.

El 9 de septiembre de 2006 mataron de cinco disparos a Eduardo Maas Bol, corresponsal de *Radio Punto*, cuando regresaba de pasar una velada en Cobán (Centro). El cuerpo del periodista apareció en el interior de su automóvil, estacionado cerca de una comisaría local. No se ha podido establecer completamente la relación existente entre el asesinato y la profesión de la víctima pero Angel Martín Tax, corresponsal de *Radio Sonora*, recibió más tarde un llamada, en la que le dijeron que era "el siguiente en la lista, después de Eduardo Maas Bol".

En cambio no existe ninguna duda sobre el móvil profesional del atentado que sufrió, el 23 de agosto, Vinicio Aguilar Mancilla, de la emisora independiente *Radio 10*. Dos desconocidos que iban en una moto abrieron fuego sobre el periodista, rompiéndole la mandíbula. Su director, Oscar Rodolfo Castañeda, recibió la víspera una llamada telefónica en antena, intimándole a cesar en sus investigaciones sobre unos casos de fraude fiscal.

Las amenazas hicieron que se marchara durante un tiempo del país. El fundador y dirigente de *Radio 10*, habituado a los temas sensibles, como la corrupción de los políticos y las violaciones de los derechos humanos, sigue inmerso en un interminable procedimiento por "difusión ilegal"; un acoso judicial destinado, según él, a impedirle llevar a cabo las investigaciones y preservar la actual concentración de medios de comunicación en manos de la oligarquía.

Como en otros países, también aquí se plantea de forma lacerante el asunto de la legalidad de las radios comunitarias. Solo 250 emiten legalmente en el país frente a 2.500 que carecen de licencia de emisión. Nunca se ha sometido a votación el proyecto de ley sobre el estatuto de las radios comunitarias, presentado en el Congreso.

Finalmente, no han desaparecido las secuelas de la guerra civil. El 30 de enero, el general Efraín Ríos Montt, ex dictador entre 1982 y 1983 y candidato perdedor de las últimas presidenciales, consiguió que se sobreyera el caso, de tres años atrás, de una violenta manifestación de sus partidarios que costó la vida a un periodista. La impunidad persiste.

HAITÍ

Superficie : 27.750 km².

Población : 8.530.000.

Idiomas : criollo, francés.

Jefe del Estado : René Préval.

En este año no han matado a ningún periodista y, a pesar de la inseguridad, los ataques a la prensa disminuyeron a partir del final de las elecciones del 7 de febrero. Pero, en cambio, el gobierno del presidente René Préval no ha puesto fin a la impunidad.

Muy pocas agresiones y ningún asesinato. El balance de la prensa haitiana es tan positivo como sorprendente, teniendo en cuenta la extrema inseguridad que impera en el país (sobre todo en la capital, Puerto Príncipe) y un pasado, no muy lejano, en el que los periodistas se arriesgaban a sufrir en cualquier momento las represalias de las bandas, frecuentemente relacionadas con el antiguo poder Lavalas. Es evidente que el reto de la seguridad es crucial para la nueva presidencia de René Préval, quién tomó sus funciones el 14 de mayo, pero han disminuido los ataques dirigidos a periodistas, en tanto que tales. El asalto, el 14 de septiembre en Pétion-Ville (Este de Puerto Príncipe), de unos bandidos armados a los periodistas de *Radio Kiskeya* Liliame Pierre-Paul y su hermano Stéphane Pierre-Paul, redactor jefe de la emisora, ocurrió en un momento de intensificación de los chantajes y secuestros crapulosos. Igualmente, el 26 de mayo, Lydie Bain Abdon, de *Radio Lumière*, escapó por poco a un intento de secuestro, que a priori no tenía nada que ver con su calidad de periodista.

Curiosamente, los medios de comunicación han tenido que sufrir más bien los abusos de poder de las autoridades. En el mes de octubre, unos policías con los que se había identificado como periodista, le fracturaron un brazo a Ernst Cadichon, de *Radio Galaxie*, mientras cubría una manifestación de estudiantes en Puerto Príncipe. También en la capital, el 3 de noviembre, unos soldados de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) le pegaron violentamente a François Louis, fotógrafo del diario *Le Nouvelliste*, durante unos enfrentamientos entre militares y partidarios del ex presidente Jean-Bertrand Aristide. Cinco días más tarde, el mando de la fuerza de interposición de la ONU presentó excusas oficiales a la redacción.

Sin embargo, la prensa está muy lejos de haber superado los traumas sufridos durante el mandato de Jean-Bertrand Aristide y el período de transición. Podría mantenerse la impunidad mientras la nueva administración de René Préval no ponga en pie un sistema judicial digno de ese nombre. También la Policía Nacional de Haití (PNH) participa de la inseguridad ambiental, y los magistrados siguen careciendo de medios para investigar. Más grave aun es el hecho de que se encuentren en libertad, y a la vista de toda la población, los jefes de bandas sospechosos de asesinatos de periodistas. El 12 de septiembre, François Daniel alias "Bibi", jefe de una banda armada del barrio de Solino en Puerto Príncipe y presunto responsable del secuestro y asesinato, en julio de 2005, de Jacques Roche, jefe del servicio cultural del diario *Le Matin*, intentó incluso comprar su impunidad, entregando unas armas a la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción.

Por otra parte, sigue haciéndose esperar el nombramiento de nuevos jueces de instrucción en las investigaciones de los asesinatos de Jean Dominique, director de *Radio Haïti Inter*, y Brignol Lindor, periodista de *Radio Echo 2000*. Dos jefes de bandas, sospechosos de haber matado en 2000 a Jean Dominique, estarían actualmente en Martissant (un suburbio de Puerto Príncipe), donde habrían reanudado sus actividades criminales. El Tribunal de casación, donde el dossier de Brignol Lindor permaneció dos años en suspenso, finalmente rechazó la demanda de constituirse en parte civil, formulada por la familia del periodista asesinado en 2002 por unos partidarios de Jean-Bertrand Aristide, en Petit-Goâve (Sur).

HONDURAS

Superficie : 112.000 km².

Población : 7.205.000.

Idioma : español.

Jefe del Estado : Manuel Zelaya.

Los políticos locales, cuando no son propietarios de un medio de comunicación no se cortan a la hora de dar un puñetazo o acosar a los periodistas, sobre todo a los más vulnerables. Una empresa privada de seguridad amenazó a dos animadores de un sitio de Internet.

La violencia, y las presiones a los periodistas, se mantienen en un nivel particularmente alarmante, y más aun porque con frecuencia las protagonizan políticos, que por otra parte suelen ser propietarios de un medio de comunicación. A lo largo del año 2006 se cometieron una decena de agresiones y maniobras intimidantes contra la prensa. La más espectacular es sin duda la que sufrió el 2 de abril, en Intibucá (Sudoeste), la periodista indígena Martha Vásquez, en una reunión del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). El encuentro se vio bruscamente interrumpido por unos hombres armados, a sueldo del diputado Romualdo Bueso Melghem, del Partido Liberal, quien pronunció insultos racistas contra la periodista y después intentó estrangularla. Al diputado, que es vicepresidente de la Comisión de Etnias del Parlamento, en ningún momento le han molestado por esos hechos.

En el mes de abril, el empresario Amid Cárdenas, antiguo diputado del Partido Liberal y dueño de

Canal 49 de televisión, retiró inopinadamente de la antena a Wendy Guerra, reportera y presentadora del programa de investigación "Denuncias 49". Finalmente, admitió haber cedido a las presiones de sus amigos políticos y readmitió a la periodista el 3 de mayo. En el mes de mayo, Octavio Carvajal, de la emisora de radio *STC Noticia*, tuvo que salir del país durante tres semanas, agobiado por las presiones de la empresa pública de telefonía Hondutel y del secretariado de la presidencia, cuya gestión había señalado como dudosa.

Pero también llegan amenazas del sector privado. La sociedad Delta Security, de la que habían revelado fraudes e infracciones al derecho del trabajo, estuvo siguiendo, acosando e intentando chantajear a Robert Marín y Dina Meza, periodistas del sitio *Revistazo.com* y miembros de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Denunciados por "difamación" y "calumnia", los periodistas ganaron el caso en un tribunal de Tegucigalpa el 31 de octubre; pero el 4 de diciembre asesinaron a su abogado, Dionisio García, de 43 años.

MÉXICO

Superficie : 1.958.200 km².

Población : 107.029.000.

Idioma : español.

Jefe del Estado : Felipe Calderón.

Con nueve periodistas asesinados y tres desaparecidos, el país arrastra el peor balance del continente y se coloca detrás de Irak, por el número de profesionales de los medios de comunicación muertos en 2006. Y eso a pesar de que en febrero se creó una fiscalía especial, encargada de luchar contra los ataques a los medios.

Parecía que el poder federal se había dado cuenta de la envergadura del peligro que corre la prensa mexicana cuando, el 15 de febrero de 2006, creó la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas. El 18 de abril, la Cámara de Diputados federal aprobaba una reforma parcial del código penal, que ya venía avalada por el Senado, reconociendo la protección del secreto de las fuentes; y otra despenalizando los delitos de prensa. Sin embargo, estas buenas intenciones no han conseguido impedir uno de los peores balances americanos de los últimos diez años.

La hecatombe comenzó el 6 de febrero con el atentado, con arma de fuego, a la redacción del diario *El Mañana* de Nuevo Laredo (Noreste), que causó un herido grave. Los días 9 y 10 de marzo asesinaron a dos periodistas en menos de veinticuatro horas: el fotógrafo independiente Jaime Arturo Olvera Bravo, en el Estado de Michoacán (Sudoeste), y Ramiro Téllez Contreras, de la radio local *Exa 95.7 FM*, también en Nuevo Laredo. Las armas utilizadas contra este último eran las que habitualmente utilizan los narcotraficantes. Algunos miembros de los carteles serían también los autores de la desaparición, el 8 de julio en Monclova (Coahuila, Norte), de Rafael Ortiz Martínez, del diario *Zócalo*, que había revelado la existencia de nuevas familias de tráfico de droga en la región. Igualmente especialista en narcotráfico y sucesos, a Enrique Perea Quintanilla, director y fundador del mensual *Dos Caras, Una Verdad*, le asesinaron a disparos el 9 de agosto en el Estado de Chihuahua (Norte), siguiendo los métodos del crimen organizado. Los dirigentes del cartel de Ciudad Juárez, la capital del Estado, habían puesto precio a su cabeza, como confesaron dos de los presuntos asesinos en un vídeo enviado el 12 de octubre a *TV Azteca*.

De octubre a diciembre se sucedieron seis asesinatos y dos desapariciones, a un ritmo nunca visto

hasta entonces. Guevara Guevara Domínguez, responsable de la edición digital del semanario *Siglo 21*, que se encontraba haciendo un reportaje en la frontera de los Estados de Durango (Norte) y Chihuahua, no ha vuelto a dar señales de vida desde el 8 de octubre. El 10 de noviembre apareció en un motel del Estado de Guerrero (Sur), el cuerpo de Misael Tamayo Hernández, director del diario regional *El Despertar de la Costa*, con las manos atadas y víctima de una inyección letal. Seis días más tarde apareció, asesinado a cuchilladas en su apartamento de México, el ex director del diario *Excelsior*, José Manuel Sánchez Nava, que acababa de publicar un libro criticando la actitud del gobierno del presidente Vicente Fox en la compra de su periódico.

Victima de amenazas, Roberto Marcos García, subdirector del semanario *Testimonio* en el Estado de Veracruz (Este) - otro centro neurálgico del tráfico - cayó a balazos en plena carretera, el 21 de diciembre. También en el Estado de Veracruz, el 30 de noviembre apareció el cadáver de Adolfo Sánchez Guzmán, de 31 años, colaborador del canal *Televisa Veracruz* y de la emisora *Xhora Ori Estéreo 99.3 FM*. Al parecer, fue víctima de un arreglo de cuentas entre piratas de la carretera, y han detenido a dos hermanos. Diez días antes, la desaparición en el Estado de Michoacán de José Antonio García Apac, director del semanario *Ecos de la Cuenca*, marcó un auténtico "noviembre negro" de la prensa mexicana.

BATALLA CAMPAL EN OAXACA

Tras un año pudriéndose, la crisis política y social del Estado de Oaxaca (Sur) se transformó, a partir del mes de mayo, en una batalla campal entre el entorno del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y sus opositores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El norteamericano Brad Will, camarógrafo de la agencia independiente

MÉXICO

Indymedia, sucumbió a los disparos de la guardia cercana al gobernador el 27 de octubre, durante unas revueltas marcadas por saqueos de redacciones y múltiples agresiones a periodistas. Los investigadores locales intentaron atribuir su muerte a la APPO y dos de sus presuntos asesinos, policías municipales, quedaron en libertad tras permanecer detenidos un mes. El gobernador quiso acreditar la tesis de un arreglo de cuentas entre movimientos indígenas cuando, el 8 de diciembre, asesinaron en la redacción a Raúl Marcial Pérez, editorialista del diario *El Gráfico*. Misteriosamente, la investigación ha descartado el móvil profesional.

Además de Oaxaca, también Yucatán (Sudeste) fue el escenario de cuatro atentados al diario *¡Por Esto!* entre junio y septiembre, cometidos con la presumible complicidad de las autoridades locales. Sobre todo, la violentísima represión de una

manifestación por la paz en San Salvador Atenco (suburbio de México), los días 3 y 4 de mayo, estuvo acompañada de violencia y abusos sexuales cometidos con tres periodistas extranjeras.

Angel Mario Ksheratto, del diario *Cuarto Poder*, detenido dos veces, en enero de 2003 y octubre de 2005 por "difamar" a una funcionaria local de Chiapas (Sur), cumplió dieciocho días de detención entre el 4 y el 22 de febrero, y después le pusieron en libertad tras pagar una fianza de 8.000 euros. El 11 de noviembre enviaron de nuevo al periodista a la cárcel con la excusa de que no respetaba las obligaciones del control judicial, y salió nuevamente en libertad con fianza el 19 de diciembre. La legislación de Chiapas establece penas que pueden llegar hasta nueve años de cárcel para los delitos de prensa, y en ese Estado hay actualmente cuarenta periodistas pendientes de la resolución de sus procedimientos judiciales.

PARAGUAY

Superficie : 406.750 km².

Población : 6.158.000.

Idioma : español.

Jefe del Estado : Nicanor Duarte Frutos.

La desaparición del periodista radiofónico Enrique Galeano - y su probable asesinato por narcotraficantes conchabados con las autoridades locales - traumatizó profundamente a la profesión. A pesar de las promesas del presidente Nicanor Duarte Frutos, la investigación se halla en punto muerto.

La actualidad de la libertad de prensa estuvo dominada por la desaparición, el 4 de febrero de 2006, en el Departamento de Concepción, de Enrique Galeano, periodista de la emisora local *Radio Azotey*. El asunto causó una gran conmoción en la población y en los medios de comunicación, hasta el punto de que el Presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, recibió personalmente el 6 de octubre a una delegación del Sindicato de Periodistas Paraguayos (SPP). Sin embargo, las autoridades nacionales no se dieron ninguna prisa en investigar, a pesar de que existen sospechas de la implicación de algunos responsables políticos locales en el drama.

Tres meses después de los hechos la policía empezó a referirse a una historia extramatrimonial del periodista, y clasificó el caso. Además, el Ministerio del Interior aseguró que antes de su desaparición Enrique Galeano, que trabajaba en una zona muy expuesta a los narcotraficantes, había solicitado protección policial mientras que Osvaldo Núñez, comisario del distrito, mantenía lo contrario. Según el SPP, al periodista le habrían secuestrado por orden del mencionado Osvaldo Núñez dos de sus hombres, quienes posteriormente lo entregaron a unos narcotraficantes, que lo habrían asesinado y después arrojaron su cuerpo a un río. El 21 de octubre, los submarinistas del cuerpo de bomberos del Departamento intentaron localizar el cadáver, pero fue en vano. La única certeza al día de hoy es que, antes de su desaparición, Enrique Galeano había cubierto el embargo de un cargamento de armas y cocaína, que se llevó a cabo en presencia de Osvaldo Núñez y Magdaleno Silva, diputado del Partido

Colorado (en el poder), con amistades sospechosas en el narcotráfico.

En una democracia que aún es frágil, y en la que causa estragos una corrupción tenaz (el país es el peor clasificado de América del Sur por Transparency International), no es aconsejable que los periodistas investiguen demasiado de cerca asuntos sensibles, que impliquen a políticos. El diario *ABC Color* ha pagado un precio muy alto por hacerlo. La Corte Suprema le obligó a abonar 200.000 dólares, en concepto de "daños y perjuicios", al senador Juan Carlos Galaverna, cercano al presidente Duarte Frutos, al que la redacción implicó en un caso de soborno. Igualmente, la Corte Suprema confirmó el 5 de diciembre la condena de diez meses de cárcel, sustituida por un trabajo de interés general, del periodista de *ABC Color* Luis Verón, por "calumnia", "difamación" e "injuria". Juan Augusto Roa, corresponsal del mismo medio de comunicación en Encarnación (Sur), otra plataforma del contrabando, escapó por poco a la muerte, en un atentado con arma de fuego el 27 de febrero.

Como en la mayoría de los países del continente, las radios comunitarias y los pequeños periódicos independientes tienen que enfrentarse a una administración poco agradable. El 19 de junio se produjo el cierre forzoso de *Manatíal FM* y *Tenondé FM*, que sin embargo tenían solicitada la regularización de sus frecuencias. En octubre, por orden del alcalde destruyeron en Luque, cerca de Asunción, las instalaciones del periódico *El Espectador Luqueño*, con el pretexto de un litigio de bienes raíces.

PERÚ

Superficie : 1.285.220 km².

Población : 27.970.000.

Idioma : español.

Jefe del Estado : Alan García Pérez.

El país sigue ostentando un índice record de ataques a la prensa, con un centenar de casos de amenazas y agresiones. Un periodista fue el blanco de un atentado con explosivos y otro recibió un disparo en la cabeza, en una manifestación.

La violencia contra la prensa no disminuye de un año para otro. Incluso ha aumentado, con 54 casos de agresiones y 47 de amenazas en 2006, frente a un total de sesenta en 2005. La campaña, muy dura, de las presidenciales del 9 de abril, no arregló nada. En el primer trimestre, nada menos que una decena de periodistas fueron golpeados e injuriados, especialmente en los mítines electorales del candidato nacionalista Ollanta Humala, derrotado en la segunda vuelta por el ex presidente Alan García. El 8 de febrero, cerca de Lima, unos militantes dieron una paliza a la periodista de televisión Karina Chávez. Veinte días después, un funcionario municipal implicado en un caso de corrupción aprovechó una manifestación en Tarapoto (Norte) para intentar chocar con la moto del equipo del canal *Red Global*. También en el mes de febrero, unos policías de Aucayacu (Centro) irrumpieron en la emisora de radio *Amistad*, para hacerse con los nombres de los periodistas y embargar información sobre el asesinato de un jefe terrorista. La corrupción local, la reanudación de la actividad guerrillera de Sendero Luminoso en los Andes y el narcotráfico, son otros tantos asuntos de muy alto riesgo para los medios de comunicación. La periodista independiente Marilú Gambini Lostau, blanco de amenazas de muerte e intimidaciones desde hacía más de un año, por revelar algunos movimientos de cargamentos de droga en el puerto militar de Chimbote (Oeste), tuvo que escapar del país en el mes de abril.

Ya amenazado de muerte en el pasado por unos cultivadores de coca, Elías Navarro Palomino, director del semanario regional *Línea Roja* y corresponsal del diario nacional *La República* en Ayacucho (Sudoeste), estuvo a punto de pagar con su vida una reciente investigación sobre irregularidades en la gestión de un organismo de crédito cooperativo. El 30 de septiembre explotó una bomba cerca de su domicilio, que afortunadamente solo causó daños materiales. Cuatro meses

antes, unos funcionarios de la cooperativa denunciada intentaron entrar en el domicilio del impresor de *Línea Roja*. Con mucha menos suerte, Wilman Caychigua, corresponsal de la emisora *Radio Inca Tropical* y del diario *El Chasqui* en Abancay (Sudeste), recibió un disparo de la policía en el transcurso de una violenta manifestación contra el gobierno local, el 5 de septiembre. Alcanzado en la cabeza, el periodista está hospitalizado en coma profundo. La Ministra del Interior, Pilar Manzetti, justificó públicamente el empleo de fuego real por las fuerzas del orden.

En el aspecto judicial, la prensa también se ha llevado su parte. El 15 de agosto, el ministerio público de Lima pidió ocho años de cárcel para Mauricio Aguirre Corvalán, ex presentador del programa "Cuarto Poder" en el *Canal 4*, por "divulgación de secretos de Estado". En realidad, el periodista retransmitió en septiembre de 2003 un video del ex presidente Alberto Fujimori perteneciente a 1998, época en la era presidente en ejercicio. El propio hijo de Alberto Fujimori había usado la misma grabación en la campaña electoral de su padre en 2000, y aceptado que la utilizaran los medios de comunicación. Finalmente, en octubre de 2006 la justicia declaró inocente a Mauricio Aguirre Corvalán, cuya inculpación contradecía en derecho la Declaración de principio sobre la libertad de expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA), que Perú ha ratificado. Por negarse a facilitar sus fuentes en un caso de extorsión de fondos, en el que está implicado un funcionario de inteligencia, al periodista Humberto Ortiz Pajuelo siguen pudiéndole condenar a cuatro años de cárcel y 2.500 euros, en concepto de reparación civil, por un "delito contra la administración pública".

ALGUNOS ASESINOS HUIDOS O LIBERADOS

La justicia, aunque se ha mostrado intransigente con los cinco autores materiales del asesinato, el

PERÚ

21 de abril de 2004, del periodista Alberto Rivera Fernández de la radio *Frecuencia Oriental* - condenados en febrero a penas que van de diez a treinta años de cárcel -, ha dejado escandalosamente al margen a los presuntos autores intelectuales del crimen. Disfrutando un inesperado habeas corpus, el antiguo alcalde de Pucallpa (Centro-Este), Luis Valdez Villacorta, y el concejal Solio Ramírez

Garay, aprovecharon que en abril les pusieron en libertad para eclipsarse. Condenados en apelación a diecisiete años de cárcel por el asesinato, en 2004, del periodista Antonio de la Torre Echeandía, el ex alcalde de Yungay (Oeste), Amaro León León, y dos de sus secuaces, quedaron en libertad el 20 de julio, por orden de la Corte Suprema de Ancash.

URUGUAY

Superficie : 176.220 km².

Población : 3.463.000.

Idioma : español.

Jefe del Estado : Tabaré Vázquez.

Aunque, en conjunto, los medios de comunicación disfrutan de una relativa libertad, los periodistas todavía chocan con algunos obstáculos cuando investigan las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Por otra parte, La Corte Suprema dictó una sentencia desfavorable para la libertad de expresión.

Ningún medio de comunicación saqueado o censurado, una sola agresión y muy pocas amenazas a periodistas. Una vez más, Uruguay mantiene su reputación de "Suiza de América Latina", en todo caso en relación con la libertad de prensa. Sin embargo, aunque el país empieza justamente ahora a saldar el doloroso pasado de su dictadura militar (1973-1985), el ejército no parece todavía dispuesto a dejar que la prensa se le acerque demasiado.

En octubre de 2006, Alfonso Lessa, colaborador del *Canal 12* y del diario *El País*, especialista en la dictadura, recibió amenazas de muerte por escrito, procedentes de un "militar en activo". Las amenazas se produjeron inmediatamente después de que el periodista se manifestara de acuerdo con la reciente apertura de informaciones judiciales a militares y policías, responsables de violaciones de los derechos humanos, y sobre todo al general jubilado Gregorio Alvarez, impuesto por el ejército como Presidente de la República entre 1981 y 1985.

A Eduardo Preve, periodista de investigación del *Canal 10*, le robaron misteriosamente en su casa de Montevideo el 26 de marzo, a pesar de la pre-

sencia de dos policías de guardia en la entrada de su inmueble, después de que recibiera unos documentos confidenciales del ejército relativos al Plan Cóndor, que federaba los servicios de inteligencia de seis dictaduras latinoamericanas en los años 70. El periodista reveló que después del final de las dictaduras se produjeron dudosas colaboraciones entre esos servicios.

El otro problema que tiene planteado la prensa uruguaya es el de una legislación que todavía no ha despenalizado los delitos de prensa. Así, Gustavo Escanlar Patrone fue condenado el 18 de mayo, en primera instancia, a tres meses de cárcel por "injurias", por haberse burlado de un patrón de prensa en un Talk-show. Más sorprendente todavía, la Corte Suprema se desautorizó a sí mismo cuando el 18 de septiembre confirmó la condena a cinco meses de cárcel, con la sentencia en suspenso, de Carlos Dogliani, antiguo periodista del semanario *El Regional* (hoy desaparecido), por "difamar" a un cargo público. Sin embargo, al periodista le habían declarado inocente en la apelación, pero la Corte estimó que la protección del honor prima sobre la libertad de expresión. Y había dicho todo lo contrario en un caso, del mismo tipo, en 1997.

VENEZUELA

Superficie : 910.050 km².

Población : 26.749.000.

Idioma : español.

Jefe del Estado : Hugo Chávez Frías.

Un falso policía mató a un periodista en un manifestación, y otros veinte fueron agredidos, fundamentalmente cuando se acercaban las presidenciales del 3 de diciembre. Las relaciones entre el poder y la prensa privada continúan tensas, incluso a pesar de que los procedimientos judiciales de los periodistas concluyen muy raramente.

Año electoral que, el 3 de diciembre, se saldó con la aplastante victoria del presidente saliente Hugo Chávez, 2006 hacía presagiar un recrudecimiento de las tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación privados, implicados muchos de ellos en el golpe del 11 de abril de 2002. Cuatro años después, las tensiones se mantienen vivas pero el balance es mejor de lo que se esperaba, a pesar de la muerte de un periodista y una veintena de agresiones.

Empezó a aplicarse el arsenal legislativo promulgado en 2004 y 2005 por el gobierno de Hugo Chávez, muy restrictivo para la libertad de prensa, a pesar de que anteriormente había servido de poco. El 23 de enero de 2006, la justicia de Caracas ordenó que se adoptara una medida precautoria por "obstrucción a la justicia" contra diez medios de comunicación, entre los que se encontraban los dos canales públicos, *Canal Metropolitano* y *Venezolana de Televisión*, prohibiéndoles emitir la menor información relativa a la investigación sobre el asesinato del magistrado Danilo Anderson, ocurrido en noviembre de 2004, y mencionar el nombre de un testigo clave del caso. La medida judicial se apoyaba en la famosa Ley de Responsabilidad Social de los Medios Audiovisuales del 24 de noviembre de 2004, que penaliza a los medios que la contravengan con una retención del 1 al 2% de los ingresos del año precedente. El 14 de febrero se rechazó la apelación presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa.

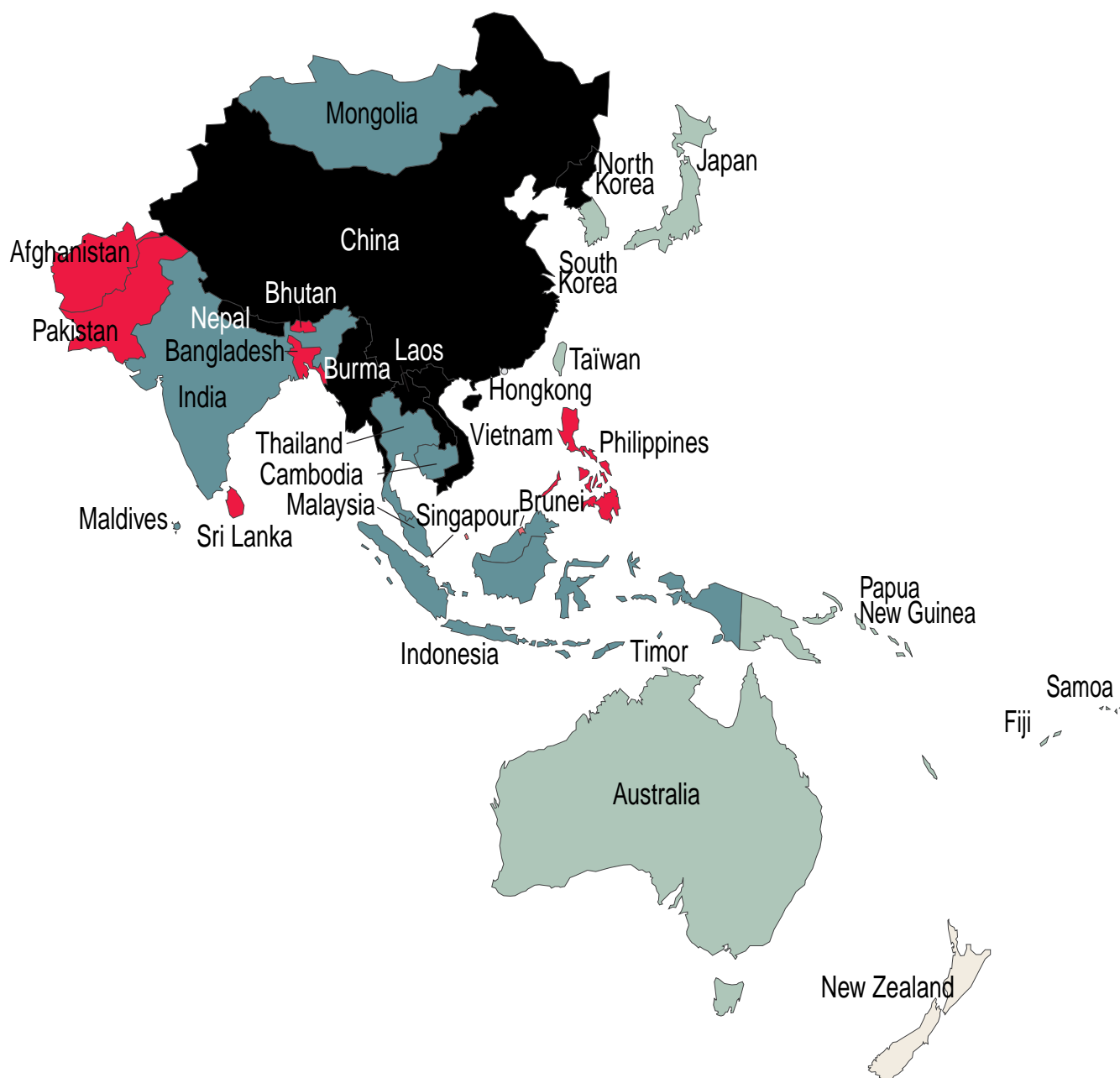
Aun más controvertida, la Ley de reforma del código penal del 16 de marzo de 2005, que entre otras cosas endurece las penas por desacato a una autoridad o institución pública, ha servido más para advertir que para condenar. Esta ley se aplicó por primera vez a Ibéyise Pacheco, del diario *El Nacional*, virulenta opositora del gobierno. La periodista había dado cuenta de la presunta usurpación de una licenciatura de abogado por un militar. Tras presentar sus excusas al interesado, Ibéyise Pacheco, condenada y

en arresto domiciliario el 15 de marzo, quedó en libertad apenas pasada una semana. Igualmente quedaron sin efecto, por falta de "suficiente respeto a los derechos de la defensa" las diligencias que se le abrieron por "falso testimonio", cuando se refirió en sus escritos a un "complot de opositores" urdido en el palacio presidencial de Miraflores. El 16 de mayo, la justicia anuló también el procedimiento por "ultraje", abierto el 8 de febrero a Napoleón Bravo, antiguo cronista del canal *Venevisión* que después se pasó a *Unión Radio*. Sobre la marcha, el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, apeló al Tribunal Superior de Justicia con un recurso de inconstitucionalidad, relativo a veinticinco artículos del nuevo código penal. La respuesta permanece en suspenso.

Por otra parte, la lucha contra la impunidad consiguió un logro con la detención del traficante de droga Ceferino García, presunto autor intelectual del asesinato de Mauro Marcano, presentador de la emisora *Radio Maturín 1.080 AM* y cronista del diario *El Oriental*, cometido el 1 de septiembre de 2004 en Maturín (Noreste). La investigación sin embargo ha dejado al margen a algunos altos responsables policiales y militares del Estado de Monagas, sospechosos de relaciones con el narcotráfico.

La relajación a nivel judicial contrasta sin embargo con la violencia ordinaria contra los periodistas. A finales del año, la campaña electoral dio lugar a una veintena de agresiones y maniobras de censura contra periodistas, protagonizadas tanto por partidarios de Hugo Chávez como de su adversario, el gobernador del Estado de Zulia (Noroeste), Manuel Rosales.

En un sentido más global, los periodistas pagan el precio de una inseguridad cada vez mayor. Jorge Aguirre, fotógrafo del diario *El Mundo* en Caracas, fue asesinado, el 5 de abril, por un hombre de uniforme, a pocos metros de una manifestación. Inmediatamente detuvieron a un ex policía, que pretendía estar todavía en funciones.



Informe anual 2007

ASIA

INDIA O CHINA POPULAR, ELECCIÓN ENTRE DOS MODELOS

En 2006 ¿la libertad de prensa progresó en Asia? Las cifras, todavía muy altas, del número de periodistas muertos o agredidos, y de medios de comunicación censurados, llevarían a pensar que no. Sin embargo, los asiáticos tienen acceso a una información más independiente y de mayor calidad. En Asia sigue habiendo una decena de dictaduras militares o comunistas, que consideran a los medios de comunicación como simples repetidores de propaganda. Pero, en 2006, algunos regímenes autoritarios, y especialmente el del rey Gyanendra en Nepal, se vieron barridos por revoluciones democráticas.

Todavía alcanzan umbrales alarmantes las violaciones de la libertad de prensa en Asia: en 2006 mataron a 16 profesionales de la profesión, detuvieron al menos a 328, agredieron o amenazaron a 517 y censuraron no menos de 478 medios de comunicación.

Paradójicamente, estas alarmantes cifras son síntomas de una mayor libertad. Por ejemplo, los periodistas de Bangladesh sufren muchas agresiones y amenazas de muerte porque denuncian sin tregua el nepotismo, y la corrupción de los políticos locales. En China, el Departamento de Propaganda decapita frecuentemente a las redacciones, para intentar yugular sus deseos de independencia.

En Asia, los responsables de la muerte de los periodistas no son los conflictos. Así, en Filipinas, donde mataron a seis profesionales, son los notables locales quienes ponen en peligro la vida de los reporteros. Y lo mismo ocurre en India, China o Indonesia, donde asesinaron a cinco periodistas. En cambio, en Sri Lanka, los representantes de los medios de comunicación son, lo mismo que otros miles de civiles, víctimas inocentes de una guerra atizada por el gobierno y los Tigres Tamules. Los grupos paramilitares tamules hicieron imperar el terror en el Norte y el Este, matando a cuatro profesionales y atacando a una decena de medios.

LA CENSURA, UNA COSTUMBRE ASIÁTICA

La censura sigue siendo un fenómeno muy extendido en Asia. Situación extrema la de Corea del Norte, donde el “querido líder” Kim Jong-il y su círculo de fieles imponen un control absoluto sobre el contenido de las informaciones. Los periodistas, sometidos a vigilancia policial y a reeducación, no tienen más opción que repetir una propaganda oficial surrealista. En menor medida, los otros regímenes comunistas, Laos, Vietnam y China Popular, utilizan a la prensa para llevar al pueblo el mensaje del Partido único. Pero con frecuencia, los medios de comunicación, más dependientes de la publicidad que de los subsidios estatales, se arriesgan a tratar temas que en otros tiempos eran tabúes. Algunas cabeceras liberales, en China y en Vietnam, han abierto brecha en el control estatal. Pero el Partido todavía sabe poner los límites. Al comienzo del año, el Departamento de Propaganda chino dio caza al célebre periodista Li Datong, de la dirección del semanario Bing Dian. Entre otras cosas, había autorizado la publicación de un artículo, en el que se revisaba un controvertido pasaje de la historia china. En Vietnam, el Ministerio de Información suspendió en pocos días cinco publicaciones, después de que publicaran artículos sobre algunos escándalos, en los que estaban implicadas personas cercanas a un dignatario del régimen.

La censura previa, impuesta a la prensa birmana por la Junta, es implacable. Los prepotentes militares de la Oficina de Censura a veces prohíben más de un tercio de los artículos e ilustraciones de las publicaciones privadas. Desaparecen todos los temas relacionados, de cerca o de lejos, con la dirigente demócrata Aung San Suu Kyi. En Tailandia no existe una censura permanente pero la Junta Militar, que en septiembre derrocó al primer Ministro Thaksin Shinawatra, ha cerrado centenares de radios locales.

El control informativo también se lleva a cabo a través de la incorporación económica de inversores afines a las autoridades. Así, en Singapur y Malasia, las autoridades solo conceden licencias a los grupos de prensa cuya lealtad tienen asegurada. También en Singapur, las principales cabeceras privadas están dirigidas por antiguos miembros de los servicios de seguridad.

La religión también es una fuente de censura y autocensura. En Afganistán y Pakistán, críticas a las autoridades religiosas pueden suponer una denuncia por blasfemia. Por otra parte, en Asia sancionaron a una decena de medios de comunicación por reproducir, o hablar de las caricaturas del profeta Mahoma, publicadas en Dinamarca. La defensa de las buenas costumbres es también uno de los motivos preferidos de los censores asiáticos. En Kabul, un canal de televisión tuvo que pagar una gran multa por difundir películas indias, consideradas contrarias al Islam. En diciembre denunciaron a ocho canales indonesios, por

enseñar demasiado “sexo y violencia”. En ese mismo país llevaron a los tribunales al director de la versión local de la revista *Playboy*. Finalmente en Sri Lanka las autoridades cerraron una radio, por hablar de sexualidad.

También los monarcas asiáticos saben censurar las informaciones que les conciernen. En Tailandia se castiga con varios años de cárcel el crimen de “lesa majestad”. Un patrón de prensa de Bangkok escapó por poco a la cárcel en 2006, acusado de insultar al rey. En Bután, a los medios de comunicación, entre los que solo hay uno privado, todavía se les pide que hablen del rey en términos más que respetuosos. Finalmente en Brunei, el sultán y su familia aparecen sistemáticamente en las primeras páginas de la prensa, pero las críticas son extremadamente raras.

Son muy pocos los países de Asia en que se decir, o escribir todo. Incluso en Corea del Sur, se sigue pudiendo castigar con pena de cárcel una postura favorable al vecino del Norte. En Japón no resulta fácil hablar libremente de las mafias, o de los grupos nacionalistas violentos. En ese contexto, Nueva Zelanda es un ejemplo conseguido del respeto casi absoluto a la libertad de prensa.

SIGNOS DE ESPERANZA

Pero en el continente existen auténticos signos de esperanza. Así, el desarrollo de canales de televisión privados, además de llevar a millones de hogares una información libre de la presión gubernamental, es una tendencia común en Pakistán, Afganistán, China o India. Rompiendo décadas de monopolio estatal de la información televisual, *Geo TV* en Pakistán, *Tolo TV* en Afganistán, *Phoenix TV* en China o *CNN-IBN* en India, rebasan los límites de la censura. Algunos países se resisten a esos avances. En las Maldivas, el gobierno no ha respetado su promesa de abrir el sector de los medios electrónicos, antes del final del año. Y en Birmania, los militares prohíben a la población ver el canal independiente *DVB TV*, que transmite por satélite desde Noruega.

Globalmente, el número de periodistas encarcelados en Asia está a la baja. Los centros de detención de Nepal se vaciaron tras la revolución democrática de abril. En los de Birmania cada vez hay menos periodistas, incluso si U Win Tin, galardonado con el Premio Reporteros sin Fronteras - Fundación de Francia 2006, continúa cumpliendo una condena de veinte años, por sus escritos favorables a la democracia. China puso en libertad a Jiang Weiping y Gao Qirong, condenados a graves penas por artículos sobre la corrupción, y a ningún periodista arrestado en 2006 se le ha mantenido detenido.

Sin embargo, los gobiernos asiáticos siguen disponiendo de leyes que les permiten encarcelar a los periodistas, por delitos de prensa. En este año, tan solo Camboya tuvo el valeroso gesto de despenalizar la difamación. En cuanto a Indonesia, retiró de su legislación el delito de insulto al jefe del Estado, utilizado en el pasado contra algunos periodistas. En cambio, los gobiernos de Manila y Dacca no hicieron nada para impedir un diluvio de denuncias abusivas contra la prensa, por difamación. En Filipinas, el marido de Gloria Arroyo presentó más de cuarenta denuncias contra medios de comunicación privados. En respuesta, las organizaciones de periodistas le pidieron un peso por habitante, en concepto de daños y perjuicios.

Los dos pesos pesados asiáticos, India y China, han optado por modelos radicalmente distintos en materia de libertad de prensa. En el primero, los medios de comunicación cada día se imponen más como eficaces contrapoderes, capaces de denunciar a los más poderosos. En el segundo, la prensa, aunque está sometida a la competencia, todavía se encuentra bajo el control de un Partido-Estado seguro de su poder, y que no piensa abandonar su facultad de censurar.

Vincent Brossel
Responsable del despacho Asia y Pacífico

AFGANISTÁN

*Superficie : 652 090 km².
Población : 29 860 000.
Idiomas : pachtú, dari, uzbeko.
Jefe del Estado : Hamed Karzai.*



La libertad de prensa es uno de los pocos logros conseguidos en los cinco años que han pasado desde la caída del régimen talibán. Pero sigue siendo una realidad muy frágil, porque sobre los periodistas pesan tanto la degradación de la situación de seguridad como las amenazas de los señores de la guerra, los religiosos conservadores y un poder cada vez más acorralado.

El octubre de 2006 detuvieron a un escritor que colaboraba frecuentemente en el semanario *Payame Mojahed*, tras una denuncia presentada por el Ministro de Relaciones con el Parlamento. "La libertad de prensa se termina cuando se habla de un señor de la guerra o de un alto oficial", asegura Mohammad Hassan Wolesmal, redactor jefe del *Afgani Milli Jarida*, cuyo domicilio atacaron en marzo, después de que publicara un artículo crítico con el presidente Hamid Karzai. Según el responsable de Asociación Afgana de Periodistas Independientes, los que están protegidos por milicias privadas no creen en la libertad de palabra e intentan imponer censura y autocensura a los periodistas.

La volátil situación, y el incremento de atentados suicidas en el Este y el Sur, han hecho que cada vez sea más arriesgado el trabajo de informar. En julio, en un doble atentado suicida, mataron a Abdul Qodus, camarógrafo y chofer del canal *Aryana*. Unos hombres armados secuestraron durante tres semanas, cerca de Kandahar, a la fotógrafa italiana Gabriele Torsello.

Detrás de las cifras tranquilizadoras - 400 publicaciones, 50 radios privadas, cinco agencias de prensa y seis canales nacionales de televisión - hay una realidad mucho más contrastada. La mayoría de las cabeceras pertenecen a semanarios con tirada muy limitada. En noviembre dejó de publicarse por falta de ingresos publicitarios, *Kabul Weekly*, una de las publicaciones más independientes. Igualmente, en Mazar-e-Sharif cerraron el diario *Baztab*, incapaz de aumentar su difusión. El boom de las radios y las televisiones privadas ha tenido un efecto real sobre la forma en que los afganos están informados. Lo que lleva a decir a la periodista Zarghona Saber: "Los medios de comunicación son los vencedores de esta partida. La población ha entendido lo que son los señores de

la guerra. Y los medios son cada vez más poderosos".

Las televisiones privadas son los primeros objetivos de los conservadores. En enero, el canal *Afgani TV* fue condenado a más de mil euros de multas, por emitir películas indias y videos, considerados contrarios al Islam. Su director, Ahmad Shah Afghanzai, denuncia la nueva Ley de medios de comunicación, que establece la creación de una comisión que puede poner multas, sin pasar por un tribunal de justicia.

En agosto, unos diputados conservadores agredieron a un equipo de *Tolo TV* y pidieron que le expulsaran del lugar, después de que emitieran imágenes de algunos políticos somnolientos. El mes anterior, el señor de la guerra Abul Sayyaf envió a sus secuestradores a atacar a un equipo de *Tolo TV*, cerca de Kabul. Los políticos, o personas cercanas a ellos, agredieron o amenazaron de muerte al menos a veinte periodistas en 2006.

Los talibanes hacen la ley en varias provincias del Sur. A finales de noviembre detuvieron, durante una semana, a dos periodistas paquistaníes, que habían entrado en la provincia de Helmand sin pedirles permiso. Al principio del año, un jefe militar talibán advirtió: "Quiero decir a los periodistas que, si en el futuro, utilizan informaciones erróneas de la OTAN, iremos contra ellos. (...) Tenemos el derecho islámico a matarles". Sin embargo, los estudiantes de teología incrementaron en 2006 sus contactos con la prensa. "Necesitan que alguien difunda sus críticas al gobierno. Saben que la propaganda juega un importante papel en esta guerra", analiza Massod Qiam, presentador de *Tolo TV*.

La creciente presencia de rebeldes talibanes en los medios de comunicación llevó a los servicios de seguridad a intentar imponer una cierta forma de



AFGANISTÁN

censura. En julio citaron a los principales director de medios para entregarles una lista de 24 puntos, relativos a las informaciones prohibidas. El documento, que la prensa rechazó inmediatamente, prohibía entre otras cosas los contactos con los talibanes y la difusión de informaciones contrarias a la política exterior del país, o a las fuerzas de la Coalición internacional. Los servicios secretos han ordenado a los periodistas que no sigan utilizando la expresión “señores de la Guerra” y que, por el contrario, continúen apoyando los esfuerzos del ejército afgano. A pesar del clamor provocado por la orden, Hamid Karzai confirmó que los autores de la directiva le habían consultado, según él porque es necesario tener en cuenta algunos imperativos, por el bien de la seguridad nacional.

El hecho de que el gobierno aprobara una tercera Ley de prensa ha dado un marco relativamente liberal al desarrollo de los medios de comunicación, en un país regido por la ley islámica. Pero el Parlamento, y especialmente la Wolesi Jirga dominada por los conservadores, preparó una serie de enmiendas liberticidas. Así, su Comisión de Asuntos Religiosos y Culturales ha aumentado las referencias a los principios islámicos y ha prohibido la difusión de informaciones contrarias a la “estabilidad, la seguridad nacional y la integridad territorial”. El texto, que podría llevarse al Parlamento a principios de 2007, prohíbe entre otras cosas promocionar, a través de la prensa, otra religión que no sea el Islam.

BIRMANIA

Superficie : 676 580 km².

Población : 52 400 000.

Idioma : birmano.

Jefe del Estado : Général Than Shwe.



A pesar de la creciente presión internacional, la Junta Militar no ha abierto el candado de los medios de comunicación. U Win Tin, el más célebre de los periodistas birmanos galardonado con el Premio Reporteros sin Fronteras - Fundación de Francia 2006, celebró su 76 cumpleaños en la cárcel. La prensa privada continúa sometida a una implacable censura previa.

El Ministerio de Información juega con dos barajas, con la prensa privada y los periodistas extranjeros. En 2006 concedieron varias licencias de publicación a cabeceras nuevas. Y, en octubre, unos periodistas extranjeros, algunos de los cuales llevaban años prohibidos en el país, fueron invitados a cubrir la reanudación de los trabajos de la Convención encargada de redactar la nueva Constitución.

Pero, junto a esas muestras de apertura, los servicios de seguridad, reorganizados en el interior de la Fuerza de seguridad militar (Sa Ya Hpa), aumentaron su vigilancia de la prensa. Al parecer también habrían formado a algunos civiles, para identificar a los "informadores" de los medios de comunicación internacionales. En 2006 se reforzó la escucha de las comunicaciones telefónicas, entre otras cosas gracias a la instalación de dos centros más en Mandalay (Centro).

El control es permanente. En noviembre, la policía política y algunos miembros del UDSA (milicia cercana a la Junta), intimidaron a los cientos de escritores y periodistas que acudieron al cumpleaños de Lodu Daw Amar, fundadora del *Lodu Daily News*, en Mandalay. La Junta acusa a la escritora de utilizar la ocasión para denunciar la opresión política y social, y la falta de libertad en su país.

La Junta no interfiere las radios internacionales que emiten en birmano. Pero intimida y sanciona a algunos de sus interlocutores. Al realizador y periodista Tura "Zar Ga Nar" le prohibieron en mayo ejercer cualquier actividad artística, después de que participara en un programa del servicio en birmano de la BBC. Fue una decisión del comandante Thein Htun Aung, director del Departamento de Cine, del Ministerio de Información.

El régimen militar, ante la hostilidad cada vez más declarada de Estados Unidos, ha reforzado la pro-

paganda contra los "imperialistas", y otros "neocolonialistas". En febrero, responsables del Ministerio de Información pidieron a un grupo de periodistas birmanos, y corresponsales de prensa extranjera en Rangún, que respondieran a las críticas formuladas por medios de comunicación extranjeros. Con frecuencia se publican en la mayoría de los medios del país artículos idénticos, atacando a la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, a Estados Unidos o a los opositores. Los escriben agentes del Office of Strategic Studies, un órgano de propaganda de la Junta.

El país cuenta actualmente con más de un centenar de publicaciones privadas, todas ellas sometidas a censura previa. Además de los temas tradicionalmente prohibidos, como la democracia, la situación de Aung San Suu Kyi o la crisis socioeconómica, con frecuencia se quedan reducidos al silencio acontecimientos nacionales o internacionales. Eso fue lo que ocurrió, en 2006, con las visitas de diplomáticos asiáticos, o de la ONU, que intentaban moderar la posición de la Junta. La prensa ni siquiera mencionó las manifestaciones antigubernamentales en Filipinas y Tailandia. La revista *Padauk Pwint Thit* se vio obligada a suspender su número de diciembre porque la Oficina de Censura se cargó siete artículos. Incluso en el interior de las cárceles existe un comité de censura, que elimina las lecturas "subversivas". En marzo, la esposa del periodista y escritor encarcelado Than Win Hlaing reveló que a su marido le habían privado de todo tipo de lectura, porque cometió la "falta" de tomar notas de lo que leía.

U WIN TIN DETENIDO DESDE 1989

A fecha 1 de enero de 2007, en Birmania había al menos siete periodistas detenidos. Entre ellos, U Win Tin, detenido desde julio de 1989, está obligado a seguir un tratamiento por que tiene problemas de



BIRMANIA

tensión arterial e inflamación de próstata. Aunque un médico de la cárcel le ausculta dos veces al mes, U Win Tin depende de la ayuda de personas cercanas, que frecuentemente le llevan medicinas y comida. Tras dieciséis años detenido, su salud ha empeorado considerablemente. Entre otras cosas ha tenido dos ataques cardíacos.

En junio, el tribunal regional de Mandalay confirmó en apelación la condena a tres años de cárcel del periodista gráfico U Thaung Sein, alias U Thar Cho, y Ko Moe Htun, alias Ko Kyaw Thwin, editorialista de la revista religiosa *Dhamah-Yate* (*La sombra de Dhamah*). El tribunal no llamó a declarar a ningún testigo. Detenidos en Marzo, se les consideró culpables de haber sacado, sin autorización, fotos de la nueva capital, Naypyidaw.

También en junio, Aung Than, miembro de la Liga Nacional para la Democracia (LND), y Zeya Aung, estudiante de la Universidad de Pegu, fueron

condenados a 19 años de cárcel, entre otras cosas por escribir y distribuir un libro de poemas, "Daung Man" ("La fuerza del pavo real combatiente", en referencia a la LND).

En materia de Internet, la política del Estado birmano es aun más represiva que la de sus vecinos chino y vietnamita. Naturalmente, la Junta en el poder filtra los sitios de la oposición. Sobre todo, vigila estrechamente los cibercafés, donde cada cinco minutos los ordenadores efectúan automáticamente capturas de pantalla, con el objetivo de vigilar la actividad de los internautas. En junio de 2006 las autoridades atacaron los servicios de telefonía y chat de Internet, bloqueando por ejemplo el acceso a Gtalk de Google. El objetivo es doble: por una parte seguir preservando el jugoso mercado de las telecomunicaciones de larga distancia, hasta ahora controlado por empresas estatales; y, por otra, disuadir a los ciberdisidentes de usar este medio de comunicación, que es difícil de someter a escuchas.



CHINA

Superficie : 9 598 050 km².

Población : 1 315 844 000.

Idioma : mandarín (putonguá, lengua común off.).

Chef de l'Etat : Hu Jintao.

Frente a una contestación social creciente y a periodistas cada vez menos dóciles, por impulso del presidente Hu Jintao las autoridades han optado por volver a ocuparse de los medios de comunicación, en nombre de la “sociedad armoniosa”. La prensa está obligada a autocensurarse, Internet se filtra y a los medios extranjeros se les vigila de cerca.

En 2006 condenaron a penas de cárcel a más periodistas. A Ching Cheong, reportero en Hong Kong de un diario singapurense, le condenaron a cinco años de cárcel por “espionaje”. A Zhao Yan, colaborador del *New York Times*, le impusieron una pena de tres años, por un supuesto “fraude”. En ambos casos, los juicios se hicieron deprisa y corriendo: sin testigos de la defensa ni vista de apelación, y con presiones políticas.

En cambio, a Gao Qirong y Jiang Weiping, condenados a graves penas de cárcel por unas investigaciones sobre la corrupción, les pusieron en libertad en 2006, antes de que terminaran de cumplir la condena. Por su parte, al periodista Yu Dongyue, detenido cuando los acontecimientos de la Plaza de Tiananmen de 1989, le dejaron en libertad en febrero pero ha enloquecido, como consecuencia de las torturas y los largos períodos de aislamiento sufridos. A fecha 1 de enero de 2007 en el país había al menos 31 periodistas detenidos.

La furia de Hu Jintao contra las “fuerzas hostiles”, a las que acusa de fomentar una “revolución iluminada”, apoyada por Estados Unidos y dirigida por los defensores de los derechos humanos y los periodistas liberales, se manifestó de nuevo en agosto de 2006 ante un parterre de ministros, embajadores y responsables provinciales del Partido. En plena preparación del próximo Congreso del Partido Comunista, que tendrá lugar en octubre de 2007, la seguridad pública detuvo al menos a doce de periodistas, y puso bajo vigilancia a otras varias decenas. También decidió volver a ocuparse de los abogados, a quienes la Asociación de Abogados de China prohibió en marzo que hablaran con periodistas extranjeros de “asuntos de masas” relativos, por ejemplo, a parados y campesinos. En septiembre, también a los jueces chinos se les prohibió hablar con la prensa.

Las autoridades, que en 2006 tuvieron que hacer frente a 87.000 alteraciones del orden público, frente a las 10.000 que se produjeron en 1994, intentaron impedir que la prensa diera cuenta de ese amplio descontento. En diciembre, la agencia *Xinhua* atacó de nuevo a los militantes de los derechos humanos y a periodistas extranjeros, a quienes calificó de “fuerzas hostiles” que intentan “sacar ventaja de los incidentes de masas para crear desórdenes”. Pocas semanas antes, unos policías detuvieron y golpearon a un reportero gráfico norteamericano, al que acusaban de haber ido a un pueblo del Sur, donde los campesinos se habían rebelado contra las autoridades locales.

OTRA LEY LIBERTICIDA

Para dotarse de medios con los que castigar a los recalcitrantes, el gobierno aprobó, e hizo que lo examinara la Asamblea Popular, un proyecto de ley sobre la gestión de situaciones de crisis, que entre otras cosas permite imponer multas de hasta 10.000 euros a los medios de comunicación que publiquen, sin autorización, información sobre esos temas. En un editorial, el *Xin Kuailao* (*El Nuevo Expres*) denunció la ley, porque no toma en consideración el hecho de “que no hay ninguna forma de verificar si la información que procede de las autoridades es fiel y exacta. Esa ley va a impedir que se sepa si detrás de los “desastres naturales” se esconden “catástrofes provocadas por los hombres. (...) En ese caso, la ley se convertirá en un instrumento que los funcionarios corruptos utilizarán para ocultar su falta de honestidad”.

El Departamento de Propaganda no ha dejado de contraatacar a cada artículo considerado contrario a la nueva ideología de la “sociedad armoniosa”, proclamada por Hu Jintao. Regularmente, los redactores jefe de los medios de comunicación reciben la lista de temas prohibidos.

CHINA



Manifestaciones de campesinos, parados o tibetanos; nada escapa los censores, que mantienen un clima de terror en las redacciones. Por eso, los casos de censura se contabilizan por decenas de miles anuales. Por ejemplo, en abril se prohibió que la prensa hablara de otro caso de gripe aviaria, identificado en el Sur. En junio se silenció una manifestación de porteadores en Xian (Norte). En julio, la Administración General de Prensa, ante la inminencia de una serie de aniversarios, especialmente el treinta de la muerte de Mao Zedong y el cuarenta del comienzo de la Revolución Cultural, hizo un llamamiento a la vigilancia: "La publicación de informaciones tiene un papel importante en la educación ideológica, y la seguridad de nuestro país depende del control estricto de la producción de informaciones". La censura llegó también a programas considerados "demasiado ligeros", como la versión china de la Star Academy, emitida por Hunan Tv.

El año 2006 estuvo marcado por la recuperación ideológica de los medios de comunicación considerados demasiado liberales. A comienzo del año, el Departamento de Propaganda dejó de contar con los reputados periodistas Li Datong y Lu Yaogang en el semanario *Bing Dian*. La purga provocó fuertes reacciones entre la profesión, y en el Partido Comunista. Para yugular la protesta, las autoridades prohibieron que se hablara de ella, vigilaron los foros de discusión frecuentados por periodistas y enviaron policías a las redacciones. "La nueva generación de periodista ha estudiado siguiendo las normas occidentales y ya no cree en las nuevas ideologías del Partido Comunista. (...) Pero no existe libertad de prensa y casi ningún sector del Estado acepta que podamos cumplir con nuestro papel de vigilantes", explica Li Datong.

Las autoridades sancionaron de nuevo a las redacciones del diario *Xin Jing Bao* y del semanario *Nanfang Zhoumo*, puntas de lanza desde hace varios años del periodismo de investigación, por sus artículos considerados demasiado independientes. Volvieron a apoderarse del *Zhongguo Qingnian Bao*, dependiente de la Liga de la Juventud: han despedido a varios directores y han reforzado la censura de los jefes de sección. Algunos grupos de prensa de Shanghai, Cantón y

Shenzhen, especialmente los de información económica, intentan frecuentemente rebasar los límites de la censura, investigando entre otras cosas los abusos de autoridad. Muchos periodistas se refugiaron en la prensa digital, pero han visto que también allí se practica la misma censura.

Sigue en marcha la privatización del sector de medios de comunicación con grupos de prensa que en ocasiones cotizan en bolsa, en Pekín o en Shanghai. El país tiene 2.000 periódicos que este año tiraron cien millones de ejemplares diarios. 8.000 revistas y más de 700 canales de televisión se reparten un mercado en expansión. Aunque el país es miembro de la OMC desde 2001, el gobierno es cada vez más proteccionista. En 2006, *Xinhua* se vanaglorió de ser la única que puede vender informaciones, fotografías y vídeo a los medios de comunicación chinos. La agencia oficial intenta así conservar el monopolio económico y político, al tiempo que acapara los dividendos de las informaciones económicas, cuya venta antes era libre. Por otra parte, el gobierno prohibió en abril nuevas joint-ventures en el terreno de la prensa. La nacionalización afecta también al ocio: en septiembre, la autoridad de regulación prohibió que, por la noche, los canales de televisión emitan dibujos animados que no sean chinos.

AUMENTAN LAS AGRESIONES Y LAS DENUNCIAS POR DIFAMACIÓN

Las agresiones a periodistas, cada vez más numerosas, no son únicamente obra de miembros de las fuerzas de seguridad, sino también de delincuentes o secuaces de algunos empresarios. Reporteros sin Fronteras tuvo conocimiento de alrededor de cuarenta. Pero, según la asociación oficial, el periodismo se ha convertido en el tercer oficio más peligroso, detrás de los de minero y policía. La violencia afecta especialmente a los reporteros de los tabloides, cuyo inmoderado gusto por los sucesos les lleva a veces a enfrentarse a peligros, para conseguir primicias. En 2006, unos policías mataron a los periodistas Wu Xianghu y Xiao Guopeng.

Por otra parte aumentaron los procesos por difamación, en ocasiones para imponer silencio a la prensa de investigación. En junio, un proveedor

CHINA



taiwanés de Apple pidió tres millones de euros, en concepto de daños y perjuicios, a dos periodistas del *Diyi Caijin Ribao*, que investigaron sobre las condiciones de trabajo en algunas fábricas que producen iPods. Los industriales retiraron la denuncia, como consecuencia de las presiones internacionales.

Tanto en las ciudades como en el campo, la radio sigue siendo muy popular. Cientos de millones de chinos disponen de aparatos que les permiten captar emisoras internacionales, con un tono completamente diferente del de las radios chinas. Así, la *BBC* o *Radio Free Asia* disponen de servicios en chino, que tienen decenas de millones de oyentes. Pero sus programas sufren interferencias. Algunas de las antenas que conforman esa "gran muralla de ondas" las ha vendido la empresa francesa Thalès. En 2006, Reporteros sin Fronteras pudo testar entre otras las interferencias de las radios *Voice of Tibet* y *Radio Free Asia* en Tibet. Las autoridades locales superponen, a las ondas cortas y medias de esas radios libres, unos ruidos sordos o programas educativos en chino.

El sector de la televisión - y especialmente los canales de cable - se encuentra en plena expansión. El país tiene más de 700 canales nacionales o locales, y cerca de dos mil canales de cable, que emiten 56.000 horas de programación. Pero es el grupo audiovisual estatal, *CCTV*, presente en todas las parrillas, quien domina el mercado. Los canales regionales son muy dinámicos, aunque están vigilados por Pekín y los gobiernos locales. En marzo, al presentador de un programa económico de Pekín le prohibieron aparecer en el aire, por su tono excesivamente libre. Al canal *Phoenix TV* de Hong Kong se puede acceder por satélite, un privilegio reservado a los extranjeros y a muchos funcionarios. En los hoteles turísticos se pueden ver la *BBC* o la *CNN*, pero cuando en algún reportaje abordan un tema sensible los censores desconectan. Como ocurrió, por ejemplo, en 2006 cuando en la *CNN* entrevistaban a un investigador de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en China.

PROMESAS DE LIBERTAD PARA LA PRENSA EXTRANJERA

El gobierno de Pekín, criticado por no respetar los compromisos que asumió cuando le concedieron

los Juegos Olímpicos de 2008, ha anunciado la modificación de las regulaciones que afectan a los periodistas extranjeros. En 2006 se conocieron al menos 25 casos de detenciones, amenazas o agresiones a profesionales de los medios de comunicación extranjeros. En julio detuvieron a un reportero alemán cuando efectuaba un reportaje sobre la controvertida construcción de una presa, en la provincia de Yunnan (Sur). En septiembre expulsaron a varios equipos de medios extranjeros de la provincia de Fujian (Sur), donde un terrible ciclón acababa de asolar varias ciudades. Por otra parte, en China están bloqueados muchos sitios de Internet de medios de comunicación, y entre ellos el de la *BBC World Service*.

Hong Kong sigue disponiendo de auténtica libertad de prensa, pero cada vez son más fuertes las presiones políticas y económicas de Pekín. Así, a los presentadores de la emisora pirata *Citizen Radio* les citaron en los tribunales, por emitir programas sin tener licencia. La condena a cinco años de cárcel del periodista Ching Cheong, residente en Hong Kong, ha reforzado un sentimiento de preocupación entre los reporteros de la región autónoma que cubren China.

INTERNET BAJO CONTROL

Sin duda China continúa siendo el país más adelantado en materia de filtrado de Internet. Las autoridades siguen con atención las evoluciones tecnológicas, para asegurarse de que ninguna abra una nueva ventana de libre expresión. Así, después de los sitios de Internet y los foros de discusión, las autoridades se centran ahora en los blogs y los sitios que permiten intercambiar vídeos. En el país habría ahora cerca de 17 millones de bloggers. Una cantidad enorme, ciertamente, pero muy pocos de ellos se atreven a abordar temas sensibles y aun menos a criticar la política del gobierno. En primer lugar porque las herramientas de blogs del país incluyen filtros que bloquean las palabras clave "subversivas". Y después, porque las empresas que explotan esos servicios, tanto si son locales como extranjeras, están presionadas por las autoridades, que les obligan a controlar los contenidos que acogen. Por eso, en estas sociedades trabajan ejércitos de



CHINA

moderadores, para sanear los contenidos que producen los bloggers. Finalmente, en un país donde hay 50 personas en la cárcel por expresarse con demasiada libertad en Internet, la autocensura funciona a pleno rendimiento. Hace todavía cinco años eran muchos los que pensaban que Internet, un medio de comunicación

supuestamente incontrolable, iba a revolucionar la sociedad china, y su sistema político. Ahora, cuando el país tiene una influencia geopolítica creciente, la cuestión parece haberse invertido: quizá sea el modelo chino de Internet, basado en la censura y la vigilancia, el que un día consiga imponerse al resto del mundo.



COREA DEL NORTE

Superficie : 120 540 km².

Población : 22 488 000.

Idioma : coreano.

Secretario general del Partido del Trabajo de Corea : Kim Jong-il.

En el país, las tensiones internacionales generadas por el primer ensayo nuclear norcoreano en octubre, fueron acompañadas por nuevas campañas de propaganda en contra el imperialismo extranjero. El régimen totalitario de Pyongyang hizo todo cuanto estaba en su mano para impedir que los norcoreanos pudieran conseguir información independiente sobre el asunto.

Al día siguiente del primer ensayo nuclear norcoreano del 30 de octubre de 2006, los medios de comunicación del Estado difundieron imágenes de celebraciones populares. Los comentaristas, celosos funcionarios del régimen, presumieron de las glorias del programa nuclear de Pyongyang y, naturalmente, del papel primordial de Kim Jong-il.

Todas las emisoras de radio que emiten para el país en coreano están interferidas. En mayo, el gobierno japonés confirmó que estaba siendo objeto de interferencias, procedentes de la península, una radio recientemente creada por una asociación que milita a favor del regreso de los japoneses secuestrados por Corea del Norte. En octubre, los medios de comunicación de Pyongyang denunciaron las actividades de la radio *FreeNK*, difundida por Internet y por onda corta desde Seúl. Los oficiales norcoreanos aprovecharon la ocasión para denunciar la "torpe farsa" de las autoridades norteamericanas, que apoyan a la emisora, y pidieron a sus homólogos surcoreanos que pararan las emisiones.

A pesar de las campañas policiales de verificación de los aparatos de radio (cada aparato, sellado, solo puede escucharse en las frecuencias oficiales), por la frontera china entra cada vez un número más importante de transistores, lo que permite que algunos puedan escuchar los programas de radios surcoreanas, emisoras creadas por exiliados, la *Voice of America* o *Radio Free Asia*.

Son pocos los medios de comunicación extranjeros que pudieron trabajar en Corea del Norte. Es cierto que algunas delegaciones de periodistas surcoreanos han visitado regularmente a sus vecinos, pero con muchos obstáculos. En marzo, por ejemplo, la policía norcoreana retuvo durante varios días a un equipo del canal *SBS*, y amenazó con juzgar a los periodistas de acuerdo con las

leyes de Norte sobre "mentiras". En señal de protesta se marcharon del país todos los reporteros que habían ido a cubrir el encuentro entre familias del Norte y el Sur. En mayo, los oficiales norcoreanos impidieron en el último momento el acceso de 200 periodistas del Sur a la zona económica especial de Gaeseong. La prensa del Sur había criticado la decisión del Norte de anular un proyecto de conexión ferroviaria entre ambos países.

Por otra parte, pocos canales internacionales, entre ellos el norteamericano *ABC News*, y siempre después de largas negociaciones, recibieron autorización para emitir desde Corea del Norte. Allí, los reporteros internacionales están estrechamente vigilados por periodistas locales o policías norcoreanos, que tienen orden de limitar al máximo el contacto de los visitantes con la población.

Kim Jong-il controla directamente la prensa norcoreana, especialmente el *Rodong Shinmun* (El Periódico de los Trabajadores), la agencia de prensa *Korean Central News Agency* y la televisión nacional *JoongAng Bang Song*. En febrero por ejemplo, todos los medios de comunicación alabaron los "logros inmortales" del "jefe líder", con ocasión de su cumpleaños. Todos los periodistas están adoctrinados para que pueden restituir, sin errores, la grandeza del difunto presidente Kim Il-sung, y de su hijo. La prensa está también encargada de demostrar la superioridad del socialismo norcoreano sobre la "corrupción burguesa e imperialista". Cometer un error al teclear cuesta caro: varios periodistas norcoreanos fueron enviados a campos de "revolucionización" por una simple falta de ortografía. Por otra parte, a Song Keum-chul, de la televisión estatal, le internaron en un campo de concentración a finales de 1995, por crear un grupo de periodistas críticos. No se ha vuelto a saber nada de él desde aquella fecha.

FILIPINAS

Superficie : 300 000 km².

Población : 83 050 000.

Idiomas : tagalo, inglés.

Jefe del Estado : Gloria Macapagal-Arroyo.

A pesar de que se produjeron nuevas detenciones de asesinos de periodistas, las autoridades no consiguieron encauzar la oleada de violencia contra la prensa. En 2006 mataron al menos a seis profesionales de los medios de comunicación. Y la prensa descubrió a un nuevo enemigo: José Miguel Arroyo, el marido de la presidenta Gloria Arroyo, quien multiplicó las denuncias por difamación.

El 18 de noviembre de 2006, mientras su esposo denunciaba por "difamación" a más de cuarenta periodistas, la presidenta Gloria Arroyo declaraba que su gobierno "es respetuoso con la libertad de prensa, una institución de la democracia filipina". El mismo día, la periodista Ellen Tordesillas, conocida por sus críticas al gobierno, recibía un e-mail amenazante: "Tus días están contados". Asesinatos, agresiones, detenciones, denuncias abusivas y censuras, marcaron el año 2006.

La avalancha de denuncias del "Primer Caballero", en un país donde la difamación todavía está criminalizada, puso en peligro la libertad de decenas de periodistas. Así, en octubre, ocho responsables del diario privado *Malaya* escaparon por poco a la detención, después de que publicaran un editorial en el que acusaban de "corrupción" al marido de la jefa del Estado. En 43 denuncias presentadas contra periodistas, José Miguel Arroyo pidió un total de 70 millones de pesos filipinos (cerca de 1,1 millones de euros). En diciembre, las organizaciones de periodistas contraatacaron denunciando a su vez al marido de la presidenta por violación de la libertad de prensa, y solicitando un peso para cada ciudadano filipino, en concepto de daños.

El 24 de febrero de 2006, la presidenta, enfrentada a una rebelión en el interior del ejército, declaró el estado de excepción. A varios generales les pusieron grilletes y la represión se extendió a la prensa de oposición. El mismo día la policía registró el *Daily Tribune*, incautándose de algunos documentos.

En 2006 asesinaron al menos a seis periodistas en el ejercicio de su trabajo. La mayoría de ellos eran presentadores de alguna de las muy numerosas radios que existen en el país. En Filipinas, las emisoras locales venden franjas horarias a personas privadas ("block timers"), que pueden emitir sus

propios programas, con carácter comercial o político. Así, Rolly Canete, abatido en enero de 2006 en la ciudad de Pagadián (provincia de Zamboanga del sur, Sur), presentaba programas en radios locales, por cuenta de un diputado y su mujer, gobernadora de la provincia. A veces los asesinos a sueldo dan muestra de una extrema determinación. A Fernando Batul, comentarista de la radio *dyPR*, le mataron a disparos en mayo, cuando acudía a su trabajo en la isla de Palawan (suroeste de Manila). Pocas semanas antes había escapado a un intento de asesinato, cuando arrojaron dos granadas a su casa. Los agresores dejaron una carta, aconsejándole que "contuviera la lengua". Pocos días después detuvieron a un policía, y se supone que los autores intelectuales serían algunos políticos locales. La prensa local también puede resultar molesta. A Orlando Mendoza, de 58 años, redactor jefe del periódico *Tarlac Patro* en la provincia de Luzón, le asesinaron en abril. Había recibido amenazas de un grupo paramilitar.

La administración de Gloria Arroyo ha sido ampliamente criticada por su incapacidad para luchar contra las ejecuciones de militantes de la oposición, y defensores de los derechos humanos. Algunos periodistas comprometidos sufrieron esa violencia política. Así, a Mazel y George Vigo les mataron en junio, en la isla de Mindanao. También se convirtieron en objetivos los medios de comunicación comunitarios que defienden los derechos de los campesinos. En julio, unos hombres armados prendieron fuego al edificio de la emisora *Radjo Cagayano* y a uno de sus presentadores, sindicalista campesino, le mataron a los pocos meses. Se sospecha que algunos militares dirigieron estos ataques.

La policía y la justicia consiguieron algunos éxitos en su lucha contra los homicidas y asesinos de periodistas. Así, los cuatro asesinos de Marlene

FILIPINAS

Esperat, periodista especializada en la corrupción, asesinada en marzo de 2005, fueron condenados a cadena perpetua. Pero algunas complicidades en el interior de la justicia han permitido que, de momento, los autores intelectuales hayan logrado escapar a la acción de los tribunales. En cambio, en marzo la justicia declaró inocente a un ex policía, sospechoso de ser el "cerebro" del asesinato del periodista Ely Binoya, cometido en junio de 2004. El tribunal regional de la ciudad de General Santos (Sur) consideró que no eran suficientes las pruebas en su contra.

En 2006 se conocieron al menos 25 casos de intentos homicidas y agresiones, y diez detenciones. También la censura ganó terreno, con frecuen-

cia por culpa de políticos locales que quieren silenciar a los medios de comunicación de oposición. En marzo, el alcalde de Valencia City (al sur de Manila) ordenó el cierre de la radio *DXVR*, algunos de cuyos presentadores son cercanos a sus adversarios políticos. En la capital, la autoridad de regulación prohibió un programa de reportajes del canal *ABS-CBN*, por un controvertido tema sobre el uso de droga en el país.

Finalmente, las autoridades de la provincia de Aurora no hicieron nada para encontrar a Joey Estriber, presentador de radio y especialista en cuestiones medioambientales, al que secuestraron en marzo. Denunciaba la explotación ilegal de madera en la región.

NEPAL

Superficie : 147 180 km².

Población : 27 133 000.

Idioma : nepalí.

Jefe del Gobierno : Girija Prasad Koirala.

Antes de verse barrido por una revolución democrática, el rey Gyanendra puso en peligro la propia existencia de la prensa independiente. Unas fuerzas del orden desatadas detuvieron, agredieron, censuraron o amenazaron a varios cientos de periodistas. La prensa, en la primera línea de la lucha contra el monarca, fue recuperando progresivamente sus derechos a partir de abril.

La revolución democrática que, en abril, permitió la restauración del Parlamento y después, en noviembre, la firma de un acuerdo de paz y el reparto del poder histórico con los maoístas, terminó con una represión que había afectado, todos confundidos, a los medios de comunicación independientes y de la oposición. Hasta su caída, el rey Gyanendra, predador de la libertad de prensa, mantuvo una fuerte censura en el país. El monarca, autoproclamado jefe del gobierno, aniquiló la práctica totalidad de las protecciones constitucionales y legales conseguidas por la prensa independiente en 1990. Por otra parte, habían despedido a más de un millar de periodistas y la crisis económica, provocada por el gobierno, afectó a muchísimos medios de comunicación.

En las manifestaciones democráticas del 1 de febrero de 2006, un año después de que el rey recuperara el poder, detuvieron a más de medio centenar de periodistas, cuando participaban o cubrían las manifestaciones organizadas en todo el país por la Federación de Periodistas Nepaleses (FNJ). A algunos, como a Shyam Shrestha, redactor jefe del mensual de oposición *Mulyankan*, la policía les detuvo durante varios meses, aplicándoles las drásticas leyes de seguridad existentes. Y, con frecuencia, en condiciones espantosas. Unos soldados torturaron, y amenazaron con violarla, a la joven periodista Bhawana Prasain, del mensual *Majdur Aawaj*, mientras estuvo detenida en febrero.

Durante la revolución de abril las fuerzas de seguridad mataron a más de una decena de civiles. Los periodistas, en primera línea de las manifestaciones, fueron objetivos escogidos por la policía y el ejército. Entre los días 5 y 10 detuvieron o arrestaron a más de un centenar de representantes de la prensa; a la mayoría sin orden de arresto. Reporteros sin Fronteras también tuvo conocimiento de al menos 117 casos de profesionales de

los medios de comunicación a los que las fuerzas de seguridad agredieron o hirieron cuando cubrían manifestaciones, una decena de los cuales resultaron alcanzados por disparos. En la inmensa mayoría de los casos la policía agredió deliberadamente a los reporteros, fácilmente identificables. Por ejemplo, el 23 de abril unos policías aporrearón a Tilak Koirala y Janak Pandit, reporteros del canal *Nepal One*, en Katmandú. También el 19 de abril resultaron heridos de bala cinco periodistas en el distrito de Jhapa (Este).

Ante la movilización popular, el Palacio reforzó la censura. El 13 de abril el Ministerio de Información y Comunicación exigió que los operadores de televisión por cable no emitieran la programación del canal *Kantipur TV (KTV)*, y otros canales informativos. También censuraron varias emisoras de radio de FM.

La FNJ ha llevado a cabo un trabajo extraordinario que le ha permitido volver a conseguir, en la calle y en los tribunales, los derechos que el gobierno le había confiscado. Así, el 5 de abril detuvieron a una docena de periodistas, entre los que se encontraban el presidente y el secretario general de la FNJ, tras ser los primeros en romper el toque de queda y la prohibición de manifestarse, impuestos por las fuerzas de seguridad en todo el país. Al día siguiente la policía detuvo sin contemplaciones a veinticuatro periodistas, entre los que estaba Kanak Dixit, célebre director del *Himal South Asia*. Los manifestantes gritaban eslóganes contra la censura en la prensa.

Tras el anuncio de la restauración del Parlamento, algunos militantes atacaron a periodistas de la prensa gubernamental. Unos manifestantes llevaron a cabo actos de vandalismo en las oficinas de Shankar Tapa, corresponsal de *Radio Nepal* en Dipayal (Oeste).

NEPAL

Una vez que comenzó a actuar el gobierno de Girija Prasad Koirala se fueron restaurando una a una las libertades públicas. En mayo, el Tribunal Supremo anuló el artículo 8 de la Ley de radio y teledifusión y el artículo 15(1) de la Ley de publicaciones y periódicos, por considerarlos anticonstitucionales. El 9 de mayo el gobierno decidió anular una ordenanza sobre los medios de comunicación - que entre otras cosas prohibía a las radios de FM emitir información -, promulgada por el gobierno de Gyanendra. Igualmente, las autoridades derogaron la Ley antiterrorista, que se había utilizado en varias ocasiones para encarcelar a periodistas. Sobre la marcha, las autoridades concedieron nuevas licencias a radios y televisiones privadas y después levantaron la censura de todos los sitios de Internet, que había puesto en marcha el gobierno anterior.

En 2006 el Partido Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M) cometió menos ataques contra periodistas que en años precedentes. En marzo, algunos miembros del Comité Central del CPN-M se comprometieron con Reporteros sin Fronteras a garantizar la libertad de expresión, y el derecho de los periodistas a desplazarse libremente para hacer su trabajo. En noviembre, Prachanda, el líder del CPN-M anunció que el partido ponía fin a once años de lucha armada, tras firmar con el partido

democráticos un acuerdo que prevé la creación de una Asamblea Constituyente y un gobierno transitorio. Sin embargo, en las regiones que controlan, los maoístas amenazaron frecuentemente a la prensa. En agosto, un grupo de maoístas detuvo en el distrito de Bara (sur del país) a 21 personas, entre las que había 12 periodistas. Maltrataron al fotógrafo Ram Sarraf. También en octubre amenazaron, y acusaron de difundir información falsa de los cuadros del Partido maoísta, al corresponsal del grupo *Kantipur* y presidente de Federación de Periodistas Nepaleses en Khotang (Este).

Entre abril y diciembre de 2006 militantes maoístas detuvieron, agredieron, citaron abusivamente o censuraron al menos a quince periodistas. "Los maoístas siguen sin querer que la prensa conozca sus imperfecciones. (...) Cuando publican o transmiten informaciones críticas sobre ellos, los periodistas continúan recibiendo presiones psicológicas y amenazas", aseguró la FNJ.

En total, en 2006 detuvieron en Nepal al menos a 245 periodistas, mientras que otros 180 resultaron heridos, o se vieron agredidos o amenazados. Finalmente, censuraron al menos 30 medios de comunicación y destruyeron otros cuatro, en los enfrentamientos entre el ejército y los maoístas.

PAKISTÁN



Superficie : 796 100 km².

Población : 156 600 000.

Idiomas : urdu, inglés.

Jefe del Estado : général Pervez Musharraf.

El pluralismo y la calidad informativa han mejorado gracias a la explosión de canales independientes de televisión. Pero las fuerzas de seguridad han radicalizado sus métodos represivos: algunos militares secuestraron y torturaron a una decena de periodistas. En las zonas tribales la situación es particularmente difícil.

El asesinato en las zonas tribales del reportero Hayatullah Khan provocó, en junio de 2006, una oleada de protestas sin precedente en el país. Corresponsal de medios de comunicación paquistaníes y extranjeros en la muy agitada región de Waziristán, le secuestraron meses antes unos hombres armados, que presumiblemente pertenecían a los servicios secreto militares. El caso confirmó la brutalidad de las fuerzas de seguridad con los periodistas que se interesan demasiado por la situación en las zonas tribales, y en Baluchistán. Presionado, el gobierno puso en marcha dos comisiones de investigación, pero nunca ha hecho públicas sus conclusiones.

En 2006 las fuerzas de seguridad secuestraron al menos a otros diez profesionales de los medios de comunicación, a veces durante algunas horas solamente, pero con frecuencia en condiciones muy difíciles. Los servicios secretos militares tuvieron detenidos de marzo a junio a Mukesh Rupeta y Sanjay Kumar, del canal *Geo TV*. Les detuvieron después de que grabaran imágenes de una base aérea utilizada por el ejército norteamericano. Una vez en libertad, Mukesh Rupeta declaró: "Los que nos detuvieron parecían ser agentes secretos y, cuando me pegaban, yo me preguntaba si me consideraban un paquistaní". Igualmente Mehruddin Marri, del diario en sindhi *Kawish*, testimonió tras permanecer tres meses detenido por los militares: "Me dieron golpes y descargas eléctricas. Perdí el conocimiento. Luego me impidieron dormir durante tres noches". Antes dejarle en libertad, un militar le advirtió en los siguientes términos: "Nunca te enfrentes al Estado ni a los servicios secretos".

Los militares también están implicados en la detención, en abril, de Munir Mengal, uno de los promotores del proyecto del canal de televisión en baluche *Baloch Voice*, en Karachi (Sur). Su familia tuvo que esperar hasta diciembre para que le autorizaran a verle, en un centro de detención militar. Por

su parte, Dilawar Khan, periodista de la *BBC* y del diario *Dawn*, fue secuestrado y amenazado, durante algunas horas, en noviembre. A su hermano le mataron en agosto, en circunstancias no aclaradas, en Waziristán.

A otro periodista, Munir Sangi, del canal privado *Kawish Televisión Network (KTN)*, le mataron en mayo de 2006 en Larkana (Sudeste). Los sospechosos, detenidos por la policía, habrían actuado por orden de un político local.

Los pocos periodistas que viven en las zonas tribales y en Baluchistán tuvieron que trabajar bajo el fuego cruzado de las fuerzas de seguridad, los militares yihadistas y los jefes tribales. Algunos imanes y jefes talibanes utilizaron sus emisoras clandestinas de FM para lanzar propaganda, y hacer llamamientos a tomar represalias con los periodistas. El gobierno federal cerró la mayoría de esa emisoras ilegales. En noviembre, los talibanes secuestraron al hijo de un periodista de Waziristán Norte, y prohibieron la difusión de periódicos durante dos días, tras la publicación en la prensa de un artículo erróneo. "Los talibanes nos acusan de espías, y las autoridades y el ejército nos impiden trabajar libremente", explica uno de los responsables de la Unión de Periodistas de las Zonas Tribales.

A la prensa paquistaní, como a la internacional, se la ha mantenido frecuentemente al margen de las zonas fronterizas con Afganistán. En enero, a dos reporteros de Peshawar les detuvieron cuando iban a la región de Bajaur, donde el ejército norteamericano acababa de bombardear un pueblo. También fue cerca de Bajaur donde detuvieron y golpearon a cinco periodistas en noviembre, cuando cubrían unas manifestaciones relacionadas con el bombardeo de una madrasa, por el ejército.

El acoso y las amenazas siguen siendo los métodos preferidos por los servicios de seguridad.

PAKISTÁN



Reporteros sin Fronteras ha tenido conocimiento de más de cuarenta casos en 2006. Por ejemplo, Mushtaq Ghuman, del *Business Recorder*, recibió amenazas por teléfono cuando estaba trabajando en un artículo, molesto para el Primer Ministro. A finales de diciembre, la periodista Carlotta Gall, del *Nuevo York Times*, y su ayudante paquistaní Akhtar Soomro, fueron agredidos y amenazados por unos agentes de los servicios secretos, cuando realizaban un reportaje en Quetta (Oeste). Esos métodos llevaron a Amir Mir, célebre periodista de investigación, a negarse a recibir un premio de la profesión, que debía entregarle el presidente Pervez Musharraf. Los servicios del jefe del Estado acababan de hacer una lista de 30 editorialistas y periodistas a "alejar", para suavizar las críticas en la prensa.

LOS MEDIOS AUDIOVISUALES MUY VIGILADOS

Las televisiones privadas han contribuido considerablemente a la mejora de la calidad y el pluralismo informativo. Pero no lo han hecho sin obstáculos. En septiembre, la policía obligó a los operadores por cable de la provincia de Pendjab (Este) a dejar de emitir el canal *ARY TV*, que acababa de difundir imágenes de una agresión policial a tres periodistas. En noviembre, la Autoridad de Regulación de los Medios de Comunicación Paquistaníes (Pakistan Electronic Media Regulatory Authority, PEMRA) prohibió que los operadores paquistaníes por cable y satélite emitieran el canal privado *Sindh TV*. Dos semanas después, y tras diversas tratativas, la

PEMRA autorizó la reanudación de los programas. La PEMRA también prohibió, en marzo, la difusión en Baluchistán de los canales afganos *Tolo TV* y *Ariana TV*, a los que acusaba de utilizar un "lenguaje venenoso y agresivo en relación con Pakistán".

También a las radios se les pusieron trabas. En agosto, la PEMRA se negó a renovar la licencia de la emisora *Mast FM 103*, creada en Balakot para ayudar a la población de las regiones afectadas por el terremoto de 2005. En noviembre, la misma radio perdió un juicio contra la PEMRA, en el que pedía poder retransmitir los programas en urdu de la *BBC World Service*.

En febrero de 2006 se produjeron los primeros casos de censura de Internet en Pakistán. La Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán (PTA) bloqueó entonces doce sitios, que reproducían las caricaturas del Profeta publicadas por el diario danés *Jyllands-Posten*. Dos meses después, la PTA censuraba cinco sitios de Internet, con la excusa de que contenían "informaciones engañosas". En julio, la lista negra de la Web paquistaní se prolongó aun más para incluir treinta nuevas direcciones, la mayoría relacionadas con el movimiento nacionalista baluche, cuyos partidarios se oponen al ejército desde hace varios años, para conseguir la independencia. Para bloquear el acceso a algunos blogs baluches, o relacionados con movimientos extremistas hindúes, la PTA hizo inaccesible durante varias semanas la totalidad de las publicaciones albergadas en *blogger.com*.



SRI LANKA

Superficie : 65 610 km².

Población : 20 743 000.

Idiomas : cingalés, tamul, inglés.

Jefe del Estado : Mahinda Rajapakse.

La reanudación de la guerra civil tuvo consecuencias dramáticas para los periodistas de Sri Lanka, y más particularmente para los tamules. En 2006 mataron a siete profesionales de la información. Las milicias progubernamentales, y en ocasiones el ejército, atacaron a la prensa, a la que acusan de mantener el nacionalismo tamul. Por su parte, los Tigres Tamules amenazaron a quienes se oponen a su política.

La intensificación del conflicto entre el ejército y los Tigres Tamules (LTTE) obligó a decenas de periodistas tamules a callarse, o esconderse. La mayoría de responsables de los medios de comunicación tamules ya no firman sus artículos, por temor a las represalias. "En los medios de comunicación tamules ha muerto el periodista de investigación y todos se autocensuran", explicó el director de un medio, que también ha sufrido intimidaciones. La guerra emprendida contra la prensa tamul afectó a los periodistas más respetados e influyentes. En agosto, unos desconocidos secuestraron durante un día, y le amenazaron con represalias, al director de información de la radio privada *Sooriyan*, Nadarajah Guruparan. Luego, en noviembre, al director del canal *Shakthi* le amenazaron de muerte, después de que cubriera ampliamente el asesinato de un diputado tamul.

En 2006 mataron a tres periodistas y cuatro colaboradores de medios de comunicación. De momento no han detenido a ningún sospechoso. En enero asesinaron a Subramaniyan Sugirdharajan, corresponsal del diario tamul *Sudar Oli* en Trincomalee (Este). La víspera escribió un artículo sobre las exacciones cometidas en su región por grupos paramilitares progubernamentales. En julio, apareció muerto en Colombo el periodista independiente cingalés Sampath Lakmal. Al mes siguiente abatieron en su domicilio de Jaffna a Sinnathamby Sivamaharajah, director de un periódico nacionalista tamul, y político.

En la isla reina la impunidad. Las autoridades bloquean las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas, y entre ellos el de Dharmeratnam Sivaram, director del sitio informativo *Tamilnet* y editorialista del diario *Daily Mirror*, a quien mataron en 2005. Nunca han molestado a los sospechosos - unos militantes de las milicias tamules progubernamentales - mientras que los investigadores han identificado claramente a algunos de ellos.

Por temor a convertirse en el siguiente en la lista de periodistas muertos, muchos profesionales de los medios de comunicación han cesado en sus actividades, o han huido del país. En diciembre, y tras verse amenazado por la cobertura que hizo del drama que afecta a las poblaciones tamules del Este y el Norte, se refugió en la India el fotógrafo Anuruddha Lokuhapuarachchi, de la agencia *Reuters*. Pocos días antes, sabiéndose amenazado, el periodista cingalés Rohitha Bashana Abeywardena, huyó a Europa.

El ejército atacó a los medios de comunicación acusados de reproducir la propaganda de los Tigres Tamules, calificados de terroristas. En octubre, unos ataques aéreos destruyeron las instalaciones de la radio *Voice of Tigers* cerca de Kilinochchi (zona controlada por el LTTE), hiriendo a dos de sus empleados. Sobre el terreno, los soldados impusieron nuevas restricciones a los movimientos de la prensa. Así, cuando en agosto tuvo lugar la batalla en torno a Muttur, el ejército y el LTTE impidieron que los reporteros acudieran al lugar. En noviembre, unos oficiales citaron a los responsables de los periódicos de Jaffna, para ordenarles que no publicaran información procedente de los Tigres Tamules.

Uthayan, un periódico mártir publicado en Jaffna, perdió a tres de sus empleados en 2006. El 2 de mayo, víspera del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que la UNESCO celebraba este año en Colombo, unos hombres armados que presumiblemente eran milicianos progubernamentales ametrallaron las oficinas de *Uthayan*, matando a dos trabajadores. El 1 de mayo, el diario publicó una caricatura de Douglas Devananda, líder del Eelam People's Democratic Party (EPDP) (miembro de la coalición gubernamental). Pocas semanas más tarde, a un revendedor del periódico le mataron unos soldados, en las calles de Jaffna. En



SRI LANKA

agosto, unos hombres armados amenazaron a la redacción con nuevas represalias si publicaba un comunicado de los estudiantes en huelga, y después prendieron fuego a las rotativas del periódico. A final del año, los militares impidieron que pudiera aprovisionarse de papel.

La distribución de los medios de comunicación tamules también tuvo que enfrentarse a graves obstáculos en el Este. Los distribuidores de prensa, amenazados de muerte por la milicia pro-gubernamental del coronel Karuna, se vieron varias veces obligados a dejar de vender los periódicos *Virakesari*, *Thinakural* o *Sudar Oil*. En cambio, nunca tuvo problemas *Thinakaran*, el diario estatal en lengua tamil.

Aunque fueron pocos los periodistas detenidos - menos de diez en 2006 -, a finales de diciembre las autoridades intentaron detener al célebre director de publicación del *Sunday Leader*, Lasantha Wickramatunga. Acababa de escribir un artículo sobre la construcción secreta de un lujoso bunker presidencial, cuyo coste se estima en cerca de 3 millones de euros. Pero a consecuencia de la presión, especialmente de Estados Unidos, el gobierno dio marcha atrás.

Muy criticados, el presidente Mahinda Rajapakse y su gobierno reforzaron el control de los medios de comunicación estatales. Al menos dos periodistas, uno de los cuales es Rajpal Abenayaka, director del semanario pro-gubernamental *Sunday Observer*, fueron destituidos de sus cargos tras publicar informaciones consideradas demasiado independientes. También retiraron de la programación dos programas de la radio estatal, porque hablaron del conflicto étnico en términos considerados demasiado libres. En noviembre, el gobierno utilizó también la Ley de buenas conductas sociales de 1966 para prohibir *Raja FM*, a la que acusaba de difundir sorprendentes programas sobre sexualidad.

Finalmente, en la prensa cingalesa extremista, y en particular en la relacionada con el JVP (partido nacionalista), se pusieron en marcha algunas campañas de odio contra periodistas y organizaciones no gubernamentales, a los que se acusa de apoyar a los Tigres Tamules. En Internet se desencadenaron las pasiones, y los medios independientes se vieron frecuentemente amenazados por partidarios, y opositores de los Tigres Tamules. Ambos campos atacaron sucesivamente los servicios en tamil y en cingalés de la *BBC World Service*.

TIMOR

Superficie : 14 870 km².

Población : 947 000.

Idiomas : tetun, portugués.

Jefe del Estado : José Alexandre Xanana Gusmao.

Las revueltas y tensiones políticas no facilitaron la tarea de la prensa. Varias redacciones se vieron amenazadas por partidarios, u opositores, del anterior Primer Ministro, Mari Alkatiri. A pesar de la violencia, esta joven Nación sigue disfrutando de una situación favorable para la libertad de prensa.

Un motín de los militares contra el gobierno provocó un grave deterioro en las condiciones de trabajo de los periodistas, a partir del mes de mayo de 2006. Presionados por los partidarios de Mari Alkatiri, obligado a dimitir a finales de junio, los periódicos *Timor Post* y *Suara Timor Lorosae* se vieron obligados a dejar de aparecer durante algunos días. El ex jefe del gobierno criticó abiertamente los medios de comunicación independientes, como el *Suara Timor Lorosae*, e hizo un llamamiento a boicotearlos.

nos que participaban en la misión de mantenimiento de la paz maltrataron, y detuvieron durante poco tiempo, a un reportero de *Associated Press*. El 12, un grupo de jóvenes arrojó piedras a unos periodistas del *Timor Post*. El 29, unos militantes políticos saquearon las oficinas de la principal radiotelevisión, *TVTL*, en Dili. Exigían la suspensión de los programas informativos. Finalmente, el 9 de noviembre a un corresponsal de la *Agencia France-Presse* le alcanzó en la cara una piedra, lanzada por un manifestante.

En varias ocasiones se produjeron agresiones a periodistas. El 10 de junio, unos soldados australia-



VIETNAM

Superficie : 331 690 km².

Población : 84 238 000.

Idioma : vietnamita.

Jefe del Estado : Nong Duc Manh.

En 2006, mientras aparecía una prensa disidente, los medios de comunicación liberales rebasaron los límites de la censura. En un primer momento el gobierno hizo que se aprobara una ley liberticida y después, al final del año, amenazó con hacerse cargo del conjunto de la prensa del país.

A comienzos del año 2006 todo parecía sonreír a la prensa vietnamita. En abril apareció una publicación disidente, *Tu do Ngon luan*, en las grandes ciudades y en Internet. Siguiendo los pasos a la creación de un nuevo movimiento de la disidencia, el Bloc 8406 (creado en abril de 2000), en agosto apareció un segundo periódico, *Tu Do Dan chu* (Libertad y Democracia). Pero rápidamente la policía citó y vigiló a los periodistas disidentes Hoang Tien, Nguyen Khac Toan, Nguyen Van Dai, Duong Thi Xuan y Bach Ngoc Duong. En Internet, han circulado desde Vietnam otras dos cabeceras: *To Quoc* (Patria) y *Dan Chu* (Democracia). Desafiando al poder, los periodistas y bloggers disidentes llegaron incluso a concentrarse en la Free Journalists Association, lo que representa toda una primicia en Vietnam.

Por su parte, la prensa autorizada (más de 600 publicaciones, un centenar de radios y televisiones y otro centenar de sitios de Internet), aprovechó los preparativos del congreso del Partido Comunista para abordar los temas más sensibles. Así, un artículo publicado en un periódico de Ho Chi Minh-Ciudad cuestionaba implícitamente el artículo 4º de la Constitución, que consagra el predominio del Partido sobre el Estado. En un foro del sitio *Vietnamnet*, el economista Bui Kien Thanh declaró que si "el Partido habla en serio de democracia, debe dejar que el pueblo elija a sus dirigentes". Los conservadores denunciaron inmediatamente esas derivas en el periódico oficial *Nhan Dan*. El ideólogo del Partido, Nguyen Duc Binh, aseguró que las "discusiones abiertas son peligrosas".

La prensa liberal, encabezada por *Tuoi Tre* (La Juventud), también se hizo notar por su libertad de tono con motivo del escándalo de un caso de corrupción, en el que estaba implicado el Ministro de Transportes. *Tuoi Tre*, uno de cuyos reporteros fue agredido en Hanoi cuando investigaba el caso,

pidió abiertamente la dimisión del ministro. En respuesta, el gobierno puso en vigor en julio una nueva ley que sanciona a los medios de comunicación, y a los periodistas, que difamen y ataquen al prestigio del Estado. El decreto va dirigido igualmente a las informaciones que "violen las tradiciones culturales, deformen la realidad histórica, nieguen los logros revolucionarios y atenten contra la Nación, los grandes hombres y los héroes nacionales". El texto no establece penas de cárcel, sino multas y suspensiones. En octubre, el Ministerio de Cultura utilizó la ley para cerrar temporalmente tres publicaciones y sancionar a otras ocho, que habían publicado artículos sobre un escándalo relacionado de nuevo con billetes de banco.

En el congreso de abril se reeligió, para otros cinco años al frente del Partido, a Nong Duc Manh, con el 80% de los votos emitidos. El Primer Ministro, Phan Van Khai, fue reemplazado por Nguyen Tan Dung, un comunista ortodoxo al que sin embargo se percibe como un reformista económico. Los conservadores siguen controlando los servicios de seguridad, con el objetivo de dejar fuera de juego a quienes contesten al partido único. Así, en noviembre condenaron a quince meses de cárcel por "terrorismo" a cuatro norteamericanos de origen vietnamita, y otros cuatro vietnamitas. Relacionados con un grupo radical asentado en Estados Unidos, les acusaron de introducir ilegalmente en el país material para emisiones radiofónicas, con el objetivo de emitir mensajes antigubernamentales. Por otra parte, los periodistas extranjeras no siempre pueden acceder libremente a las zonas montañosas centrales, donde viven algunas minorías étnicas cuyos derechos burlan las autoridades.

En noviembre se reforzó la represión de las actividades disidentes, en vísperas de la cumbre de la organización Cooperación Económica para



VIETNAM

Asia-Pacífico (APEC) en Hanoi. Pusieron en arresto domiciliario a los periodistas de las publicaciones libres *Tu don Ngon luan* y *Tu Do Dân chu*, con pancartas delante de sus domicilios. “Zona de seguridad. Nada de extranjeros”. Y así, durante varios días hubo policías estacionados delante del domicilio de Hoang Tien. Mientras que al ciberdisidente Pham Hong Son, recién salido de la cárcel, unos policías le daban una paliza.

Una vez que las delegaciones extranjeras se marcharon de Vietnam, el poder preparó el contraa-

taque. Le Dung, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, aseguró que era inaceptable que algunas personas abusen “de la máscara de la democracia, con argumentos falsos, deformados y fabricados, sobre la situación de Vietnam”. Las autoridades recordaron con firmeza que las publicaciones disidentes son ilegales.

Ante la represión, el padre Phan Van Loi, iniciador de *Tu do Ngon luan*, escribió a Reporteros sin Fronteras: “Queremos enviar un mensaje al Partido y al pueblo: ¡Solo la verdad hace libres!”.



Informe anual 2007

EUROPA

Y EX URSS

LA TENTACIÓN DE LO PROHIBIDO

El año 2006 generó muchas preocupaciones por la libertad de prensa en Europa, y no solamente allí donde la naturaleza del régimen da por descontadas las dificultades en ese terreno. Algunos países de la Unión Europea pasaron por reveses en materia de defensa de la libertad de prensa. Se puso de manifiesto, a veces violentamente, un deseo de censura o de autocensura, cuando se trataba de abordar asuntos religiosos. Ya se tratara de atentados a la dignidad del Estado o de su jefe, de la negación o la evocación de un acontecimiento histórico, lo cierto es que se restringió aun más el campo de los temas que pueden tratarse sin correr el riesgo de actuaciones judiciales, o de amenazas. La prohibición en tres países, entre los que se encuentra Turquía, del número de enero-febrero 2007 de la revista *Historia*, dedicado a los integristas, es el ejemplo más reciente de esta inquietante tendencia.

Los países de Europa occidental, y también Turquía, sienten auténtica tentación de excluir algunos temas del debate público. El caso de las caricaturas de Mahoma, publicadas en primer lugar en Dinamarca en septiembre de 2005, y reproducidas en señal de solidaridad en varios países, estalló en Europa y incluso más allá. La oposición se cristalizó entre partidarios de la libertad de expresión y defensores de las sensibilidades religiosas. En Francia, los periódicos *France Soir* y *Charlie Hebdo* entre otros, que publicaron la totalidad de las caricaturas, pagaron el precio del debate. El Consejo Francés del Culto Musulmán denunció a ambas cabeceas. Las amenazas recibidas por Robert Redeker en el sur del país, tras publicar una tribuna particularmente crítica con el Islam, y la decisión de retirar la ópera "Idomeneo" de Mozart de la cartelera en Alemania, ponen de manifiesto la misma preocupación. Por otra parte, la aprobación en Francia de la Ley de negación del genocidio armenio, y la recurrencia con que se ha utilizado el artículo 301 del código penal en Turquía, para perseguir a los periodistas e intelectuales que hablen de ese genocidio, constituyen también un buen ejemplo del recorte de la libertad de prensa en los temas más sensibles.

En Rusia la prensa vivió horas negras, entre otras las que siguieron al asesinato, el 7 de octubre, de la periodista Anna Politkovskaya, tercer periodista al que mataban durante el año, después de Evgueni Guerassimenko e Ilia Zimine, corresponsal del canal *NTV* en Moscú. Estos muertos elevan a veintiuno el número de profesionales de los medios de comunicación a los que han matado en Rusia, por hacer su trabajo, desde la llegada al poder de Vladimir Putin, en marzo de 2000. Por otra parte, la compra de muchas cabeceras por empresas relacionadas con el Kremlin, así como la falta de pluralismo en el sector audiovisual, han evidenciado el deseo del poder de reforzar su control de la prensa.

En la antigua URSS se ha lamentado el asesinato de algunos profesionales de los medios de comunicación en 2006, y entre ellos el de Anna Politkovskaya, una figura del periodismo de investigación; lo que da idea de las dificultades de los Estados procedentes de la ex Unión Soviética para saldar su herencia autoritaria.

En Ucrania, la mejora de la situación de la libertad de prensa que se produjo tras la revolución naranja, se ha visto atenuada por algunas agresiones a periodistas y la incapacidad demostrada para conseguir resultados satisfactorios en el caso Gongadze. En Tayikistán, la proximidad de las votaciones presidenciales de noviembre se tradujo en el cierre de sitios, y un desigual acceso de los candidatos a los medios de comunicación. En Belarús, la reelección de Alexandre Lukatchnko en marzo, con el 80% de los votos, tuvo lugar en medio de un clima de lo más deprimente. En tres mandatos, el presidente bielorruso consiguió erradicar prácticamente toda la prensa independiente, devolviendo a la profesión a los tiempos del samizdat (publicación clandestina). En Azerbaiyán, la violencia de las agresiones a periodistas y el acoso de la prensa de oposición, hicieron de 2006 un año sombrío.

En Asia Central no ha mejorado la situación. Uzbekistán mantuvo la presión sobre la prensa independiente y extranjera. Kazajstán intensificó las actuaciones judiciales contra los medios de oposición, y mataron en el país a un periodista francés de 24 años. En cuanto a Turkmenistán, el peor país del mundo para la libertad de prensa detrás de Corea del Norte, el año 2006 estuvo marcado por la muerte en la cárcel de la corresponsal de *Radio Free Europe / Radio Liberty*, cuando cumplía una condena de seis años por colaborar con un medio de comunicación extranjero. Otros dos periodistas fueron condenados a penas similares, por el mismo motivo. No se sabe nada de ellos desde el juicio, que se celebró el 25 de agosto. El fallecimiento, el 21 de diciembre, del presidente vitalicio Separmourad Niazov permite esperar una relativa liberalización de uno de los regímenes más cerrados y autoritarios del mundo.

Elsa Vidal
Head of Europa desk

ESPAÑA

Superficie : 505 990 km².

Población : 43 064 000.

Idioma : español.

Jefe del Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero.



La aprobación en el Parlamento Catalán de una Ley del Audiovisual, algunas de cuyas disposiciones resultan peligrosas para la libertad de prensa, vino a recordar que la vigilancia frente a los atentados a la libertad de expresión debe ejercerse sin excepción. La pertenencia a la Unión Europea no garantiza que exista una protección absoluta contra las tentaciones de obstaculizar al trabajo de los periodistas. Por otra parte, las amenazas de ETA a los periodistas siguen obligando a varios de ellos a trabajar con protección.

El 29 de diciembre de 2005 el Parlamento Catalán aprobó la Ley del Audiovisual, que permite regular el contenido de los medios de comunicación y confiere al Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), siguiendo el modelo de sus homólogos de Navarra y Andalucía, poderes sancionadores abusivos tan amplios como los de una autoridad judicial. Varios artículos establecen la posibilidad de imponer fuertes multas (de 90.000 a 300.000 euros), así como de retirar licencias, lo que de facto equivale al cierre del medio en cuestión. Además, el texto estipula que los medios de comunicación tienen que respetar el "principio de veracidad de la información, resultante de la verificación de los hechos" y no pueden "obstaculizar la actividad de vigilancia del gobierno". Estas restrictivas disposiciones en materia de libertad de expresión entran en contradicción con la legislación europea, mucho más liberal en la materia.

En 2006 se produjeron novedades en dos casos judiciales importantes. El 1 de junio quedó confirmada en apelación la condena a siete años de cárcel de Tayssir Allouni, periodista del canal *Al-Jazira*. El 26 de septiembre de 2005, y en el marco de un proceso contra veinticuatro personas acusadas de implicación en actividades terroristas en España, se le condenó como culpable de "colaboración" con Al Qaeda. En las sesiones, el fiscal mencionó la entrevista que Taysir Allouni, entonces jefe de la oficina de *Al-Jazira* en Kabul, hizo a Osama Ben Laden, en octubre de 2001. También insistió en los numerosos contactos del periodista con islamistas extremistas. El 3 de octubre Tayssir Allouni quedó en arresto domiciliario, por razones humanitarias. Pudo así reunirse con su familia en Granada. El 14

de julio *Al-Jazira* anunció la apertura de una oficina en España.

En otro caso sensible, el Tribunal Supremo español ordenó el 5 de diciembre la reapertura de la investigación sobre la muerte del camarógrafo español José Couso, fallecido el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestine Bagdad, como consecuencia del disparo de un obús norteamericano. Quedaba así anulado el sobreseimiento del caso, dictado el 10 de marzo. La suprema jurisdicción consideró que la justicia española es competente en el caso, que podría tener consecuencias en las relaciones de Madrid con Washington. En efecto, podría solicitarse la extradición de los tres militares norteamericanos, responsables del tanque de donde partió el disparo.

El 14 de diciembre, el Ministerio Público consideró infundadas las diligencias abiertas por el juez Del Olmo, en relación con el periódico *Egunkaria*. Según el fiscal, no se ha podido demostrar que el periódico fuera un instrumento de ETA. Eso no significa, sin embargo, que se hayan dejado sin efecto las diligencias abiertas al periódico en lengua vasca, que se encuentra inmerso en otro procedimiento.

Los profesionales de la información que abordan la cuestión del terrorismo de ETA, clasificado como predador de la libertad de prensa por Reporteros sin fronteras, han tenido dificultades para hacer su trabajo. A pesar del alto el fuego permanente, proclamado por ETA el 22 de marzo, varias decenas de profesionales de la prensa siguen trabajando con protección, a causa de las amenazas que les ha dirigido la organización terrorista vasca.

FRANCIA

Superficie : 551.500 km².

Población : 60.496.000.

Idioma : francés.

Jefe del Estado : Jacques Chirac.

El respeto de las creencias religiosas, la protección del secreto de las fuentes y la defensa de la vida privada estuvieron en el centro de los debates sobre la libertad de prensa en Francia, en 2006.

El 1 de febrero de 2006, *France Soir* publicó doce caricaturas del profeta Mahoma, anteriormente aparecidas en un periódico danés. Como consecuencia de ello, Jacques Lefranc, presidente y director de publicación, fue despedido por el propietario franco-egipcio Raymond Lahak. El 6 de febrero, el diario recibió un aviso de bomba. La víspera, unos desconocidos colocaron un extintor delante de los locales de *Charlie Hebdo*, haciendo que sobre el periódico se cerniera el peligro de una explosión. El 7 de febrero se desestimó la demanda de algunas organizaciones musulmanas, entre las que estaba el Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), que habían pedido el embargo del número de *Charlie Hebdo* dedicado enteramente a las caricaturas. El 10 de febrero, el CFCM emprendió una acción judicial contra los periódicos franceses que habían reproducido las caricaturas del profeta Mahoma.

El 19 de septiembre, la publicación en el diario *Le Figaro* de una tribuna del profesor de filosofía Robert Redeker, titulada "Frente a la intimidación islamita, ¿qué tiene que hacer el mundo libre?", supuso la prohibición del número en Egipto y Túnez. Robert Redeker se encuentra bajo la protección de la gendarmería desde que recibió amenazas de muerte, y ha tenido que interrumpir su actividad escolar.

Por otra parte, las leyes sobre la memoria también han contribuido a que la ideología haya sustituido al debate, como pone de manifiesto el que la Asamblea Nacional aprobara un proyecto de ley socialista, penalizando la negación del genocidio armenio y estableciendo sanciones de cinco años de cárcel y multas de 45.000 euros. Participa en la construcción de una verdad histórica oficial que se impone sobre el debate y la clausura del mismo, lo que es contrario a la propia idea de libertad de expresión.

Como el año precedente, 2006 se caracterizó por el incremento de actuaciones judiciales contra periodistas, con el objetivo de hacerles revelar sus fuentes. Sin embargo, en declaraciones a la prensa, el Ministro de Justicia Pascal Clément se comprometió a hacer que se incluya, en la ley de 1881 de libertad de prensa, el principio de protección del secreto de las fuentes. Pero eso no impidió que se sometiera a estudio a seis periodistas, por "sospecha de violación del secreto de instrucción" (*L'Equipe*), "sospecha de violación del secreto profesional" (*Midi Libre*) y "sospecha de abuso de confianza" (en el caso del asunto Clearstream). La absolución del periodista Claude Ardid, dictada el 14 de noviembre por el tribunal correccional de París, vino a atemperar esa tendencia. En la sentencia, el tribunal estimó que el periodista "tiene como misión contribuir a la información del público, incluso en los asuntos judiciales que se encuentren en curso. No se le puede molestar más que en caso de abuso de la libertad de expresión (...) del que fuera culpable (...) pero no a causa de las eventuales violaciones de ese secreto, que hayan contribuido a la información del público".

Los límites que las autoridades intentan imponer al trabajo periodístico adoptan a veces la apariencia de defensa de la vida privada de personalidades públicas. El cese forzoso de Alain Genestar en la dirección de la redacción de *Paris Match*, en junio de 2006, originó fuertes protestas. El director de la revista aseguró que le habían sancionado por publicar, en la portada del número del 25 de agosto de 2005, la foto de Cecilia Sarkozy, esposa del ministro del Interior en Nueva York, con su compañero de entonces. La dirección del grupo, propiedad de Arnaud Lagardère, intimo de Nicolas Sarkozy, habló de "diferencias ideológicas" para explicar el despido.

Finalmente, continúa siendo preocupante la situación en Nueva Caledonia. Allí se utiliza con

FRANCIA

frecuencia a los medios de comunicación como rehenes de los conflictos locales. La situación en *RFO* volvió a la normalidad en noviembre, tras ocho meses de un intermitente bloqueo. A finales de agosto, comienzos de septiembre, se le impidió

funcionar a la imprenta del semanario *Les Infos*; luego, en noviembre, a la del diario *Les Nouvelles calédoniennes*, aunque por poco tiempo. En varias ocasiones se excluyó a algunos periodistas de las conferencias de prensa, o se les impidió filmar.



RUSIA

Superficie : 17 075 400 km².

Población : 143 200 000.

Idioma : ruso.

Jefe del Estado : Vladimir Putin.

Rusia ha tenido que enfrentarse a asesinatos de periodistas - el que más le afectó, sin duda, fue el de Anna Politkovskaya -, como resultado de la diseminación de la violencia en la sociedad y la impunidad que disfrutaban los asesinos de profesionales de la información. Las compras de medios de comunicación siguen representando una seria amenaza para el pluralismo informativo, y la libertad de expresión en el país.

En 2006 asesinaron a tres periodistas, elevando así a veintiuno el número de profesionales de los medios de comunicación muertos por hacer su trabajo desde la elección del presidente Vladimir Putin, el 26 de marzo de 2000.

El asesinato de Anna Politkovskaya, ocurrido el 7 de octubre en su domicilio de Moscú, provocó una oleada internacional de protestas, procedentes tanto de organizaciones intergubernamentales, de la Unión Europea, como de ONG's. La periodista rusa, cuyo trabajo y valor se habían aplaudido mundialmente, colaboraba en el bisemanal *Novaya Gazeta*. Desde hacía muchos años venía denunciando la situación en Chechenia, y también la degradación de la libertades públicas y la corrupción, en el conjunto de la Federación rusa. De la investigación, que en este momento todavía sigue en curso, se encarga personalmente el fiscal general, Yuri Tchaika. Se han examinado muchas pistas y existe una gran preocupación de que la investigación no consiga resultados, como ha ocurrido en la inmensa mayoría de los asesinatos de periodistas en Rusia.

El 26 de julio la madre del periodista encontró el cuerpo de Evgueni Guerassimenko, periodista del semanario regional *Saratovski Rasklad*, en su apartamento. La cabeza estaba envuelta en una bolsa de plástico y el cuerpo presentaba señales de tortura. El 30 de octubre la justicia descartó la hipótesis profesional. El tribunal de Saratov condenó a Serguei Finogueev, sin domicilio fijo, a 18 años de cárcel, por el asesinato. Teniendo en cuenta las investigaciones efectuadas por el periodista, sobre la corrupción de algunas empresas locales, esperamos que la hipótesis profesional no se descarte totalmente hasta que no se hagan todas las verificaciones necesarias. El 26 de febrero apareció muerto en su apartamento de Moscú Ilia Zimine, corresponsal del canal *NTV*. Tenía 33 años. El perio-

distista estaba efectuando una investigación sobre las condiciones higiénicas en los restaurantes de lujo de la capital, y entre otras cosas trabajaba con una cámara oculta. De momento, el fiscal de Moscú no ha establecido ninguna relación entre el asesinato de Ilia Zimine y sus actividades profesionales. Esos crímenes provocaron otras tantas manifestaciones, para reclamar el final de la violencia con los profesionales de la información y el respeto a la libertad de prensa. El 21 de junio y el 15 de diciembre las manifestaciones congregaron a varios cientos de personas, en torno a consignas como "¡Censura hoy, cárcel mañana! ¡Abajo la televisión unipartidista!". También se leyeron los nombres de los periodistas muertos en Rusia a partir del estallido de la Unión Soviética, en 1991.

Se han producido novedades en el proceso de los presuntos asesinos de Paul Klebnikov, redactor jefe de la versión rusa de la revista *Forbes*, asesinado a disparos el 9 de julio de 2004. El tribunal Supremo confirmó la declaración de inocencia de los tres acusados: Fail Sadretdinov, Moussa Vakhaev y Kazbek Doukouzouev. El 10 de enero, en el primer juicio con jurado del país, los tres fueron considerados no culpables del asesinato del periodista. Ahora el caso tiene que reexaminarlo un tribunal de Moscú, y quizá permita que las vistas se celebren abiertas al público, lo que no ha ocurrido hasta el momento.

CONCENTRACIONES PERJUDICIALES POR EL PLURALISMO

Gazprom, conglomerado gasista extremadamente cercano al Kremlin (principal accionista), ha comprado a través de su filial de "medios de comunicación" muchas cabeceras, y entre ellas la del diario *Kommersant*, considerado como uno de los últimos baluartes de la prensa independiente. La operación la efectuó el 31 de agosto de 2006 Alicher Usmanov, un magnate de la metalurgia que

RUSIA



también es dirigente de una de las filiales de Gazprom. El 21 de diciembre la empresa declaraba que tiene intención de comprar en enero de 2007 *Komsomolskaya Pravda*, el mayor diario del país (2,1 millones de lectores diarios).

La presión ejercida en la región, allí donde la concentración de los poderes económico y político es más fuerte, es tal que la libertad de actuación de los periodistas es aún menor que en

Moscú. Además de la muerte de Evgueni Guerassimenko (región de Saratov), al menos agredieron a cinco periodistas que trabajan en las provincias y otra, Elina Ersenoeva, ha desaparecido en Chechenia. La República del Cáucaso sigue siendo un “agujero negro” informativo. Pero eso no impidió que el Presidente ruso declarara que la República independentista “se había vuelto a situar completamente bajo la égida de la Constitución rusa”.



TURKMENISTÁN

Superficie : 488 100 km².

Población : 4 830 000.

Idioma : turcomano.

Jefe del Estado : Gurbanguly Berdimoukhamedov (presidente interino).

El entorno que sofoca a la sociedad y a la prensa turcomanas se cerró aun más en 2006. Detuvieron a varios periodistas, a una la mataron en la cárcel, y sus familias se han visto acosadas por las autoridades. La muerte del presidente Separmourad Niazov, ocurrida en la noche del 21 de diciembre de 2006, ha reavivado la esperanza en una liberalización del régimen más represivo de toda Asia Central.

Los días 16 y 18 de junio fueron arrestados, y detenidos, tres periodistas y militantes de los derechos humanos que habían colaborado en la realización de una "agenda de viaje", dedicada a Turkmenistán, del canal de televisión *France 2*. En un primer momento, Annakourban Amanklytchev, Sapardourdy Khajiev y Ogoulsapar Mouradova, fueron acusados de fomentar un complot contra el "Turkmenbachi" (el padre de todos los turcomanos, apodo del presidente vitalicio Separmourad Niazov). La detención se anunció en el canal presidencial, *Achkhabad TV*. El cargo que finalmente se les imputó fue "posesión ilegal de municiones". Hasta el momento del juicio, que se celebró en secreto el 25 de agosto, sus familias no pudieron verles. Un testigo, que pudo vislumbrar a Annakourban Amanklytchev en los locales del Ministerio de Seguridad Nacional, aseguró que estaba irreconocible y que le interrogaban, día y noche, con inusitada violencia. Al final de una vista expeditiva, y sin que la defensa tuviera posibilidad de expresarse, Annakourban Amanklytchev y Sapardourdy Khajiev fueron condenados a siete años de cárcel; y Ogoulsapar Mouradova a 6 años. Anunciaron que iban a apelar la sentencia. Son las últimas palabras que se les escucharon. El 14 de septiembre llegaba la noticia de la muerte de Ogoulsapar Mouradova. La corresponsal de *Radio Free Europe / Radio Liberty* en Turkmenistán, de cincuenta y ocho años de edad y madre de tres niños, falleció presumiblemente torturada. Su cuerpo presentaba numerosas huellas de golpes, múltiples hemorragias internas y una llaga ancha, abierta en la frente. No se ha efectuado ninguna investigación sobre el fallecimiento de Ogoulsapar Mouradova. Algunas informaciones, imposibles de verificar, hablan del traslado de sus dos colegas a la cárcel

de Odovan Depe, donde habría muerto Ogoulsapar Mouradova y donde están internados los presos políticos, cuyo número se estima en cerca de 4.000.

Los tres periodistas, que también eran militantes de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, habían colaborado en la realización de un documental titulado "Turkmenistán: bienvenidos a Niazovland", emitido el 28 de septiembre en Francia. Desde que les condenaron han perseguido a sus familiares, que han perdido sus empleos y están sometidos a vigilancia constante. El 16 de octubre, con ocasión del decimoquinto aniversario de la independencia de Turkmenistán, se concedió un indulto presidencial a más de diez mil presos. El indulto afectó a ocho de las cincuenta personas condenadas por "traición" después de que, el 25 de noviembre de 2002, se produjera un intento de asesinato del presidente. No se les aplicó ni a Annakourban Amanklytchev ni a Sapardourdy Khajiev, como tampoco a Sedar Rakhimov, Batyr Berdyev y Ovezmurad Yazmuradov, tres periodistas que se encuentran entre el medio centenar de presuntos conspiradores. Fueron condenados a veinticinco años de cárcel, y están encerrados desde noviembre de 2002. Se desconoce en qué lugar.

En el colmo de la ironía, el presidente inauguraba el 17 de octubre de 2006 la "Casa de la libre creatividad", en Achkhabad, El edificio de diez plantas, y en forma de libro abierto que "brilla en la noche", acoge a los periodistas oficiales. Con un valor de diecisiete millones de dólares, como tantas otras edificaciones de Turkmenistán fue construido por la empresa Bouygues.

TURQUÍA

Superficie : 774 820 km².

Población : 71 190 000.

Idioma : turco.

Jefe del Gobierno : Recep Tayyip Erdogan.

La libertad de prensa sigue viéndose obstaculizada por la aplicación del artículo 301 del código penal, frecuentemente utilizado con los periodistas, escritores e intelectuales que abordan temas sensibles, como el genocidio armenio o la cuestión kurda. Las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea han puesto el acento en la necesidad de que esas disposiciones evolucionen y el Primer Ministro, Recep Tayyip Erdogan, se ha mostrado públicamente dispuesto a abrir un diálogo sobre la cuestión.

Continúa produciendo efecto la entrada en vigor, el 1 de junio de 2005, del nuevo código penal, ya que numerosos periodistas y escritores han tenido que enfrentarse a actuaciones judiciales desde entonces, a causa de su artículo 301. Titulado "Humillación de la identidad turca, la República, y las instituciones u órganos del Estado", sanciona de seis meses a tres años de cárcel a "cualquiera que humille abiertamente al gobierno, los órganos de justicia del Estado y las estructuras militar o policial". En 2006 varios juicios dieron lugar a escenas de violencia, y entre ellos los de los novelistas Orhan Pamuk - Premio Nobel de Literatura 2006 - y Elif Shafak; el del periodista de origen armenio Hrant Dink y los de cinco cronistas de los grandes diarios *Milliyet* y *Radikal* (Erol Katircioglu, Murat Belge, Haluk Sahin, Hasan Cemal e Ismet Berkan), todos ellos absueltos en 2006.

La sociedad turca está dividida sobre este asunto. El informe de la Comisión Europea sobre la ampliación de la UE, hecho público el 8 de noviembre, subraya la necesidad de que Ankara progrese en la situación de la libertad de prensa. En conclusión, el informe establece que "el marco jurídico actual aún no garantiza la libertad de expresión, de manera conforme a las normas europeas. (...) El artículo 301, lo mismo que otras disposiciones del código penal turco que restringen la libertad de expresión, deben adecuarse a la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH)". La gran movilización que existe en torno a la cuestión de la adhesión de Turquía a Europa, y también la concesión del Premio Nobel de la Paz a un escritor perseguido por sus obras, llevaron al primer Ministro, Recep Tayyip Erdogan, a posicionarse públicamente a favor de enmendar el artículo. Varios periodistas perseguidos, a quienes se les ha aplicado, manifestaron que pensaban presentar

sus casos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre ellos estaba Hrant Dink, director de publicación del semanario armenio *Agos*, condenado el 7 de octubre de 2005 a seis meses de cárcel, con el cumplimiento de la condena en suspenso, por una serie de artículos titulados "La identidad armenia". De nuevo le denunciaron el 18 de julio de 2005, por sus manifestaciones sobre el genocidio armenio. El 14 de julio, el periodista concedió una entrevista a la agencia británica *Reuters*, en relación con su condena de seis meses de cárcel, con el cumplimiento aplazado, por "insultar a la identidad turca". En la entrevista utilizó el término de "genocidio" para referirse a la masacre de armenios, llevada a cabo por los turcos en 1915. Por ello, podían condenarle a otros tres años de cárcel.

También representan una amenaza para la libertad de expresión las enmiendas a la Ley antiterrorista, aprobadas el 29 de junio de 2006, en la medida en que sancionan con penas de cárcel la publicación de informaciones relacionadas con "organizaciones terroristas", y hacen temer que se emprendan actuaciones abusivas contra los periodistas que se atrevan a hablar del asunto. Rüstü Demirkaya, reportero de la agencia de prensa turca *Diha*, está encarcelado desde el 14 de junio de 2006, en la cárcel de Tunceli (Este). Se le acusa "de colaboración con el PKK/Kongra-Gel". Un antiguo militar le habría acusado de proporcionar al PKK un ordenador portátil con diez CD vírgenes, y de haberle informado de una operación militar en curso. A Rüstü Demirkaya podrían condenarle a doce años de cárcel.

Los días 5, 10 y 11 de mayo se produjeron tres atentados contra el diario de extrema izquierda *Cunhuriyet*, que afortunadamente no causaron ninguna víctima pero produjeron importantes daños.

TURQUÍA

Los periodistas de la redacción volvieron al trabajo inmediatamente. Por otra parte, el 30 de marzo de 2006 resultó gravemente herido por unos disparos en Diyarbakir (sudeste del país) Ilyas Aktas, periodista voluntario del bimensual turco de extrema izquierda *Devrimci Demokrasi* (Democracia Revolucionaria), en una manifestación de homenaje a catorce rebeldes kurdos, a los que el ejército turco mató pocos días antes. Falleció, a causa de las heridas, el 14 de abril.

Las fuerzas del orden también están cuestionadas por su pasividad en la agresión de una periodista del diario *Sabah*, durante una manifestación de protesta contra la publicación de las caricaturas de Mahoma en Europa, organizada en la ciudad de Konya (en el centro del país) el 10 de febrero de

2006. Atacada por un grupo de manifestantes, con la excusa de que no llevaba velo, iba en pantalones y mascaba chicle, la insultaron y le lanzaron piedras y zapatos. Las fuerzas del orden, que rodeaban la manifestación, no reaccionaron y a Aliye Cetinkaya tuvieron que evacuarla unos colegas presentes en el lugar.

Sin embargo, el año 2006 terminó con la buena noticia de la puesta en libertad de dos periodistas de la agencia pro kurda *Diha*, Evrim Dengiz y Nesrin Yazar, tras permanecer nueve meses detenidas por "atentado a la unidad del Estado y a la integridad del territorio". Las detuvieron cuando cubrían una manifestación a favor de Abdullah Ocalan, jefe del PKK encarcelado desde 1999.



Informe anual 2007

MAGHREB Y ORIENTE MEDIO

EL CEMENTERIO DE LAS LIBERTADES

Los profesionales de los medios de comunicación han seguido pagando el precio de la creciente inestabilidad que caracteriza a Oriente Medio, desde hace décadas. En Irak, a lo largo del año 2006 mataron a sesenta y cinco periodistas y colaboradores de los medios, elevando a 146 el número de profesionales de la información muertos desde el comienzo del conflicto, en marzo de 2003. En la inmensa mayoría de los casos (más del 90%) las víctimas eran de nacionalidad iraquí. Con la marcha de la mayor parte de los reporteros extranjeros, los corresponsales locales se han encontrado en primera línea, frente a las milicias religiosas o de clanes. Aunque, igual que ocurre para el conjunto de la población, la seguridad de los periodistas depende de la situación general en el país, su oficio facilita la identificación y aumenta los riesgos a que se exponen. En lo sucesivo, un gran número de periodistas que cubren la actualidad de Irak para las agencias internacionales de prensa van a trabajar en el anonimato. Se les convierte en blancos porque trabajan para órganos de prensa extranjeros y, por ello, se les ve como "espías". Otros periodistas pagan el precio de la filiación política de la redacción a qué pertenecen. Pero son los medios de comunicación públicos los que ostentan el triste record de periodistas muertos. La mayoría de los empleados del diario Al Sabah, y del canal televisivo Al-Iraqiya - que pertenecen a la red pública de medios iraquíes IMN- han recibido amenazas de muerte, y desde el comienzo del conflicto han matado a veinticuatro de ellos.

El año 2006 también estuvo marcado por el aumento de secuestros de periodistas. Una vez más, es en Irak donde su número es más elevado. En el país han secuestrado a diecisiete profesionales de los medios, siete de los cuales fueron ejecutados.

También en este año, Reporteros sin Fronteras tuvo conocimiento del secuestro de seis periodistas en los Territorios Palestinos. Utilizados como moneda de cambio, quedaron todos en libertad sanos y salvos, sin que se haya llevado ante la justicia a los secuestradores. Desde la llegada de Hamas al poder, en enero de 2006, los profesionales de los medios de comunicación tienen que enfrentarse a una nueva amenaza en los Territorios: son víctimas de los muy violentos enfrentamientos entre militantes del partido islamista y simpatizantes de Fatah, partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. Decenas de periodistas fueron así agredidos a lo largo del año, por su pertenencia a un medio afiliado a uno u otro de ambos movimientos políticos. Unas agresiones que se suman a los riesgos que corren los periodistas que cubren los enfrentamientos en los Territorios entre el ejército israelí y los militantes palestinos. En 2006 diecisiete profesionales de los medios resultaron alcanzados por disparos del Tsahal.

BAJO LA BOTA DE LOS DICTADORES

A pesar de sus repetidas promesas, los Estados de la región no han experimentado avances democráticos. Los periodistas están sometidos a los caprichos de monarcas y presidentes "vitalicios", que mantienen una capa de plomo sobre los medios de comunicación. En Arabia Saudí las autoridades ejercen un control sin resquicios sobre la información. A los periodistas más temerarios les despiden sin explicaciones. En Siria, desde la llegada de la dictadura baasista en 1963, los periodistas y los militantes políticos están sometidos a detenciones arbitrarias, y a procesos inicuos. La llegada al poder de Bachar el-Assad en 2000 no ha supuesto ninguna mejora. En Túnez, tras llevar veinte años al frente del Estado, el presidente Zine el-Abidine Ben Alí no ha aflojado su dominio de la prensa. A las voces independientes, sometidas a estrecha vigilancia, se les impide manifestarse por todos los medios. En Libia, Muamar El Gadafi continúa aterrorizando a los periodistas. Criticar al jefe del Estado constituye un crimen de lesa majestad, que puede llevar directamente a la cárcel.

En la mayor parte de los países de la región el control de los medios de comunicación pasa también por el mantenimiento de un código de prensa liberticida. Las reformas de los textos jurídicos que regulan el trabajo de los periodistas, prometidas a comienzos del 2000, no han ido seguidas de efectos. No se han derogado los artículos que incluyen penas privativas de libertad. Los periodistas tienen un margen de maniobra muy débil, y la autocensura sigue existiendo. En Egipto, los profesionales de los medios se desencantaron rápidamente frente a las restricciones suplementarias, introducidas por las nuevas enmiendas del código de prensa, aprobadas en julio de 2006. En Kuwait, la despenalización de los delitos de prensa, aprobada a lo largo del año, continúa teniendo un alcance limitado ya que el nuevo código establece numerosas excepciones, tales como los atentados a la ley islámica, a Dios, al profeta y a sus compañeros, y todas ellas pueden castigarse con penas privativas de libertad.

EL PESO DE LAS RELIGIONES

El tratamiento de las cuestiones religiosas sigue siendo muy delicado. Los periodistas que se hicieron con el dossier de las caricaturas del profeta Mahoma, publicado en septiembre de 2006 en el diario danés Jyllands-Posten, tuvieron que enfrentarse a consecuencias que estaban muy lejos de imaginar.

Las autoridades cedieron a las presiones de los islamistas. Por reproducir los controvertidos dibujos, en parte o en su totalidad, en la mayoría de los casos por comentar el viento de cólera que soplabá en el mundo musulmán, varios periodistas se encontraron entre rejas en Jordania, Yemen o Argelia. En lugar de calmar a las multitudes que se encarnizaban con las representaciones diplomáticas de Dinamarca en la región, los regímenes árabes optaron por censurar a la prensa, para ganar puntos con los islamistas. Realmente ese caso constituyó un precedente en la región, donde "atentar contra el Islam" se ha convertido en uno de los principales motivos para llevar ante la justicia a los profesionales de la información. En Irán detuvieron a siete periodistas, tras la publicación de un artículo satírico sobre el ayatolá Jomeini, mientras que en Marruecos llevaron ante la justicia a otros dos, por publicar unas bromas mofándose de la religión.

Hajar Smouni

Responsable del despacho Maghreb y Oriente Medio

ARGELIA

Superficie : 2 381 741 km².

Población : 32 854 000.

Idioma : árabe.

Jefe del Estado : Abdelaziz Buteflika.

En 2006, las autoridades jugaron con dos barajas con los medios de comunicación argelinos. La amnistía, decretada por el Jefe del Estado, para los periodistas condenados por delitos de prensa y la liberación, a principios del año, de varios periodistas encarcelados, no estuvieron acompañadas por la muy esperada reforma del código de prensa.

Ciertamente, la decisión del presidente Abdelaziz Buteflika, del 5 de julio de 2006, de indultar a los profesionales de la información condenados por "difamación" y "desacato a instituciones y cuerpos constituidos", supuso que muchos periodistas quedarían libres del suplicio judicial a que estaban sometidos, pero no puso fin a la represión de la prensa argelina. En 2006 los medios de comunicación no se vieron libres de procedimientos judiciales, y el temor de ver como cerraban otro diario, como ocurrió dos años antes con el diario *Le Matin*, está presente en la mente de muchos directores de publicaciones. Durante el año detuvieron al menos a cinco periodistas.

Mientras que el código de prensa sigue estableciendo penas de cárcel - especialmente para cualquier "cuestionamiento del Presidente de la República en términos injuriosos, insultantes o difamatorios" -, otra ordenanza, aprobada en febrero de 2006 y referida a la puesta en marcha de la Carta para la paz y la reconciliación nacional, resulta igual de peligrosa para los profesionales de los medios de comunicación. Ese texto, que podría prestarse a múltiples interpretaciones, establece penas de cinco años de cárcel, y multas, para cualquier persona que "en sus declaraciones, escritos o cualquier otra actuación, utilice o instrumente las heridas de la tragedia nacional para atentar contra las instituciones de la República Argelina Democrática y Popular, perjudicar la honorabilidad de los agentes que la han servido dignamente o empañar la imagen de Argelia en el plano internacional".

UNA INSTRUMENTACIÓN DE LA JUSTICIA

Los procesos abiertos en este año son particularmente representativos de la instrumentalización que hacen las autoridades argelinas de la justicia. Las sanciones que ya han caído en primera instancia marcan el comienzo de un nuevo folletín polí-

tico-judicial, cuyo resultado parece haberse juzgado de antemano. Varios periodistas confiaron a Reporteros sin Fronteras que no habían recibido la convocatoria de su propio juicio. Así fue como el tribunal de Hussein-Dey, en los suburbios de Argel, condenó el 31 de octubre a Ali Fadil, director del diario *Ech-Chourouk*, y a la periodista Naila Berrabal, a seis meses de prisión incondicional y multa de 20.000 dinares (el equivalente a 220 euros), como resultado de la denuncia por difamación interpuesta por el presidente libio Muamar El Gadafi. El tribunal dictó también la suspensión del periódico durante dos meses, y le condenó a pagar 500.000 dinares (5.500 euros) al jefe del Estado, en concepto de daños y perjuicios. En otro caso, el tribunal de Jijel, a 360 km. al este de la capital, condenó "en rebeldía por "difamación", el 25 de diciembre, a Omar Belholuchet, director de publicación del diario *El Watan*, y al cronista Chawki Amari, a tres meses de prisión incondicional, por la publicación en el mes de junio de un artículo en el que se denunciaban las malversaciones de un alto funcionario.

Por otra parte, algunos periodistas descubrieron en 2006 la existencia de denuncias o condenas judiciales, de las que no tenían la menor idea. Es el caso entre otros de Arezki Ait-Larbi, corresponsal de los periódicos franceses *Le Figaro* y *Ouest-France* en Argelia quien, después de que se negaran a renovar el pasaporte, se enteró de la existencia de una condena de seis meses de cárcel, que remonta a 1997. Era consecuencia de la denuncia presentada en su día por un antiguo director del departamento de aplicación de penas, dependiente del Ministerio de Justicia, cuya pasividad ante las servicias sufridas por los presos de la penitenciaría de Lambèse había denunciado Ait-Larbi en un artículo.

Mohammed Benchicou, director de publicación de *Le Matin*, cumplió la totalidad de su pena de dos años de cárcel, a la que le condenaron el 14 de

ARGELIA

junio de 2004 por "infracción de la legislación de movimientos de capitales". Le detuvieron en el aeropuerto de Argel en posesión de un recibo bancario (bono de caja) por una gran cantidad de dinero, extendido en dinares. En febrero de 2004, en el momento álgido de la campaña presidencial, publicó un panfleto titulado "Buteflika, una impostura argelina". El mismo año, después de una investigación fiscal sacaron a subasta la sede de su periódico, y el diario se vio obligado a dejar de publicarse por las presiones de una imprenta estatal, que le reclamaba el pago de sus deudas.

Finalmente, Argelia no quedó al margen de la fiebre que se desencadenó en el mundo árabe por el

asunto de las caricaturas danesas del profeta Mahoma. En febrero, Kamal Bousaâd y Berkane Bouderbala, directores de los semanarios en lengua árabe *Errissala* y *Essafir*, estuvieron un mes encarcelados por reproducir los controvertidos dibujos. El Ministerio de Comunicación presentó una denuncia basándose en el artículo 144 bis, apartado 2, del código penal, que establece de tres a cinco años de cárcel para "cualquier persona que ofenda al Profeta y a los enviados de Dios o denigre el dogma, o los preceptos del Islam". El asunto continúa en curso. En el mismo caso, el director general destituyó de sus cargos a los directores de los canales públicos *Canal Algérie* y *A3*.

AUTORIDAD PALESTINA

Superficie : 6 207 km².

Población : 3 889 000.

Idioma : árabe.

Jefe del Estado : Mahmud Abbas.

Desde la llegada de Hamas al poder, en enero de 2006, los profesionales de la información tienen que enfrentarse a una doble amenaza en los Territorios Palestinos. Por una parte sufren los disparos israelíes pero, más recientemente, también se han convertido en víctimas de los violentos enfrentamientos entre los simpatizantes del partido islámico y los miembros de Fatah, de donde procede el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

Mientras que, en agosto de 2005, la retirada del ejército israelí de la franja de Gaza hacía esperar una mejora en las condiciones de seguridad de los profesionales de los medios de comunicación en los Territorios, las divisiones internas entre Hamas y Fatah han propiciado un nuevo espiral de violencia. Y fue así como al corresponsal del diario francés *Libération*, Didier François, le hirieron de un disparo el 17 de diciembre de 2006 en la ciudad de Gaza, centro de esa lucha fratricida.

Catalogados como pro-Hamas o pro-Fatah, decenas de periodistas palestinos han sufrido agresiones. Por ejemplo, algunos reporteros de los medios de comunicación públicos, a quienes atacaron cuando cubrían acontecimientos organizados por Hamas. En septiembre de 2006 saquearon los locales de la agencia pública de prensa *WAFA*, y destruyeron sus equipos. Este medio de comunicación ha sido un blanco en varias ocasiones, ya que algunos responsables de facciones y el Primer Ministro Ismael Haniyeh, procedente de Hamas, le acusan de repetir la propaganda de Fatah. Igualmente, en el mes de junio sufrieron un espectacular ataque los locales de la *Palestine Broadcasting Corporation (PBC)*, televisión y radio públicas) en Khan Yunes, al sur de la franja de Gaza. Cerca de un centenar de miembros armados de las brigadas de Ezzedine Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, invadieron el centro de transmisiones de la televisión, dispararon sobre el material y agredieron a algunos empleados del

canal. También sufrieron exacciones algunos órganos de prensa, afiliados a facciones menos importantes, como ocurrió con la radio *Sawt al Chaâb*, del Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), cuyos locales fueron destruidos el 1 de noviembre. Rompieron el único emisor de la radio.

Tampoco los periodistas extranjeros quedaron al margen de este aumento de la violencia en los Territorios. Desde el 1 de enero de 2006 han secuestrado a seis de ellos, sin contar el intento fallido contra dos reporteros belgas, en Khan Yunes. Todos han quedado en libertad, sanos y salvos, tras permanecer cautivos unas horas, o incluso unos días. Sin embargo, a dos periodistas norteamericanos de *Fox News*, Steve Centanni y Olaf Wiig, secuestrados el 14 de agosto en Gaza, les pusieron en libertad dos semanas más tarde. Su secuestro lo reivindicó un grupo hasta entonces desconocido que pedía la libertad, en el plazo de tres días, de todos los musulmanes detenidos por Estados Unidos. Sin embargo, todo parece indicar que estos secuestros no tienen ninguna motivación política. La falta de investigaciones de la Autoridad Palestina no permite determinar las circunstancias exactas de los secuestros pero Reporteros sin Fronteras ha recogido información que indica que, mayoritariamente, son obra de individuos o grupos aislados, que intentan hacer que se hable de ellos o, a veces, conseguir un empleo.

EGIPTO



Superficie : 1 001 450 km².

Población : 74 033 000.

Idioma : árabe.

Jefe del Estado : Mohammed Hosni Mubarak.

Esperada durante mucho tiempo, la reforma del código de prensa, puesta en marcha en 2006 por el presidente Hosni Mubarak, ha demostrado que solo era pura propaganda. Los periodistas egipcios se sintieron enseguida decepcionados, a causa de las numerosas restricciones a su actividad que introducen las nuevas enmiendas. A lo largo del año detuvieron al menos a siete periodistas, mientras que varias decenas más se vieron desde amenazados hasta agredidos.

La reforma del código de prensa mantuvo en vilo a los profesionales de los medios de comunicación durante todo el año 2006. Pero al final, el presidente Hosni Mubarak no tuvo en cuenta las propuestas del Sindicato Egipcio de Periodistas, que entre otras cosas proponían la despenalización de todos los delitos de prensa. El 28 de junio de 2006, el Presidente presentó nuevas enmiendas en las dos cámaras del Parlamento. Inmediatamente muchos medios de comunicación privados alzaron su voz en contra del nuevo texto, organizando sentadas y huelgas. El 10 de julio, La Asamblea del Pueblo terminó con la cuestión votando a favor del proyecto del Presidente, que incluye 35 delitos de prensa que pueden castigarse con penas de cárcel. Solo se despenalizó el delito de difamación a funcionarios pero, en contrapartida, se duplicaron las multas. Por tanto, a los periodistas egipcios ahora les pueden condenar a hasta cinco años de cárcel por "publicar informaciones falsas", "difamar" al Presidente o los jefes de Estado extranjeros, y también por cualquier "atentado a las instituciones nacionales", tales como el Parlamento o el ejército.

Varios equipos de televisión se vieron acosados, amenazados o incluso golpeados por las fuerzas del orden. El 10 de mayo, una quincena de periodistas locales y extranjeros fueron agredidos por unos policías antidisturbios, desplegados para bloquear el acceso de manifestantes, y de la prensa, al tribunal donde se celebraba el proceso de dos jueces reformistas. El 3 de diciembre, a un equipo del canal privado de televisión por satélite *Dream TV* le prohibieron cubrir una manifestación de protesta contra el aumento del precio de la recogida de basura en El Cairo. Les quitaron las cintas de vídeo de su cámara. Pocos días después, fue un equipo de *Al-Jazira* el que bloquearon los policías, cuando cubría una sentada de miles de estudiantes, en el

campus universitario de Al-Azhar, en protesta por el cese del presidente el sindicato de estudiantes, y de dos de sus ayudantes.

Las autoridades egipcias dieron muestras de una particular rigidez con unos periodistas del canal qatari. El 27 de abril de 2006 fue detenido Hussein Abdel Ghani, director de la oficina de *Al-Jazira* en El Cairo, cuando realizaba un reportaje sobre una serie de explosiones en el sur del Sinaí. Acusado de difundir "informaciones erróneas destinadas a perjudicar la reputación del país", fue el único periodista al que llevaron ante la fiscalía de la Seguridad del Estado, cuando esa misma información la habían dado muchos órganos de prensa egipcios y extranjeros. A Hussein Abdel Ghani le dejaron en libertad después de que pagara un fuerte rescate. A pesar de ello, el 1 de enero de 2007 seguía teniendo prohibido salir del territorio. Las autoridades egipcias presionan también a los periodistas del país que trabajan para medios de comunicación extranjeros. Por ejemplo, el 9 de septiembre, unos agentes de los servicios de seguridad del Estado acudieron al domicilio de Summer Said, de la agencia británica *Reuters*, y amenazaron abiertamente a su familia.

Finalmente, las autoridades egipcias han demostrado un cierto autoritarismo en materia de control de Internet. En 2006 encarcelaron al menos a siete ciberdisidentes. En junio, un tribunal administrativo del Consejo de Estado validó la decisión del Ministerio de Información y Comunicación que permite que las autoridades puedan bloquear, suspender o cerrar cualquier sitio de Internet que pueda representar una amenaza para la "seguridad nacional". Por otra parte, Kareem Amer está encarcelado desde el 6 de noviembre, por publicar en su blog artículos críticos con el Islam.

IRAK

Superficie : 438 320 km².

Población : 28 807 000.

Idiomas : árabe, kurdo.

Jefe del Estado : Jalal Talabani.



Con más de sesenta profesionales de la información muertos y cerca de otros veinte secuestrados, el año 2006 ha sido el más mortífero desde el comienzo del conflicto, en marzo de 2003. Por otra parte, las autoridades iraquíes han impuesto un determinado número de restricciones a la prensa, que podrían hacer peligrar el pluralismo informativo.

Impotentes ante el caos ambiental, las autoridades iraquíes no han sido capaces de garantizar la seguridad de los periodistas, tanto locales como extranjeros. En 2006, en el país asesinaron a 65 periodistas y colaboradores de los medios de comunicación. En esta lista solo figuran dos extranjeros: Paul Douglas, del canal norteamericano *CBS*, y su técnico de sonido, James Brolan. Todos los demás eran iraquíes. Los periodistas locales que viven entre la población no disponen de medidas particulares de protección, y constituyen objetivos escogidos. Cada vez son más los que se dirigen a las embajadas occidentales en Bagdad, o en los países vecinos, para presentar peticiones de asilo político. Su colaboración con medios de comunicación extranjeros, sobre todo anglosajones, les exponen a los grupos armados, que les considera espías.

INTENSIFICACIÓN DE LOS ATAQUES DIRIGIDOS

En la mayoría de los casos, los periodistas muertos en Irak sufrieron ataques dirigidos en su contra. No están protegidos en ninguna parte. A lo largo del año 2006 les mataron al volante de su automóvil, delante de su domicilio y también en los locales del medio para el que trabajaban. El 7 de mayo, por ejemplo, un coche bomba explotó en el garaje del edificio del periódico iraquí *Al-Sabah* en Bagdad, matando a un técnico del servicio de impresión e hiriendo a más de veinte periodistas. A un camarógrafo de la televisión iraquí *Al Charkiya* le mataron el 13 de noviembre delante de su domicilio en Mosul (a unos 400 km. de Bagdad), unos hombres armados que iban en un coche.

Los profesionales de los medios de comunicación tampoco han quedado al margen de las tensiones confesionales que encolerizan al país. Forman parte de los principales objetivos políticos a abatir por los grupos armados; se les ataca por pertenecer a un medio de comunicación afiliado a una for-

mación política, chiíta o sunnita. El 12 de octubre, en un ataque, mataron a once empleados del nuevo canal de televisión *Al Chaabiya*. Por la mañana temprano, cuatro coches se estacionaron delante de la entrada de los locales del canal. Unos hombres encapuchados y armados mataron a los guardias de seguridad y después entraron en el edificio, buscando a todos los periodistas que se encontraban en él. Los agresores huyeron sin que nadie les molestara, tras permanecer más de veinte minutos en el edificio.

EL MERCADO DE REHENES

El "comercio" de rehenes aumentó en 2006 con el secuestro de 20 profesionales de la información (en 2005 secuestraron a 14), de los que fueron ejecutados siete de ellos. El 7 de enero, la periodista freelance norteamericana Jill Carroll fue secuestrada por unos hombres armados en el barrio de Adel, en Bagdad, cuando iba a entrevistarse con un dirigente político sunnita. El cuerpo de su intérprete, Allan Enwiyah, asesinado a balazos, apareció en el lugar del secuestro. La periodista quedó en libertad el 30 de marzo, tras permanecer detenida tres meses. Durante su cautiverio, secuestraron también a dos periodistas iraníes. El 1 de febrero, Rim Zeid, y su colega Marouane Khazaal, de *Al-Sumariya TV*, salían de una conferencia de prensa en la sede del Partido Islámico Iraquí en el barrio de Yarmouk, de la capital iraquí, cuando se vieron interceptados por cuatro hombres armados que, con amenazas, se los llevaron a un destino desconocido. A fecha 1 de enero de 2007 continuábamos sin noticias de estos dos periodistas.

OBSTACULIZADO EL TRABAJO DE LOS PERIODISTAS IRAQUÍES

En 2006, los periodistas iraquíes también tuvieron que enfrentarse a las restricciones y prohibiciones,

IRAK



impuestas por las autoridades. El gobierno del Primer Ministro Nuri al-Maliki amenazó repetidamente con cerrar los medios de comunicación que "incitan a la violencia". Los canales de televisión acusados "de inflamar las pasiones religiosas y comunitarias" ya no tienen autorización para mostrar "imágenes de sangre y asesinatos" que, según las autoridades, "aumentan el horror de la violencia". Así, el Ministerio del Interior ordenó el 5 de noviembre el cierre de los canales sunnitas de televisión *Al-Zaoura* y *Salah-Eddine*, por emitir imágenes de manifestantes que exhibían retratos del ex presidente iraquí, y protestaban por su condena a muerte. El 1 de enero de 2007 todavía no les habían autorizado a volver a emitir. Y el canal qatari *Al-Jazira* todavía no tiene autorización para abrir una oficina en Bagdad.

Por otra parte, en noviembre las autoridades prohibieron momentáneamente el acceso al Parlamento, y al Centro Internacional de Prensa que se encuentra allí, situados en la zona verde de la capital. La retransmisión en directo de los debates quedó interrumpida tras un agitado debate sobre la violencia confesional en el país.

El Ministerio de Interior creó una unidad de vigilancia, habilitada para emprender acciones legales contra los medios de comunicación que difundan "informaciones falaces". La unidad está encargada de contactar a los periodistas y sus medios, para

pedirles que publiquen o emitan desmentidos en relación con las informaciones consideradas falsas. En caso de negarse, a los periodistas se les podría encausar judicialmente. Esta nueva censura que estigmatiza a los medios de comunicación se aplica también a los canales árabes por satélite, cuya cobertura de la situación iraquí está estrechamente vigilada. La oficina de Bagdad de la televisión saudita *Al-Arabiya* estuvo cerrada durante un mes, por "incitación al confesionalismo".

Por otra parte, en 2006 las fuerzas de seguridad iraquíes detuvieron al menos a 30 periodistas. A fecha 1 de enero de 2007 cuatro continuaban detenidos, sin que se hubiera presentado ningún cargo contra ellos. Ahmad Alí Hamas Al-Obaidi, periodista de la radio Dar Al Salam, afiliada a un partido islamista, fue detenido el 5 de agosto en su domicilio de Bagdad.

Por su parte, el ejército norteamericano procedió a la detención de ocho periodistas y colaboradores de medios de comunicación. Cuatro de ellos continuaban detenidos, sin motivos, el 1 de enero de 2007. A Bilal Hussein, corresponsal de la agencia norteamericana *Associated Press* en Bagdad, le tienen detenido las fuerzas norteamericanas desde el 12 de abril de 2006. Para esto es sospechoso haber mantenido relaciones con los insurgentes, pero no se ha presentado ningún cargo contra él.

IRÁN

Superficie : 1 648 200 km².

Población : 69 515 000.

Idioma : persa.

Presidente de la República: Mahmud Ahmadinejad.



Durante el año 2006 detuvieron a decenas de periodistas por criticar a las autoridades. A algunos los mantuvieron detenidos en secreto, en condiciones muy difíciles, sin poder acceder a un abogado. Aunque se ha reducido el número de periodistas encarcelados, varios de ellos están inmersos en procedimientos judiciales que no acaban nunca, y sufren amenazas diarias en el ejercicio de su trabajo.

Desde su llegada al poder en agosto de 2005, el ultraconservador presidente Mahmud Ahmadinejad y su equipo, compuesto fundamentalmente por antiguos mandos de los Guardianes de la Revolución y de los servicios de inteligencia, han ejercido una temible represión sobre los profesionales de la información. En 2006 detuvieron a 38 periodistas y censuraron una decena de medios de comunicación. En mayo detuvieron a dos en el norte de país, como consecuencia de la publicación de una caricatura, que mostraba a un monje hablando en azerí. Poco después detuvieron a otros cuatro, por referirse en sus artículos a la rabia de la minoría azerí del país.

Reporteros sin Fronteras ha tenido conocimiento también de muchos casos de periodistas detenidos en secreto, con menosprecio de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, Shirko Jahani, colaborador de la agencia de prensa turca *Euphrate* en Mahabad (Noroeste de Irán), recibió una citación para el 27 de noviembre en la fiscalía de la ciudad, donde inmediatamente le detuvieron por orden del fiscal. Le acusaron de haber concedido entrevistas a medios de comunicación extranjeros, para hablar de la situación de los derechos humanos en Kurdistán. Emprendió una huelga de hambre, en protesta por su arbitraria detención, y se negó a pagar la fianza fijada en cinco millones de tomanes (alrededor de 5.500 euros). La familia estuvo una semana sin noticias de él. El 1 de enero de 2007, Shirko Jahani continuaba en la cárcel de Mahabad. A lo largo del año, varios medios de comunicación fueron blanco de distintos ataques. En febrero, organizaciones gubernamentales y escuelas coránicas saquearon e incendiaron los locales del semanario *Tamadone Hormozgan* en Bandar Abbas, en el sur del país, después de que acusaran a siete periodistas de la redacción de "insultos al ayatolá Jomeini". Igualmente, el 13 de octubre, los mollahs de la ciudad de Boucheir (Sur) organizaron mani-

festaciones delante de la sede del semanario *Safir Deshtestan*, que había publicado un artículo satírico sobre el Guía Supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei.

Para muchos medios de comunicación la autocensura sigue siendo la mejor manera de sobrevivir. Los dignatarios del régimen, los tabúes sociales, los derechos de la mujer o también las reivindicaciones identitarias regionales, delimitan las líneas rojas que no se pueden franquear. En parte, esa autocensura explica la reducción del número de periodistas condenados a penas de cárcel. Aunque a menudo consiguen la libertad provisional, no pueden trabajar libremente porque en cualquier momento, si de nuevo publican un artículo que disguste al poder, podrían volver a la cárcel. En 2006, Reporteros sin Fronteras tuvo conocimiento de al menos 54 periodistas afectados por una prohibición profesional. Esas presiones judiciales empujaron a algunos de ellos al exilio.

Por otra parte, en 2006 las autoridades iraníes pusieron en marcha otro proyecto de ley, dirigido a hacer obligatorio el registro de los profesionales de los medios de comunicación en el Ministerio de Cultura y de la Guía Islámica

UNA PERIODISTA ASESINADA EN CIRCUNSTANCIAS DUDOSAS

A la periodista turca de origen kurdo Ayfer Serçe, de la agencia *Euphrate*, la mató el ejército iraní en Keleres, en la provincia de Azerbadjan (noroeste de Irán), entre el 20 y el 23 de julio. Las primeras informaciones indicaban que la periodista había muerto en una operación del ejército contra los rebeldes kurdos. Pero los testimonios recogidos posteriormente por Reporteros sin Fronteras revelan que en realidad la mataron cuando se dirigía a la frontera, una vez que había finalizado su

IRÁN



reportaje. Ayfer Serçe había acudido a principios del mes a la región, para investigar una serie de suicidios de mujeres kurdas. Las autoridades iraníes se negaron tanto a dar explicaciones sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la periodista, como a entregar el cuerpo a su familia.

Por otra parte, a tres años del asesinato de la periodista irano-canadiense Zahra Kazemi, detenida cuando fotografiaba a algunas familias de detenidos ante la cárcel de Evine (al norte de Teherán), todavía no se ha identificado a los asesinos.

AKBAR GANJI EN LIBERTAD TRAS SEIS AÑOS DE CÁRCEL

Tras pasar seis años en la cárcel, el periodista Akbar Ganji salió en libertad el 18 de marzo de 2006. Redactor jefe del semanario *Rah-é-No* y colaborador de varios diarios reformistas, le habían condenado por "atentado a la seguridad del Estado", "insultos al fundador de la República Islámica y a los sagrados valores del régimen" y "propaganda contra la República Islámica". También le denunciaron por sus revelaciones sobre los asesinatos de intelectuales y opositores, que tuvieron lugar a finales de 1998, y por sus acusaciones de altos responsables políticos, tales como Alí Fallahian o Hashemi Rafsandjani. Akbar Ganji estuvo internado en una celda aislada y, en 2005, llevó a cabo una huelga de hambre, durante más de sesenta días, para pedir su libertad. A la

salida de la cárcel el periodista participó en una rueda de prensa en la sede de Reporteros sin Fronteras, en París, durante la cual recordó que la cuestión de los derechos humanos debería estar presente en todas las fases del diálogo entre Irán y el resto del mundo, y advirtió contra una cierta complacencia que parece darse frente a los retos económicos, y que podrían hacer olvidar ese debate.

FILTROS CADA VEZ MÁS POTENTES

La represión contra los bloggers parece que disminuyó en 2005. Mientras que en 2006 encarcelaron a una veintena de ellos, ahora solo sigue entre rejas Arash Sigarchi. Por el contrario, el filtrado de la Red se ha intensificado e Irán presume hoy de filtrar 10 millones de sitios "inmorales". Se centra particularmente en los sitios pornográficos, políticos o que tratan de religión. Pero, desde el verano de 2006, parece que los censores han concentrado sus esfuerzos en las publicaciones que tratan sobre los derechos de las mujeres. Por otra parte, las autoridades decidieron recientemente prohibir las conexiones de alta velocidad. Una medida que puede explicarse por el temor a sobrecargar la red iraní, que es de muy mala calidad; pero también se puede interpretar como una voluntad de bloquear los productos culturales occidentales -películas y canciones- que pueden descargarse en el Net.

ISRAEL

Superficie : 21 060 km².

Población : 6 725 000.

Idiomas : hebreo, árabe.

Jefe del Gobierno : Ehud Olmert.

Los periodistas israelíes disfrutaban de una libertad de tono sin comparación en la región. Y, aunque el año 2006 ha sido uno de los menos peligrosos para los periodistas desde el comienzo de la segunda Intifada, son muchos los problemas que persisten.

Con diecisiete profesionales de los medios de comunicación heridos y ningún muerto que lamentar, en 2006 se redujo el número de periodistas que fueron víctimas de disparos israelíes en los Territorios Palestinos. Sin embargo, Reporteros sin Fronteras viajó en diciembre a Israel, con el fin de denunciar la falta de transparencia en las investigaciones efectuadas por el ejército israelí. La oficina del portavoz de las fuerzas de defensa israelíes aseguró haber dirigido las investigaciones en la mayoría de los casos. Pero según él, las pruebas recogidas se han demostrado hasta el momento "insuficientes para que se produzcan inculpaciones".

Varios periodistas resultaron heridos cuando cubrían la actualidad en los Territorios Palestinos, o la guerra en Líbano. El 7 de julio, Hamid Al Khur, fotógrafo de la agencia turca *Ihlas*, resultó alcanzado por tres disparos israelíes cuando grababa los enfrentamientos entre militantes palestinos y tropas israelíes en Beit Lahiya, al norte de la franja de Gaza. Pocos días más tarde, una veintena de profesionales de los medios de comunicación que cubrían una incursión israelí en la franja de Gaza se encontraron pillados por los disparos. Ibrahim Atla, camarógrafo del canal público de la televisión palestina, llevaba un chaleco en el que estaba escrito "Medios". Resultó alcanzado por varios fragmentos de un obús, que le perforaron la caja

torácica. También resultó herido su ayudante, así como un periodista de nacionalidad japonesa. Resultó dañado un vehículo de la agencia de prensa *Reuters*.

Por otra parte, los periodistas palestinos tienen que enfrentarse a muchas restricciones impuestas por las autoridades israelíes, que ante todo les consideran ciudadanos palestinos. Por razones de seguridad se les ha prohibido desplazarse entre la franja de Gaza y Cisjordania. En 2006, las fuerzas israelíes no dudaron en invadir locales de los medios de comunicación o domicilios de periodistas en los Territorios, en búsqueda de armas o de "material ilegal".

Finalmente, en varias ocasiones se impidió a algunos periodistas de *Al-Jazira* cubrir la guerra en Líbano, durante el verano de 2006. A Walid Al-Omari, jefe de la oficina del canal en Jerusalén, le detuvieron dos veces los días 17 y 18 de julio, cuando realizaba un reportaje en el norte del país. A los miembros de otro equipo de *Al-Jazira* les amenazaron en directo. Cuando cubrían una incursión del Tsahal en Naplusa, un vehículo del ejército se acercó a la periodista Jevara Al-Boudeiri. Efectuaron algunos disparos. El técnico del equipo, Wael Tantous, fue alcanzado en un pie por balas de goma.

LÍBANO

Superficie : 10 400 km².

Población : 3 577 000.

Idiomas: árabe, francés.

Jefe del Gobierno : Fouad Siniora.

La operación militar israelí, iniciada el 12 de julio de 2006 en Líbano contra Hezbollah, causó numerosas víctimas entre la población civil. Mataron a una periodista y a un empleado de un canal de televisión, mientras que otros diez resultaron heridos. Por otra parte no se ha producido ningún avance significativo en lo que respecta a las investigaciones sobre los asesinatos de dos periodistas, ocurridos en 2005.

En los enfrentamientos entre el ejército y los militantes de Hezbollah, las autoridades israelíes bombardearon instalaciones de los medios de comunicación libaneses. Según un oficial israelí, que se entrevistó con Reporteros sin Fronteras en el transcurso de una visita a Jerusalén en diciembre de 2006, los medios "afiliados a organizaciones terroristas" no disfrutaban de los mismos derechos que el resto de la profesión. Siempre según ese responsable israelí, algunos empleados de esos medios participan en actividades terroristas, de la misma manera que un ingeniero pone a punto los misiles.

El 22 de julio la aviación israelí destruyó una antena de telecomunicación en Fatka, al este de Beirut, interrumpiendo momentáneamente la programación del canal privado de televisión *Lebanese Broadcasting Corporation (LBC)*. En el ataque mataron a Sleimane Chidiac, técnico del canal, y otros dos trabajadores resultaron heridos. El mismo día, la aviación israelí bombardeó una instalación en Trébol (Norte), poniendo fin a las emisiones de *LBC* en varias regiones, así como a las de los canales privados de televisión *Future TV* y *Al-Manar*. Al día siguiente, Layal Nagib, fotógrafa de prensa de 23 años, resultó muerto en la explosión de un misil cerca de su vehículo, en Cana. La periodista cubría los ataques israelíes en el sur del país para varias agencias internacionales de prensa.

Los medios de comunicación libaneses disfrutaban de una libertad sin parangón en el mundo árabe, pero no están al amparo de las artimañas político-judiciales. Mientras patina la investigación sobre el asesinato del ex Primer Ministro Rafiq Hariri, a dos periodistas del canal por satélite *New TV* les detuvieron, el 19 de diciembre de 2006, por entrar en el apartamento de un testigo del caso. Firas Hatoum, Abdel-Azil Khayat y su chofer fueron

inculcados por "robo". Al estar acusados por el código penal, y no por el código de prensa, no se les han podido aplicar los derechos que generalmente se conceden a los profesionales de los medios de comunicación, y entre ellos la comparecencia en libertad. A fecha 1 de enero de 2007 los tres continuaban internados en la cárcel de Roumié (al noreste de Beirut), en espera del juicio.

El 15 de junio de 2006, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó a la Comisión de Investigación del asesinato de Rafiq Hariri para que "continuara su asistencia técnica a las autoridades libanesas en sus investigaciones sobre los atentados terroristas cometidos en Líbano desde el 1 de octubre de 2004", rechazando así la petición de Reporteros sin Fronteras para que el mandato se ampliara a estos otros crímenes.

A lo largo del año 2006 no se produjo ningún avance significativo en las investigaciones locales de los atentados ocurridos el año anterior, que tuvieron como objetivos a profesionales de la información. Hubo que esperar hasta el 17 de junio para que se nombrara finalmente un juez de instrucción para la investigación del asesinato de Gebrane Tuéni, Presidente Director General del diario en lengua árabe *An-Nahar*; es decir, seis meses después de los hechos. Por otra parte, el juez francés antiterrorista Jean Louis Bruguière acudió, por primera vez, a Beirut el 4 de julio, para investigar la muerte del periodista franco-libanés Samir Kassir, muerto en un atentado el 2 de junio de 2005. Finalmente, May Chidiac, presentadora del canal de televisión *LBC*, gravemente mutilada el 25 de septiembre de 2005, reanudó su programa el 25 de julio de 2006, sin que todavía no se haya llevado ante la justicia a los instigadores del atentado, que le costó un brazo y una pierna.

LIBIA

Superficie : 1 759 540 km².

Población : 5 853 000.

Idioma : árabe.

Jefe del Estado : Muamar El Gadafi.



A pesar de la reciente profesión de fe democrática de Muamar El Gadafi, el Estado libio sigue controlando estrictamente la información. Los periodistas locales tienen muy poco margen de maniobra, y la autocensura está generalizada.

Invitada por el Sindicato de Periodistas, una delegación de Reporteros sin Fronteras viajó a Libia por primera vez desde la creación de la organización, en septiembre de 2006. Aunque el viaje, en sí mismo, atestigua el "relajamiento" de Trípoli, la verdad es que la situación de la prensa local ha evolucionado poco. Los medios de comunicación, que siguen estando controlados por el poder, continúan siendo auténticas máquinas de propaganda y difunden principalmente informaciones positivas sobre las actividades del "hermano líder" Muamar El Gadafi. En el país no existe ningún órgano de prensa independiente. Tres de los cuatro principales diarios (*Al Jamahiriya*, *Al Shams* y *Al Fajr al Jadid*) están financiados por la Oficina General de Prensa, un organismo que depende directamente del Ministerio de Información. En cuanto al cuarto, *Al Zahf al-Akhdar*, pertenece al Movimiento de los Comités Revolucionarios, columna vertebral del régimen. Escapan a ese control las televisiones por satélite, que han desviado a la población de los canales estatales.

Pocos periodistas se arriesgan a franquear las líneas rojas trazadas por el poder. Criticar al jefe del Estado es un crimen de lesa majestad que puede llevar directamente a la cárcel, dado que impera el culto a la personalidad. Como mucho, la prensa local trata casos de "pequeña corrupción", que nunca afectan ni a los altos responsables del Estado ni al estatuto de los bereberes, y mucho menos al Guía y su familia. La ley de prensa es particularmente represiva, y establece penas de cárcel que pueden llegar hasta dos años.

Aunque a Internet se puede acceder libremente en Libia, está sin embargo estrechamente vigilado. El periodista Daif Al Ghazal y el ciberdisidente Abdel Razak Al Mansouri, pagaron el precio de su indocilidad al régimen, escribiendo en el Net. En octubre de 2005, a Al Mansouri le condenaron a 18 meses de cárcel, oficialmente por "poseer sin autorización un arma de fuego". Aunque todo hace suponer que en realidad le condenaron por los artículos que escribió en el sitio www.akhbar-libya.com. En marzo de 2006 fue amnistiado, tras pasar un año detenido. Por otra parte, todavía no han identificado a los asesinos de Daif Al Ghazal. Ese periodista, extremadamente crítico con el Movimiento de los Comités Revolucionarios y el poder, apareció muerto el 1 de junio de 2005. El cuerpo presentaba numerosas señales de tortura.

Finalmente, el 1 de enero de 2007, Reporteros sin Fronteras seguía sin conseguir pruebas de que sigue vivo el periodista Abadullah Alí al-Sanussi al Darrat, desaparecido desde que le encarcelaron en 1973, sin inculpación ni juicio.

Como resultado de la misión en el país, Reporteros sin Fronteras pudo constatar que el Internet libio no estaba censurado. Además, desde que en marzo de 2006 salió en libertad Abdel Razak Al Mansouri, en el país no quedaba ningún ciberdisidente encarcelado. Por eso, en noviembre de 2006 la organización decidió retirar a este país de la lista de los "enemigos de Internet". Sin embargo, después han encarcelado a otro ciberdisidente, Idrees Mohammed Boufayed, por algunos artículos publicados en sitios de oposición.

MARRUECOS

Superficie : 446 550 km² (sin el Sahara Occidental).

Población : 31 478 000.

Idioma : árabe.

Jefe del Estado : Rey Mohammed VI.

Las esperanzas nacidas de la llegada al poder de Mohammed VI en 1999 se han ido desvaneciendo progresivamente. Los periodistas marroquíes tienen hoy que enfrentarse a actuaciones judiciales con graves consecuencias para el ejercicio de la profesión, incluso a pesar de que en los últimos años han disminuido los tabúes.

El porvenir del Sahara Occidental se aborda cada vez con más frecuencia. El incremento del islamismo, pero también las violaciones de los derechos humanos cometidas en los años de plomo, aparecen frecuentemente en las primeras páginas de la prensa, gracias a las audiencias públicas de la Comisión Equidad y Reconciliación, creada en abril de 2004. Finalmente, los periodistas más temerarios hacen investigaciones sobre el rey, y el papel del Palacio en la gestión del país. Investigaciones, que sin embargo, son la principal razón de que les condenen. El código de prensa marroquí contiene una veintena de artículos que establecen condenas privativas de libertad. Sobre los periodistas recaen algunas condenas desproporcionadas - que con frecuencia incluyen que el tribunal fije indemnizaciones muy altas por daños y perjuicios - cuando se trata de casos de atentado a la persona del rey y al régimen monárquico, a la patria y a la integridad territorial, y también a Dios o a la religión islámica.

Al margen de la puesta en libertad, el 29 de enero de 2006, del periodista Anas Tadili, director del semanario *Akhbar al-Ousbouaâ*, tras veintidós meses de detención, el año fue desastroso para los profesionales de los medios de comunicación. Incluso se saldó con el cierre, el 21 de diciembre, del semanario en lengua árabe *Nichane*, por "atentado al Islam". Censuras, acosos y actuaciones judiciales, perjudicaron a la prensa independiente a lo largo de todo el año. Por otra parte, el 24 de octubre se negó la entrada en el territorio del Sahara Occidental controlado por Marruecos a algunos periodistas extranjeros, conocidos por su cobertura de la situación de los derechos humanos.

En particular, dos publicaciones marroquíes en lengua francesa pagaron el precio de ese encarnizamiento político-judicial. El 7 de febrero, el Tribunal de apelación de Casablanca condenó al semanario *TelQuel* a pagar 500.000 dirhams (50.000 euros), en concepto de daños y perjuicios, a la directora de una asociación, que le había denunciado por difamación. Pocos días des-

pués, Aboubakr Jamaï, director de publicación de *Le Journal Hebdomadaire*, y el periodista Fahd Iraqui, fueron condenados a pagar una multa de tres millones cien mil dirhams (284.000 euros), por "difamación". La denuncia que llevó a esta condena la presentó el Centro Europeo de Investigación, Análisis y Consejo en Materia Estratégica (ESISC), después de que *Le Journal Hebdomadaire* publicara un dossier, en el que cuestionaba la objetividad de un estudio crítico, efectuado por ese instituto, sobre el Polisario, un movimiento secesionista del Sahara Occidental. Dos días antes de conocerse la sentencia de este caso se llevaron a cabo manifestaciones hostiles, presumiblemente orquestadas por las autoridades, delante de los locales del periódico, como consecuencia de la publicación por el periódico de una de las caricaturas del profeta Mahoma, publicadas en septiembre de 2005 en el diario danés *Jyllands-Posten*.

Finalmente, las fuerzas del orden marroquíes prohibieron varias veces que los periodistas cubrieran manifestaciones o juicios, y tomaran fotos incluso de un banal accidente de circulación. A Jamal Ouahbi, del semanario *Assahifa Al Maghribiya*, por ejemplo, le detuvo la policía judicial de Tetuán (a 300 km. al norte de Rabat) el 7 de noviembre, por fotografiar a tres detenidos, presuntos terroristas, cuando salían del tribunal de primera instancia de la ciudad. Le interrogaron sucesivamente el fiscal del rey y algunos miembros de los diferentes servicios de seguridad del Estado. Le quitaron la cámara fotográfica. A Hassan Fatih, corresponsal del canal por satélite *Al-Jazira*, le agredieron las fuerzas del orden cuando cubría una sentada de familiares de presos políticos el 15 de junio, en Rabat. Herido en el cuello y el hombro, tuvieron que trasladarle al hospital.

Marruecos bloquea el acceso a los sitios del movimiento independentista saharaui Frente Polisario, así como la publicación digital del movimiento islamista "Justicia y Beneficencia", que cuestiona la legitimidad del régimen monárquico.

SIRIA

Superficie : 185 180 km².

Población : 19 043 000.

Idioma : árabe.

Jefe del Estado : Bachar el-Assad.

El control institucionalizado de los medios de comunicación, así como el mantenimiento del estado de excepción, siguen justificando la detención de muchos profesionales de la información. En 2006 encarcelaron así a ocho periodistas y ciberdisidentes.

En la Siria del presidente Bachar el-Assad la arbitrariedad continúa siendo la norma. A los periodistas, y a los militantes políticos, pueden detenerles en cualquier momento y con cualquier pretexto. Se ven enfrentados a un poder caprichoso y rencoroso, que no cesa de alargar la lista de prohibiciones y tabúes. A lo largo del año 2006 detuvieron a varios periodistas por entrevistar a opositores en el exilio, participar en conferencias en el extranjero y, sobre todo, por criticar la política del Estado. Tuvieron que enfrentarse a interminables procedimientos judiciales en el tribunal militar de Damasco, en virtud de la ley de 1963 destinada a juzgar a cualquiera que haya atentado a la seguridad nacional.

El periodista freelance Ali Abdallah, que trabaja en el diario emiratounidense *Al-Khalif* y en los diarios libaneses *An-Nahar* y *Assafir*, fue condenado a seis meses de cárcel por denunciar en un artículo la debilidad de la economía siria. Detenido el 23 de marzo de 2006, no le juzgaron hasta pasados cinco meses. Presentado en primer lugar ante una jurisdicción ordinaria, el caso fue reenviado al Alto Tribunal de Seguridad del Estado y posteriormente al Tribunal de Damasco, que retrasó varias veces el juicio. Su hijo, Mohammed Abdallah, también ha sido condenado a la misma pena por contactar con el canal por satélite *Al-Jazira*, para denunciar la detención de su padre. Ambos permanecieron detenidos en secreto durante un mes. Ni los abogados, ni la familia pudieron comunicarse con ellos. Por otra parte, durante interrogatorios preliminares se les trató con violencia, con el objetivo de conseguir que confesaran.

Michel Kilo, una figura emblemática de la lucha por la democracia en Siria desde hace más de treinta años, fue detenido el 14 de mayo después de firmar la declaración "Beirut-Damasco, Damasco-Beirut", un comunicado de intelectuales sirios y libaneses que aboga por una reforma de las relaciones entre ambos países. También fueron detenidos, a lo largo del mes de mayo, varios militantes de los derechos humanos, entre los que se encuentra el abogado Anouar Bounni.

Inculcado entre otras cosas de "disensiones confesionales y raciales" e "insultos a instituciones y personalidades oficiales", a Michel Kilo, colaborador de varias publicaciones libanesas, podrían condenarle a cadena perpetua. Por sí solo, su caso pone de manifiesto las artimañas de la justicia siria, parte integrante del aparato represivo baasista. Cuando el juez de instrucción encargado del caso le había concedido la libertad provisional, un segundo magistrado le inculcó de nuevos cargos, impidiendo así que saliera. A fecha 1 de enero de 2007 Michel Kilo continuaba internado en la cárcel de Adra (cerca de Damasco), en espera del comienzo del juicio.

Con tres personas encarceladas por criticar a las autoridades en Internet, Siria es la mayor cárcel de Oriente Medio para los ciberdisidentes a los que, por otra parte, se les maltrata sistemáticamente y se les mantiene detenidos en condiciones muy difíciles. El gobierno prohíbe el acceso a los sitios de oposición en lengua árabe, y a los contenidos relativos a la minoría kurda de Siria.

TÚNEZ

Superficie : 163 610 km².

Población : 10 102 000.

Idioma : árabe.

Jefe del Estado : Zine el-Abidine Ben Ali.



En el país del presidente Zine el-Abidine Ben Alí, a los periodistas independientes o de la oposición les impiden trabajar por todo los medios. Vigilados y acosados, su libertad de movimientos cada día está más restringida.

Tras pasar quince años en los calabozos tunecinos, Hamadi Jebali, antiguo director del semanario *Al Fajr*, está sometido ahora a una estrecha vigilancia. Los tejados y las terrazas de su vecinos se han visto invadidos por agentes de la seguridad del Estado, que controlan sus menores acciones y gestos, y le espían en su intimidad. Esta vigilancia alcanzó el paroxismo en noviembre de 2006, cuando unos policías estorbaron la celebración de la boda de la hija del periodista. Hamadi Jebali forma parte de los 1.600 presos políticos a los que, el 25 de febrero de 2006, se les concedió un indulto presidencial. Le condenaron en 1992 a dieciséis años de cárcel, por "pertenencia a una organización ilegal" y "voluntad de cambiar la naturaleza del Estado".

Las familias de los periodistas encarcelados, que luchan para que su familiar no caiga en el olvido, se ven sometidas a muchas presiones. El letrado Mohammed Abbou, abogado y defensor de los derechos humanos, está encarcelado desde marzo de 2005 por un artículo crítico con el jefe del Estado, difundido por Internet. Después de que, el 13 de agosto de 2006, Samia Abbou iniciara una huelga de hambre para pedir la libertad de su marido, sus idas y venidas son seguidas por un ejército de policías, apostados delante del domicilio familiar, que no dudan en bloquear el acceso a algunos visitantes. El 16 de agosto maltrataron a dos periodistas, Slim Boukhdhir y Taoufik Al-Ayachi, cuando acudían a su casa para hacerle una entrevista. El 26 de octubre, unos agentes armados amenazaron a la señora Abbou, delante de sus hijos, cuando pretendía llegar a su casa. Aterrorizada, no se atrevió a entrar y se refugió en

casa de unos amigos. Finalmente, el 7 de diciembre y ante la mirada impasible de la policía, unos grupos de jóvenes le agredieron, dos veces, en la carretera que va a la cárcel de Kef (a 170 km. de Túnez), donde está internado su marido. El opositor político Moncef Marzouki, el periodista Slim Boukhdhir y el abogado Samir Ben Amar, sufrieron el mismo trato.

A los periodistas extranjeros que acuden a Túnez les impiden realizar su trabajo libremente. Por ejemplo, durante su estancia en el mes de noviembre, la periodista argelina Meddi Adlène estuvo constantemente seguida por un grupo de seis policías de civil, mientras que otros agentes permanecían desplegados alrededor de su hotel. Aunque los servicios de inteligencia no interrumpieron las entrevistas que llevó a cabo, el hecho de permanecer cerca y visibles tenía como objetivo intimidar a sus interlocutores. Por otra parte, a la periodista francesa Léa Labaye, del sitio *Bakchich.info*, la expulsaron de Túnez el 16 de septiembre, sin darle ninguna explicación.

Como consecuencia del asunto de las caricaturas de Mahoma, publicadas en septiembre de 2005 en el diario danés *Jyllads-Posten*, Túnez aplicó también medidas de censura a publicaciones que "ofenden al Islam". Así, en aplicación de una ley relativa a la protección de la religión, se prohibió la edición del 19 de septiembre de 2006 del diario francés *Le Figaro*, que incluía un artículo firmado por Robert Redecker, titulado "Frente a las intimidaciones islamistas, ¿qué debe hacer el mundo libre?". La misma ley ya justificó, en febrero, el embargo del periódico *France Soir*, que reproducía las controvertidas caricaturas.